SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Nelson Nicoliello
Luis A. Vázquez Praderi

Crónicas de la JUSTICIA *en el* URUGUAY

FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA

MONTEVIDEO
1997

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Nelson Nicoliello
Luis A. Vázquez Praderi

Crónicas de la JUSTICIA *en el* URUGUAY

FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA

MONTEVIDEO
1997

Montevideo, 24 de noviembre de 1997.

Srta.
Adriana Pardo Iriondo
Suprema Corte de Justicia.
Presente.

De nuestra más elevada consideración:

Es para nosotros muy grata oportunidad, la de expresarle nuestro agradecimiento por la relevante colaboración que hemos recibido de Ud., con motivo de la edición del libro *Crónicas de la Justicia en el Uruguay* y de su presentación en importante acto público.

Estos acontecimientos no habrían sido evidentemente posibles, sin el apoyo que, con tanta generosidad, nos ha prestado en todo momento.

Debemos destacar, muy especialmente, el decisivo estímulo, que obvió toda clase de dificultades y que puso de manifiesto siempre su amplia cultura, así como los muy útiles consejos y, sobre todo, su auxilio fundamental para la revisión de los originales y de las pruebas de imprenta.

Nos permitimos, con todo gusto, dar conocimiento de este decisivo apoyo al Sr. Presidente de la Suprema Corte y, por intermedio del mismo, a la Corporación en pleno, lo que consideramos de toda justicia.

Reiterando nuestro reconocimiento, y quedando a sus gratas órdenes, la saaludan con la más distinguida consideración:

Nelson Nicoliello Luis A. Vázquez Praderi

Esta obra homenajea a todos aquellos que nos antecedieron en nuestros cargos a lo largo de estos noventa años.

Dr. MILTON H. CAIROLI MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

Dr. JORGE A. MARABOTTO LUGARO
MINISTRO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

Dr. LUIS TORELLO
MINISTRO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

Dr. RAUL ALONSO DE MARCO
MINISTRO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

Dr. JUAN MARIÑO CHIARLONE
MINISTRO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

Los autores agradecen la importante colaboración recibida de magistrados, funcionarios judiciales, y muy especialmente, de los historiadores Profesores FLAVIO GARCÍA, OSCAR BRUSCHERA, y del ex-Director General de la Suprema Corte de Justicia, Prof. Esc. HORACIO CAILLABET.

INTRODUCCIÓN

Fue propósito inicial de los autores, el de preparar un panorama histórico sobre el acontecer de la actividad judicial en el país; pero atendiendo a la realidad de que el tratamiento científico de la Historia requiere de profundos conocimientos en la materia y de una actualización técnica que reconocen no poseer, y que las fuentes de este trabajo se refieren a lo que Herodoto llamaba "cosas vistas y oídas": vale decir a los hechos que por su labor vivida en el ambiente de la Justicia, y a los recogidos de los libros de prestigiosos historiadores y juristas y de los propios documentos que tuvieron oportunidad de consultar, y no a una elaboración de carácter original investigativo ni a una reflexión profunda sobre estos informes: se justifica que llamemos "Crónicas" y no "Historia" al fruto de este esfuerzo. Y "Crónicas", así, en plural, y no meramente "Crónica", pues la riqueza de materiales, sus diferentes aspectos y el ser difícil sin una larga preparación, elaborarlo de materia claramente sistemática, nos obligan a tratar por separado -sin perjuicio de indicar las obvias relaciones- las diferentes realidades observadas.

Ya a punto de cumplirse los noventa años de existencia de la Suprema Corte de Justicia -nacida como Alta Corte de Justicia en 1907- hemos considerado oportuno divulgar ese resultado de nuestros estudios, como justo homenaje al acontecimiento y a todos aquellos que lo han hecho posible, y para divulgación de ciertas realidades no siempre al alcance de todos; particularmente, las muy interesantes que uno de los autores ha tenido, con su constancia, la suerte de rescatar de los Libros de Acuerdos que la Corte guarda en sus archivos, y que retratan la vida judicial desde la época colonial hasta nuestros días.

De esta compulsa podrá el amable lector deducir sin esfuerzo, ya desde el comienzo, aquellos valores que han caracterizado a nuestra Justicia, y le han valido la consideración, la confianza y el respeto de toda una nación.

Veremos a nuestros tribunales nacer, representados por el Cabildo colonial, en un modesto rancho de techos de cuero y paredes de adobe, sin recursos propios para renovar su libro de actas, modestia económica que los acompañará siempre, injustamente tratados en instancias presupuestales; pero que

siempre han superado con dignidad, sin que la escasez disminuyera su vocación ni su eficacia. Los veremos apegados sin renuncias a sus dos grandes principios de autonomía y de apego a la norma jurídica, con los que afrontaron a los regímenes de fuerza cuando ello fue necesario y dieron lecciones sobre respeto a los derechos individuales contra los abusos de los invasores. Y los veremos también en todo momento manejarse con honestidad y austero continente, sensibles ante el mandato constitucional que los hace custodios de los débiles, pero sin que, como en el inmortal consejo del Quijote a Sancho, el llanto del desvalido les hiciera desviar la vara de la justicia.

Ciertamente que la actividad jurisdiccional no se limita a lo que sucede en los estrados de la Administración de Justicia: la hay también en los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; en el Ministerio Público; en la Justicia Electoral y en la Contable; pero razones de tiempo, de espacio y de acceso más favorable a la información, nos ha aconsejado a guardar estos límites.

Se advertirá asimismo que el centro de nuestra modesta investigación reposa especialmente en cuanto se relaciona con la inicial Alta Corte de Justicia y con la actual Suprema Corte. Ello no significa, como es natural, ignorar la importancia del resto de los órganos judiciales -que también han sido tratados con la extensión posible-, sino que fue motivado por la fecha a conmemorar y poque la Corporación tiene, jurídica e históricamente, la justa representación interna y pública del Poder.

Poder de tanta importancia que -como lo ha expresado con razón recientemente un Presidente del Cuerpo- no existe casi problema, social, económico o político, sobre el cual la Justicia nacional no deba ser llamada a decir la úlltima palabra, dando en definitiva la solución. Lo que, aunque no siempre se reconozca en voz alta, es la prueba de la confianza que ella se ha sabido ganar, superando cualquier clase de dificultades, ante la ciudadanía.

PRIMERA PARTE

PARTE PRIMERA

ANTECEDENTES

SECCIÓN PRIMERA
LA JUSTICIA COLONIAL ESPAÑOLA.

CAPÍTULO I
AUTORIDADES JUDICIALES CON JURISDICCIÓN SOBRE LA BANDA ORIENTAL.

1. Los órganos judiciales que radicaron en la propia Banda Oriental, fueron pocos y de relativa jerarquía, como correspondía, dentro del inmenso imperio hispánico, a su primitiva condición de pequeño municipio colonial.

Este municipio, como es bien sabido, estuvo en sus comienzos representado por una serie de construcciones militares - que por disposición real practicó el Gobernador y Capitán General de Buenos Aires, para evitar la sutil invasión portuguesa- y algunas pocas chozas de pioneros: militares, funcionarios públicos, corambreros. Es el germen de lo que un siglo más tarde sería nuestro Estado.

No puede decirse que la ciudad de Montevideo tenga una fecha formal de fundación, sino que se ha tomado, al efecto, la de la instalación de su organismo administrativo y judicial: el Cabildo, en 1730, cuyas importantes atribuciones veremos.

2. Naturalmente que, por su calidad de jerarca menor entre jerarquías mayores, la incipiente villa de Montevideo conoció magistraturas del Imperio que tenían su sede fuera del territorio y otras, las menos, dentro. En este sentido, corresponde mencionar a:

a) El **Rey**, juez mayor para todo el Imperio, con sede en España(al principio en Toledo, desde el siglo XVI; luego, en Madrid). El monarca, en general, se expedía a través del Consejo Supremo de

Indias o asesorado por él, o por sus Fiscales; algunas veces en forma directa. Así fue, por ejemplo, que intervino mediante el instituto de la *consulta* en las causas más importantes de la materia penal, las que imponían condenas corporales; instituto que, con obvias variantes, se ha mantenido hasta la fecha.

b) **El Real y Supremo Consejo de Indias** al que nos hemos referido en el literal anterior, fue creado en 1524, para entender - además de asesorar al Rey y cogobernar con él- para decidir judicialmente de casos muy importantes; no obstante lo cual lo hizo con mucha frecuencia en casos de recursos y muchas veces en forma directa. Se expedía por Autos Acordados.

c) **Las Reales Audiencias** eran órganos colegiados de categoría judicial, a modo de tribunales de apelaciones de las magistraturas inferiores, como los cabildos. Se habían originado en la Península, pero con motivo de la Conquista, se extendieron a América para transmitir las disposiciones reales y "conservar y desenvolver los nuevos reinos". En Buenos Aires, se había creado una primera Audiencia en 1661, que se suprimió en 1671 (en 1730, fecha de la instalación del Cabildo montevideano, la Real Audiencia de Charcas tenía jurisdicción sobre el Río de la Plata) pero volvió a establecerse en 1783. Esta Corporación bonaerense era presidida por el Virrey, así como el Gobernador habría de presidir el Cabildo; pues no se reconocía el principio de la separación de poderes.

d) **El Virrey.** El Virreinato del Río de la Plata fue creado por Real Cédula del 1°. de agosto de 1776. El Virrey intervenía como juez de alzada contra las sentencias de primera instancia respecto de las autoridades radicadas en Montevideo, y de las denuncias y quejas contra esas mismas autoridades, obviando por esta vía la necesidad de acudir ante la Audiencia de Charcas, en tanto no se estableció, como luego ocurrió, la Real Audiencia de Buenos Aires.

En puridad, y según lo corriente en otros virreinatos no debió tener facultades judiciales desde que hubo Audiencia en el Río de la Plata.; pero se le siguió empleando en asuntos muy especiales, como, por ejemplo, lo hizo el Rey, para que se ocupara de juzgar a deudores provenientes de otras regiones.

e) En Montevideo, la primera autoridad con facultades judiciales fue

el **Cabildo.** Más adelante, lo habría de ser también - aunque sólo parcialmente- , el **Gobernador** (especialmente para las causas militares) y los asuntos mercantiles habrían de ser materia del Juzgado de Mercaderes, hasta que, ya a fines de la colonia, se creó el importante **Tribunal del Consulado.** Hubo también otros organismos, con facultades delegadas o subdelegadas de autoridades bonaerenses. Pero de ellos nos ocuparemos oportunamente, por separado. (3)

CAPÍTULO II
EL CABILDO.

3. Luego de que el rey Felipe (inquieto por la cercanía de los portugueses, con la fundación de la Colonia del Sacramento, y hasta algunas construcciones militares y navales en las proximidades de la misma Montevideo) insistiera muchas veces ante el Gobernador Zavala para establecer una población estable y jurídicamente constituida donde hoy está nuestra Capital; por Real Despacho del 15 de julio de 1728, ordenó finalmente que se constituyera una ciudad- fortaleza, lo que se llamaba un "presidio", como demostración de la presencia armada de la .Corona en estos lugares. Facultó además al Gobernador y Capitán General de Buenos Aires para organizarla.

Zavala, atendiendo esta vez rápidamente a la voluntad real, dispuso la instalación de un cabildo - lo que implícitamente supuso el fundar una ciudad como autoridad judicial y además, también, como ente municipal de Derecho- por un Auto dictado por él en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1729.

Se constituyó luego en Montevideo, y procedió a instalar ese cabildo, lo que hizo constar por el Acta labrada aquí el 1° de enero de 1730, que, desde entonces, se ha tenido como de verdadera fundación de la "ciudad de San Felipe (por el rey Felipe) y Santiago (por el santo de la fecha) de Montevideo". (4)

Pero, ¿qué era un cabildo?

4. La palabra ***cabildo***, según algunos autores, es sinónima de "capítulo". Vemos, por ejemplo, que en España se llamaba "capítulos" a algunos organismos colegiados, como los ayuntamientos y, con más frecuencia, las corporaciones religiosas; probablemente, porque, al redactar sus decisiones, las divi-

días en capítulos, como hacemos hoy con las leyes, los decretos, los contratos, etc. También es posible ver otro uso corriente de la palabra mencionada y de sus derivados, en otros casos como el nombre que da nuestro Código civil a la convenciones prematrimoniales sobre sociedad conyugal, al llamarlas "capitulaciones matrimoniales"(según SECCO ILLA, porque esas convenciones se suelen redactar también en capítulos, o sea que se "capitulan"). Para otros, tanto "cabildo" como "capítulo"(sinónimos) provienen del latín *"caput"*(cabeza); y se les llama así por ser la cabeza o mayor autoridad de un lugar o institución.

5. En el Acta ya mencionada de 1730, Zavala se refiere al "Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Montevideo". En estas pocas palabras se hace, en realidad, una buena definición de la entidad: "Cabildo", como vimos, por ser, en ese momento, la principal autoridad propia de la nueva población;"Justicia", como es obvio, por sus facultades judiciales;y "Regimiento"(de"regir"), por tener, además, .funciones municipales. Por cuyas funciones se suele llamar también a los cabildos "ayuntamientos" y"concejos".

6. **El Alcalde.**

Este importante jerarca colonial y metropolitano, el Alcalde, fue un necesario funcionario de la Corona española.

Funcionario que, entre nosotros, tuvo generalmente, aunque no exclusivamente, facultades judiciales; en su origen, en España, fue, fundamentalmente, de carácter municipal, especialmente en las pequeñas localidades: algo así como el antecedente de nuestros actuales Intendentes. ..

A tales efectos, todos sus miembros eran cabildantes(integrantes del cabildo);pero se distinguía entre ellos a los "Jueces" propiamente dichos (Alcaldes de Primero y de Segundo Voto), y a los "Regidores", como vecinos ocupados de los asuntos de la ciudad, o sea fundamentalmente municipales. Esto no impedía que algunos regidores tuvieran facultades judiciales y hasta agregaran el nombre de Alcalde a ciertas actividades específicas (como el Alcalde de Santa Hermandad, el Alcalde Provincial) o de auxiliares de la Justicia, como el Alguacil. Ni tampoco que cuando se trataba en el Cuerpo un asunto importante, penal o municipal, no intervinieran todos los cabildantes, con voz y voto. El escribano FERRÉS nos informa de un acuerdo en que se recogió el voto de todos los cabildantes para pronunciar una sentencia de pena de muerte:tanto Alcaldes como Regidores. (6) En el Acta de Zavala, se mencio-

na, como cabildantes magistrados, o sea con facultades jurisdiccionales, a un"Alcalde Ordinario de Primer Voto" y a un "Alcalde de Segundo Voto". En sentido general el "Alcalde Ordinario", se dice que era "el juez ordinario que administraba justicia en algún pueblo y presidía, al mismo tiempo, el concejo". Su nombre derivaba del árabe *"alcadí":* juez. Pero el Alcalde que se halla más frecuentemente en las ciudades y villas hispánicas, es el "presidente del ayuntamiento de cada pueblo o distrito municipal, encargado de ejecutar sus acuerdos, dictar bandos para el buen orden, la salubridad y limpieza de la población y de cuidar en todo lo relativo a la policía urbana. Es además, donde no hay autoridad superior, representante y delegado del rey y de su gobierno en el orden administrativo" (7)

Esta doble función, administrativa y judicial, se puede advertir bien en la *Nueva Recopilación,* que fue Derecho vigente en España y sus colonias, al fundarse nuestro Cabildo. Por el auto, *verbi gratia,* del 20 de octubre de 1704, se recuerda a estos funcionarios un Auto anterior que prohibía dejar toda clase de carruajes solos en la calle por la noche, a los propietarios y "alquiladores"de ellos:"i en quanto á dexarlos en ellas de dia no se haga novedad, ni se les impida, con calidad de que no embaracen el passo". Esto es típicamente municipal. En cambio, en otro Auto del 11 de noviembre de 1704, se les atribuye una específica función de jueces: deben entender en "el conocimiento de la causa de un preso que cometió delito dentro de la Casa de Campo, de que la Sala avia intentado conocer [porque] toca á la Junta de Obras y Bosques, i á su Alcalde, como Juez Ordinario assi de la referida, como de las demás que ocurrieren en los Sitios Reales".(8)

7. Esta doble función se aprecia también en el Cabildo de Montevideo.

Vemos cómo intervenía en el aspecto administrativo, cuando se nos informa que: "Dentro de las atribuciones jurisdiccionales [aquí, la palabra "jurisdiccional" no se refiere a "judicial", desde luego, sino a competencia administrativa] de los cabildos, se destacaban: la administración de los bienes comunales; funciones policiales, de higiene; milicias, enseñanza primaria, control de las pesas y medidas, indicación del precio del pan, señalamiento en forma anual de los precios de venta para los artículos para abastecimiento de la población, control de las calles, de su alumbrado, administración de las cárceles; medidas para la conservación de las fuentes que proveían de agua a la ciudad. [.....] Señalaba el monto de la fianza que los Gobernadores de la ciudad debían depositar en el momento de ejecer sus

funciones como tales. Adoptó los medios pertinentes para que se respetaran las leyes que se dictaba en favor de los indios. Autorizaba la apertura de escuelas para la educación de los niños y ejercía su vigilancia sobre las mismas. En acuerdo con el Gobernador, tomó también las medidas tendientes a la fundación del primer hospital de la ciudad". (9)

En el aspecto estrictamente judicial, se nos dice, además, que: "Montevideo, bajo esos conceptos, tuvo, desde el primer momento, como justicia propia de la ciudad, la llamada *ordinaria,* radicada en los Jueces del Cabildo, comprendiendo ella la civil y la criminal".(10)

8. Cuando se estableció la Gobernación (antes, como vimos, le correspondía a Zavala) el Gobernador presidía las sesiones, con voto "preferencial" pero sin voz (sin iniciativa ni deliberación), lo que en los hechos provocaba muchos conflictos. Ya volveremos sobre este tema.

9. "En las postrimerías coloniales - dice FERRÉS- aparecen los Jueces de Calle, con facultades de excepción para las primeras actuaciones en caso de urgencia [obsérvese la similitud, aunque no sea exactamente lo mismo, con "las primeras y más urgentes diligencias" de nuestro moderno Derecho Procesal Penal]. Antes, en los suburbios y vecindades, los Alcaldes o Jueces de Barrio, con funciones en realidad policiales (vigilancia, prevención)". (11)

10. **Jurisdicción territorial.** Correspondía al Cabildo de Montevideo el territorio limitado por el Río de la Plata, desde la barra del arroyo Cufré hasta las sierras de Maldonado, con "mojón" en el Cerro Pan de Azúcar; las cuchillas que dividen los ríos Santa Lucía y San José de una parte, y al Yi y al Río Negro por otra; al Oeste, el arroyo Cufré, desde su nacimiento en los cerros de Ojolmí hasta su desembocadura en el Río de la Plata; por el Este, las sierras mencionadas, hasta el nacimiento del Cebollatí. Vale decir, lo que hoy son los departamentos de Montevideo, Canelones, y parte de Maldonado, Florida, Lavalleja y Flores. (12)

11. **Una pobreza notoria.** La ciudad naciente, sin industrias - a no ser la preparación del pan para los soldados de la guarnición, que era la única actividad rentable de la población común- , sin comercios importantes y con personas sin capacidad para pagar impuestos (de ellos se les exoneró por la monar-

quía durante mucho tiempo) no pudo dar a su Cabildo (ya por miseria, ya por una pertinaz avaricia de los no miserables) los medios necesarios para su funcionamiento.

" El Cabildo de Montevideo - dice BAUZÁ - habia escrito a Felipe V poco tiempo atrás [de su instalación]:'Y en medio de que no tenemos comercio alguno ni donde vender nuestros frutos, gozamos de tranquilidad y del corto interés de la guarnición de este presidio nos deja por ellos en el bizcocho que se destina para su manutención, el que se fabrica entre los vecinos' [.....] Con motivo de haberse llenado el primer libro que servía para asentar las actas del Cabildo, encontróse éste que no tenía medios para proporcionarse otro, y resolvió lo siguiente:'Habiendo propuesto no tener la ciudad ningún haber ni otro arbitrio para el costo de dicho libro, determinamos entre todos, diese cada uno lo correspondiente para dicho costo.' " (13)

Ya veremos qué dificultades tuvo la Sala Capitular para tener un local y alhajarlo.

CAPÍTULO III
LOS CABILDANTES.

12. **Designación y condiciones exigidas.** La primera elección la hizo Zavala, como ya hemos tenido oportunidad de ver, al redactar el Acta de instalación. Las siguientes se hicieron por sorteo, en la sesión que se realizaba el primero de enero de cada año. Quiere decirse que el cargo, salvo reelección, duraba un año, de ahí el nombre de "alcaldes cadañeros" que se les solía dar. Se llegó a vender, mediante remate, los nombramientos; menos los de Alcaldes de Primero y de Segundo Votos. (14)

Recién con el gobierno patrio, en la época artiguista, se obtuvo una integración más democrática, eligiéndose a los cabildantes por medio de vecinos de confianza general, en cabildos abiertos, como el que el 26 de febrero de 1815 que se realizó bajo el gobierno de Otorgués.

Cabe empero recordar que por muy poco tiempo, al estar vigente la Constitución liberal española de Cádiz, en 1812, las designaciones se hicieron por votación popular. Esta Constitución es la que desde esa fecha, le ha dado su nombre a la más bella plaza de nuestra Capital, aunque en forma errónea, popularmente, se la suela llamar "plaza Matriz".

Para ser cabildante, a diferencia de lo que ocurría en Buenos Aires y otros lugares de la Metrópolis y de las colonias, por mucho tiempo no fue necesario saber leer y escribir: tenían, los analfabetos, la posibilidad de hacer que se firmara a ruego por ellos. Recién en 1755, el Gobernador Viana dispuso que, para ser Regidor, se debía saber leer y escribir. (15) Es interesante observar, en sus Libros de Acuerdos - como ha tenido oportunidad de verlo uno de los autores en el entonces archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Primer Turno- muchas veces cruces en lugar de firmas, en un grueso y muy blanco papel hecho a mano, con una bella caligrafía en tinta violeta todavía brillante, en cuyos trazos lucía frecuentemente, adherida aún, la fina arenilla que se usó antes de la invención del papel secante.

En cambio, debían ser "hidalgos"(vale decir, dueños de una casa o un predio rural: "hijos de algo"; condición que se reconoció por Zavala a todos los primeros habitantes de la ciudad, precisamente donándoles tierras) y "cristianos viejos" (o sea: que no fueran "inferiores" - esclavos, siervos, miserables; con oficios "viles", como el de verdugo- ni de raza moruna, india o judía, ni marranos).(16)

Como "representaban al pueblo y eran cabeza de la comunidad [....] debían ser naturales de los reinos españoles y estar afincados en los pueblos en los que desempeñarían sus funciones (el concepto de vecino lo daba el tener casa poblada [habitada]). Otras calidades exigibles eran la honradez demostrada por el aspirante al cargo; que tuviera más de 18 años de edad [curiosamente, la edad requerida para el cargo de edil departamental en la reciente reforma constitucional];no fuera sordomudo ni perteneciera al clero, y, desde 1755 en Montevideo, ya se dijo, no ser analfabeto (17)

En la época republicana, por el Reglamento General de Justicia, en un artículo adicional agregado por la ley patria del 22 de septiembre de 1829, "para ser electo Alcalde Ordinario, suplente y Defensor de menores y esclavos, se necesitaba ser vecino y haber residido un año al menos sin interrupción, antes de su nombramiento"(18), en el lugar de sus futuras funciones.

13. **Retribuciones.** Los Regidores ejercían su cargo gratuitamente, como todavía hoy lo hacen los ediles. Se consideraba un honor desempeñar el cargo (que era, pues, "honorario") y un deber para con la comunidad. Los jueces, o sea los Alcaldes de Primero y de Segundo Voto, tenían un modesto ingreso por concepto de costas, según cantidades establecidas por aranceles oficiales (como el famoso que dictó en Lima, en el siglo XVIII, el Virrey Marqués de la

Cañada y que se empleó entre nosotros, para toda la Justicia primero, y para la Justicia de Paz hasta 1947, año en que ésta se presupuestó, después). (19).

14. **El vestido del Cabildante.** Es interesante observar cómo la evolución económica y las costumbres de la colonia se fueron reflejando, a través del tiempo, en las vestiduras exigidas a los cabildantes o, cuando menos, usuales en ellos.

La pobreza de la época inicial anteriomente comentada, hizo que no se exigiera ropas especiales para el cargo, ni siquiera el traje negro impuesto para los cabildantes en Buenos Aires. Por previsión de Zavala, "a nuestros jueces coloniales les fue dado concurrir a todos los actos judiciales con traje de *color honesto*, de color oscuro, sin necesidad de que fuera, precisamente, negro.(20)

Ya avanzado el siglo XVIII, y al parecer habiendo prosperado la economía de la ciudad (había fabricantes, como Maciel; molineros, armadores de buques, etc.) la riqueza del vestido de gala de los cabildantes fue notable, como lo ha destacado FALCAO ESPALTER en un minucioso relato, que daría lugar a dudas por su boato y por su autenticidad, si no fuera porque responde casi exactamente al traje original de cabildante que se guarda en nuestro Museo Histórico Nacional: "calzón corto de seda azul marino, sujeto por una hebilla de plata finamente labrada sobre la media sedeña, rosa hasta el matiz de cárdeno. El cabello, de peluca empolvada sujeta atrás por un lazo también de seda, de color verde. La cabeza tocada con un gigantesco sombrerón de amplias y algo ondulantes alas, de castor negro y copa alta. La capa española al desgaire de los hombros como una percha de exigua figura. Los puños decorados con hebillas de plata que sujetan la bocamanga de la chupa azul claro, bordada con alamares de seda verde. [.....] Un bastón apretado por una mano que sale de puños almidonados y orlados de encajes catalanes. Un cordón de oro casi imperceptible que rodea el cuello y va a dar en la mano derecha, que presiona un par de impertinentes de nácar, ahora caídos con el brazo junto a la pierna del viandante. Zapatos de charol francés cubiertos por un ancho lazo de raso negro, bajo un aro de plata perulera, sirven relativamente de base a la negra pero alta estampa del señor capitular." (21)

A comienzos del siglo XIX, en esas ropas se pone de manifiesto la austeridad y seriedad de la nueva época. Al decir de don Isidoro DE MARÍA, por el 1800, "el traje de gala del cabildante era calzón corto y casaca negra, chupetín de raso blanco bordado de oro, media negra de patente, zapatos con hebilla y piedras de lujo, sombrero apuntado, llevando por supuesto cada cabildante su

vara simbólica de ballena, llamada vulgarmente de la justicia, de forma cilíndrica, la misma que emùñaban en el acto de sus consistorios públicos" (22)

No nos ha sido posible hallar tales varas de justicia en los museos y depósitos oficiales ni en los grabados de la época (las imágenes que los muestran son, en verdad, reconstrucciones ideales de tiempos posteriores: no de entonces ni tomados directamente de la realidad). Pero en un inventario labrado a mediados del siglo pasado, con oportunidad de un cambio de titulares (jueces de paz) en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, hemos advertido entre otros bienes allí relacionados, que se menciona "una vara de justicia".

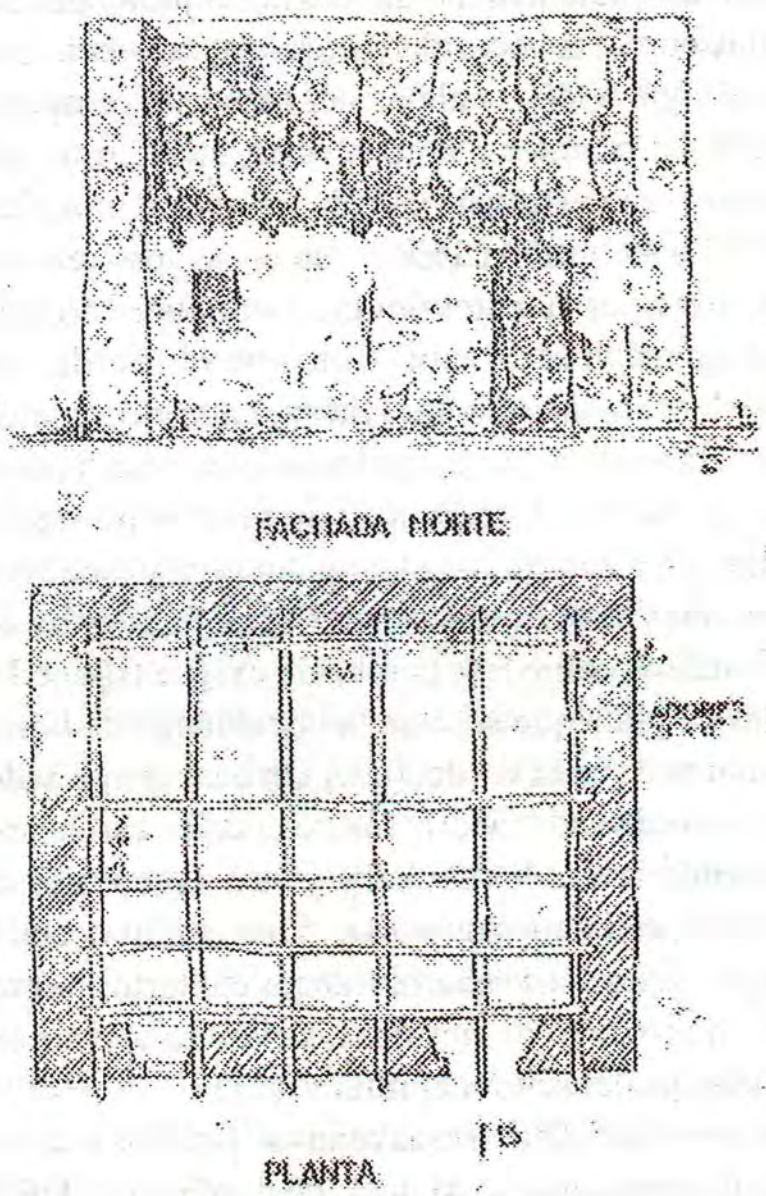


Fig. 1 - La casa de Pedro Gronardo (II) - Interpretación del Arq. Carlos Pérez Montero.

CAPÍTULO IV
EL LOCAL DEL CABILDO.

15. "En el Plano de la Península de Montevideo, realizado por el Ing. Domingo Petrarca en 1730, - dicen REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO- aparecen señalados el lugar destinado a *Plaza Mayor* y los señalados para la *Iglesia Matriz* y la *Casa del Cabildo,* que son los que actualmente ocupan. La construcción de ambos edificios, como se verá, demoró años, por lo que debieron adoptarse soluciones provisionales." (23)

En efecto, no fue fácil hallar locales para el cuerpo comunal montevideano, antes de que se levantara el conocido edificio neoclásico proyectado por el arquitecto español Tomás Toribio.

16. El 20 de diciembre de 1729, el Gobernador y Capitán General don Bruno Mauricio de Zavala, en el Auto previo a la instalación del Cabildo, resuelve la localización del mismo en la llamada *casa de Gronardo:* será:

El primer local de la Sala Comunal y de Justicia de Montevideo.

En el Auto mencionado, Zavala había dispuesto "elegir Cabildo, Justicia y Regimiento para lo cual elijo y nombro para Sala Capitular de Ayuntamiento la [casa] que se compró por cuenta de Su Majestad de los bienes del Capitán Pedro Gronardo, difunto, para que en ella se hagan las Juntas del Ayuntamiento y Acuerdos Capitulares."(24)

En el plano levantado por el ingeniero Petrarca sobre la bahía de Montevideo y en el croquis adjunto, con el proyecto de amanzanamiento de la nueva ciudad, no se advierte la indicación relativa a la "casa de Gronardo". Sin embargo, se la indica en el reparto de predios proyectado por Millán: se la ubica en la "Quadra 5, siguiendo siempre la ribera del Puerto y en ella hallé una casa de adobe que fue de Pedro Gronardo, difunto, por cuya muerte se compró lo edificado, por cuenta de S.M. y se aplicó para la habitación del Cirujano, en un solar de 50 varas en quadro".

En realidad, la casa no estaba exactamente dentro del solar indicado, excediendo parcialmente de sus límites. Por eso, en la sesión del Cabildo del 20 de diciembre de 1734, se resuelve reintegrarla al Capitán de la Guarnición - que, como vimos antes, había dispuesto de ella para su cirujano- "·por no

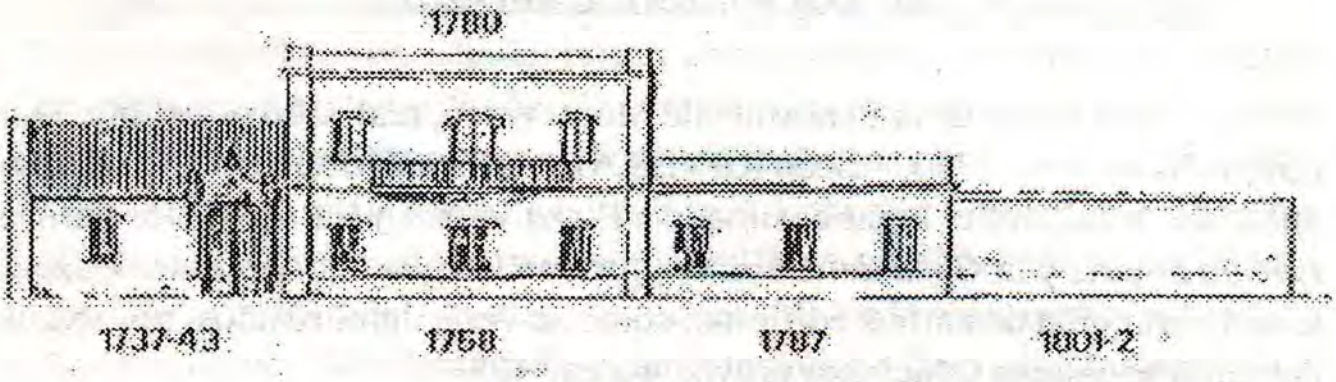


Fig. 2 - Primer edificio del Cabildo. Los años indican las etapas de su construcción. En 1803 fue demolido para levantarse el actual edificio.

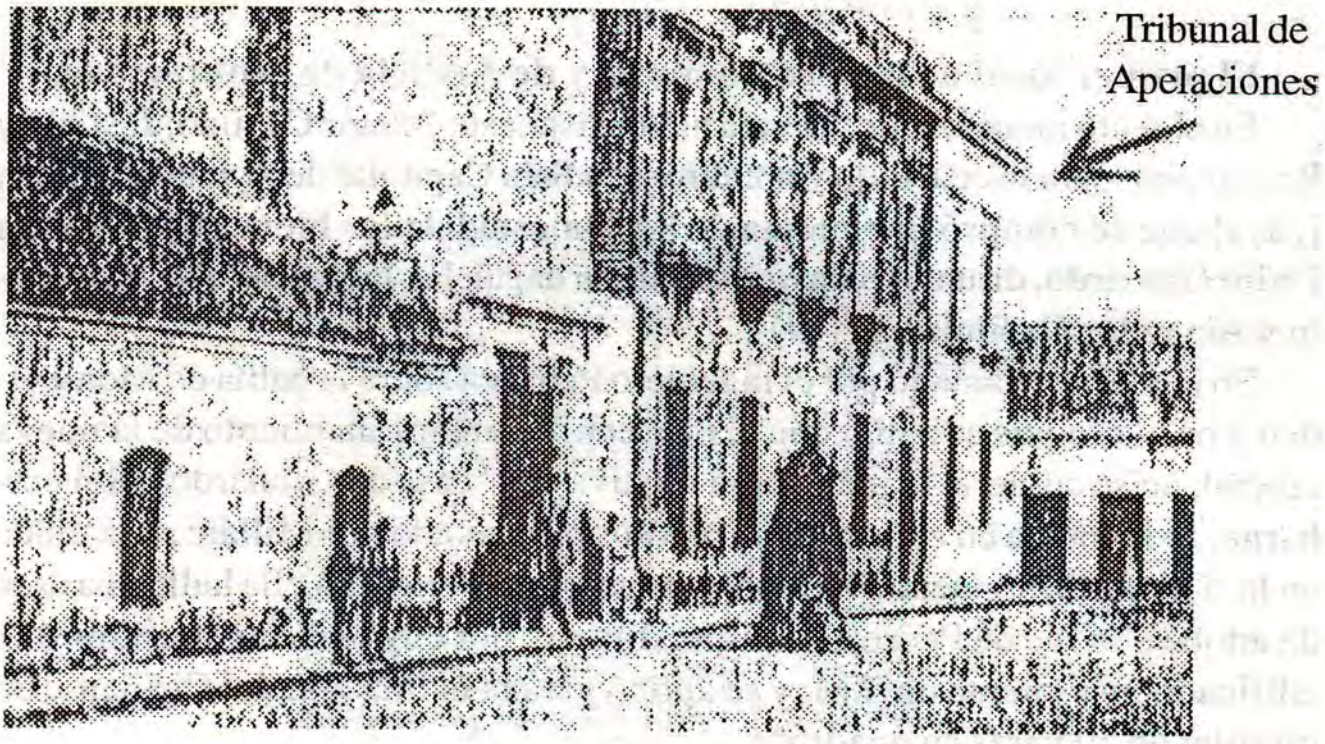


Fig. 3 - El Fuerte: despacho y residencia de gobernantes del Coloniaje, fue luego sede de la Presidencia desde el 6 de noviembre de 1830 al 24 de mayo de 1880. Demolido, en sus terrenos está ahora la Plaza Zabala.

tener esta Ciudad forma de poderla componer, procediendo juntamente estar en sitio ajeno y en medio de la calle Real". (25)

Por otra parte, el modesto rancho de paredes de adobe y techos de cuero necesitaba de urgentes reparaciones. Mientras se hacía esos arreglos, el Cabildo se reunió en la casa del jefe de la guanición, diciendo éste que: "Habiendo sido llamados todos los individuos aquí expresados a la casa de mi morada por no haberla de Ayuntamiento", así lo autorizaba. Las reparaciones realizadas posteriormente, con la lentitud propia de la escasez de personas entendidas y de recursos, según PÉREZ MONTERO deben haber sido el cambio de los cueros del techo por tejas, la ampliación del local existente y la colocación de ventanas. (26)

En los primeros tiempos de la población - nos cuenta el arquitecto Juan GIURIA- "parece fuera de duda que los materiales empleados en esas modestas construcciones, debieron ser piedras en bruto o adobes, ambos asentados con barro, para los muros [esto puede advertirse aún en las ruinas de la Colonia del Sacramento]; troncos y ramas de sauce o de otros árboles, traídos desde los montes de la barra del río Santa Lucía, para confeccionar la armadura del techo que sería a dos aguas, y paja brava para la cubierta. Las tejas debían ser muy caras, pues, como ya dijimos, era necesario importarlas desde la vecina orilla, donde ya se las fabricaba desde el año 1604. Con toda seguridad, el pavimento se limitaría a la tierra fuertemente apisonada."(*"Desde la época del 'cuero crudo' hasta la del 'hormigón armado'*, s/f, pág.6). Y así, más o menos, debió haber sido aquella modesta casa que construyera Gronardo, en sus orígenes, y que habría que ubicar en la actual esquina de las calles Piedras y Treinta y Tres, cerca del desembarcadero y frente a la manzana adjudicada en su totalidad, a Juan Antonio Artigas, abuelo del héroe nacional. (27)

La manzana número 5 del repartimiento de Millán es la rodeada por las calles entonces llamadas *de la Frontera, de la Fuente, de la Iglesia* y *del Puerto Chico;* más tarde, en ese mismo orden, San Miguel, San Luis, San Juan y San Joaquín; hoy Piedras, Cerrito, Ituzaingó y Treinta y Tres. El cuarto de cuadra en que se hallaba el Cabildo era el que actualmente forma el ángulo de Piedras e Ituzaingó.(28) Allí habría de estar la Sala Capitular hasta que se construyera su edificio definitivo, que es el que ocupa actualmente en la plaza principal, frente al predio que también, más adelante, habría de ocupar la Iglesia Catedral.

17. **Gronardo.** El capitán Pedro Gronardo no era un poblador permanente, con arraigo en el lugar. Su profesión de práctico del Río de la Plata - dependiente de las autoridades de Buenos Aires- lo traía, frecuentemente, a nuestro puerto, guiando a los barcos para evitar que encallaran en los bancos ahí existentes. Comerciante primero - pulpero- para completar su sueldo de funcionario, en Santa Lucía, al expulsarse de Montevideo a los portugueses, que se habían infiltrado clandestinamente, abrió en la naciente ciudad un pequeño comercio, asociándose con Jerónimo Eustache, apodado "Pistolete", soldado de la guarnición. Además, en las inmediaciones del desembarcadero - lugar apropiado a sus tareas- levantó una choza con ladrillos de adobe crudo, que construyó el artillero Juan de Flandes; esta choza contaba, también, con costaneras de madera, puerta de una hoja, y estaba techada con cueros. (Véase la figura núm.1). Habiendo fallecido posteriormente, primero "Pistolete" y luego Gronardo (éste, por un accidente naval, en 1727) esa humilde casa se tasó en ciento cincuenta "pesos fuertes" de la época y se expropió para el Estado. Es la que Zavala habría de destinar a consultorio y vivienda del cirujano de la guarnición y, desde 1730, a sede del Cabildo, provisionalmente.(29)

18. Cuando, en 1734, hubo de abandonar ese primer lugar, como ha dicho Orestes ARAÚJO: se inició para el Cabildo de Montevideo "una era de penosa peregrinación, viviendo de salto en mata" y reuniéndose en la casa del Alcalde de Primer Voto, o en la sala de despacho del comandante militar de la plaza, en alguna casa particular y hasta en la iglesia. A lo que habría que agregar la ausencia casi total de mobiliario, que obligaba a los cabildantes a traer su propia silla desde la casa de ellos, solicitarla de los vecinos o hasta de la Iglesia. (30)

19. **Los locales sucesivos.** Pudo al fin el Cabildo, con los doscientos once pesos que había producido la venta de una atahona donada por Zavala, resolver que se construyese una sala que debía tener "nueve varas de hueco y cinco de ancho, con puerta y dos ventanas". (31) Fue así , que decidieron levantar una modesta construcción en el lugar inicialmente proyectado por Millán, o sea en la intersección de la calle de la Carrera(actual Sarandí) con la Del Medio (hoy Juan Carlos Gómez), invirtiendo íntegramente la mencionada suma de doscientos once pesos de entonces. (Ver figura número 2). Pero persistían las dificultades para alhajar el inmueble.

Ya comenzado el siglo XIX, mejorada la situación económica del Cuerpo, se encomendó al arquitecto español Tomás Toribio (cuya hermosa casa habitación todavía se conserva, y que también habría de intervenir en los primeros trabajos de la Matriz) la confección de los planos para el Ayuntamiento y Reales Cárceles de la ciudad, en el lugar en que venía funcionando. En 1803, se comenzó a demoler las anteriores construcciones, al comprobarse su deterioro. El proyecto de las nuevas se presentó en junio de 1804, estimándolas en $ 83.491, oo, suma entonces considerable. Aprobada la propuesta el 7 de septiembre de 1804, pudo observarse que se contaría con locales para los tribunales, para las oficinas administrativas y para cárcel pública. La importante obra estuvo pronta seis años después.(32)

20. **Una visión general del Cabildo de 1807.** Durante las invasiones inglesas, el general británico Crawford, en su carné de viaje, describe así nuestro Capítulo de aquella época:

"El Cabildo, que comprende también la Corte de Justicia, ocupa la parte principal del costado opuesto [a la Catedral] *de la plaza y también está a medio construir; la construcción está hecha con piedras, la entrada es el centro, bajo un elegante arco a cuyos lados están instaladas las Cámaras de Justicia donde el público acude en procura de sus intereses; donde están los magistrados a quienes se les llama Alcaldes de Primero y de Segundo Votos. Estos Alcaldes están asistidos por seis diputados, escogidos entre los habitantes de mayor espectabilidad, todos los cuales componen el Cabildo o Concejo y son, por lo común, españoles europeos".* (33)

21. **La Sala Capitular.** Refiriéndose a la Sala de Sesiones del Cabildo, por 1808, decía don Isidoro DE MARÍA:

"Llamaban Sala Capitular a las del Ayuntamiento. Su mobiliario, con referencia al año 8 y siguientes, consistía en canapés con asiento de damasco, sillón para la Presidencia en la plataforma, una gran mesa en ella cubierta con una carpeta de paño verde o grana, tintero y arenillero grande de plata, plumas de ave, campanillas, mecheros de tres luces;una caja de metal provista de obleas blancas o rosadas grandes de forma cuadrada para los oficios y sellos. El rostro del rey bajo dosel en la testera de la sala. Una sencilla barandilla de madera color café, separaba el recinto de los cabildantes del resto de la sala, reservado para el público cuando ha-

bía Cabildo abierto, que así se designaba siendo público, para tratar asuntos extraordinarios".[....]"

"Doce años más tarde, su adorno era más lujoso: sillones con asiento y respaldo de damasco punzó, espejos redondos, marco dorado, con candeleros de dos luces; cortinas de damasco con cenefas y galarías (sic) *doradas y rico alfombrado".* (34)

22. **Fin del Cabildo.** Con la República Independiente, llegó a su fin el Cabildo.

La ley patria del 6 de octubre de 1826, dictada por la Junta de Representantes de la Provincia, en Canelones, dispone en sus dos primeros artículos:

1°. Desde el 1°. de enero de 1827, quedarán suprimidos todos los cabildos y sus propiedades y rentas serán de la Provincia.

2°. La Administración de Justicia que estaba a cargo de los Alcaldes Ordinarios, se desempeñará desde aquella fecha por Jueces Letrados, que se encargarán de los Juzgados de Primera Instancia.[....]

Se trataba de ajustar la organización de nuestra Justicia a la Constitución argentina, a cuyas Provincias Unidas pertenecíamos en ese momento.

Y ya con el Estado Oriental, ni el Reglamento Provisorio de Justicia, ni la Constitución de 1830 mencionan los Cabildos, desaparecidos para siempre de nuestro Derecho.

Los Alcaldes serán en adelante y hasta los Códigos de Procedimiento Civil y de Instrucción Criminal, jueces unipersonales de primera instancia en las capitales de los departamentos.

CAPÍTULO V
EL GOBERNADOR

23. Desde que se estableció un recinto fortificado (el "presidio") en Montevideo, con anterioridad al mismo Cabildo, esa plaza militar estuvo a cargo de Comandantes dependientes de la Gobernación y Capitanía General del Río de la Plata, con asiento en Buenos Aires.

De los nueve Comandantes que ejercieron sus funciones en el entonces llamado Real de San Felipe y Santiago de Montevideo, interesa recordar al último, Francisco Gorriti, cuyo nombre se dio a la isla que cierra por el Oeste

la bahía de Maldonado, debido a que fue quien realizó las obras de defensa en ese lugar, de las que todavía es posible advertir las ruinas.

Ya en funciones el Cabildo, se recibió la comunicación de que, por el Real Despacho del 22 de diciembre de 1749, el Rey había dispuesto la creación de la *Gobernación Política y Militar de Montevideo,* estableciendo además su jurisdicción.

24. El Gobernador de Montevideo sería, por el mismo mandato real, el Teniente Coronel don Joaquín de Viana, por tratarse de un militar "de honor, de mérito y de conducta", al que se acordaba un sueldo mensual de cuatro mil pesos de la época y el título de Coronel, y cuyo mandato habría de durar cinco años. (35)

Viana, si bien por su fuerte carácter y el independentismo de los cabildantes, tuvo muchos conflictos de competencia con ellos - por ejemplo, a quién correspondía el lugar más destacado en el Teatro y en la Iglesia y el juzgamiento de delitos cometidos por militares- demostró un celo muy notable en sus funciones y, dentro de los medios disponibles aquí, le dio gran desarrollo a la incipiente ciudad. Fallecido en ésta - el inventario de su sucesión puso en evidencia su amplia cultura y gusto refinado- , su viuda, también de temperamento muy recio, continuó siendo un personaje notorio de esta Banda, habiendo merecido el mote de "la Mariscala", con el cual se denomina aún a la población que se formó, donde se hallara la estancia que manejó con mano firme, en el hoy departamento de Lavalleja. (36)

25. Aunque, por regla general, los Gobernadores no tenían facultades judiciales, al de Montevideo se las adjudicó la Corona, y no sólo para los asuntos militares, lo que es muy comprensible en un puerto- fortaleza, sino incluso de orden administrativo y hasta civil.

Por la primera comunicación, se le había encargado de la "defensa y seguridad de la Plaza de Montevideo, de la disciplina de la tropa de la guarnición" y de controlar "la puntual observancia de las Reales Órdenes" cuya interpretación motivó diferencias de criterio con el Cabildo. Por otra Cédula, también de 1749, se le otorgó competencia especial - esto es, expresamente dispuesta a pesar de la regla de no judicialidad corriente en los gobernadores- para intervenir en los pleitos y causas contenciosas, pudiendo oír las apelaciones y otorgarlas directamente para ante la Real Audiencia; ejercer el real patronato, perseguir el contrabando y, para ello, fomentar el corso. (37)

Entre otros asuntos de su competencia, le correspondía conocer "de las causas de Arrivadas de embarcaciones con Rexistro o sin él, y en las licencias para cargar y retornar a sus destinos las que hubieren navegado á ese Puerto con rexistro de los de Lexítimo Comercio [en las que] avía entender y conocer en la forma que disponen las Leyes de Yndias". (38)

Su autoridad era, en puridad, superior a la del Cabildo, aunque éste no siempre lo considerase así, estableciéndose en principio una especie de separación de poderes no recogida normalmente en la legislación hispánica. Pero cabe agregar que raramente el Gobernador actuaba en forma aislada, sino integrando el Cabildo, cuyas sesiones presidía sin voz (vale decir, sin iniciativa) pero con voto privilegiado (en caso de empate).

Respecto de la jurisdicción especial en la nombrada Corporación, sus funciones eran las de dar su opinión y asesorar verbalmente en el mismo Capítulo, cuando era consultado, ya oralmente en el acuerdo, ya por escrito. Como jurisdicción exclusiva, propia, es interesante mencionar, como lo hacen REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO, la de dar o negar su aprobación en el caso de la elección de los Regidores. (39)

26. En razón de su jerarquía, tenía un lugar de preferencia en la Sala Capitular, en la que ocupaba un alto sitial, sobre un escaño de madera labrada, con tres asientos, de los que le estaba reservado el del medio, entre los Alcaldes de Primero y de Segundo Voto, todos ellos bajo el escudo con las armas reales. (40)

En este sentido, es útil reproducir lo que decía *Augusto de SAINT HILAIRE,* en su visita a Montevideo en 1821, durante la dominación portuguesa, refiriéndose a la sala principal del Cabildo, en la que antes se acababa de realizar un sarao: "Ésta estaba sin ningún adorno, pero he quedado sorprendido al ver en uno de sus extremos el retrato del Rey de Portugal, debajo del cual se hallaban dos cetros cruzados sobre un cojín de terciopelo", símbolo evidente de las dos autoridades locales: el Cabildo y el Gobernador - entonces el brigadier Lecor- como representante directo del monarca.(41)

CAPÍTULO VI
EL CONSULADO

27. Puesto que el Río de la Plata (fundamentalmente por su gran puerto de Montevideo) era un lugar muy importante como apostadero naval, centro de

distribución de esclavos, lugar de acceso para los navíos del Correo o los que traficaban con cueros o carnes saladas - charque- ; y su actividad comercial fue muy intensa desde los decretos reales y virreinales de libertad de comercio, necesitó regular tempranamente los aspectos legales relacionados con tales actividades.

El tribunal principal a tales efectos, habría de ser ya a fines del siglo XVIII el ***Consulado***, establecido para todo el virreinato, en Buenos Aires en 1794. En Montevideo había un *delegado* de ese tribunal en la persona de uno de los integrantes del Cabildo, el que intervenía en la primera instancia de las causas mercantiles. La alzada se concedía para ante el Consulado bonaerense. (42)

En cuanto a la legislación aplicable, se empleaba, como en todo el Imperio, las célebres *Ordenanzas de Bilbao*, publicadas y promulgadas por el Rey el 2 de diciembre de 1737.

Los Reyes Católicos, en Medina del Campo, el 21 de julio de 1494, habían concedido a los comerciantes de Burgos el derecho de gobernarse, en sus actos mercantiles, de acuerdo con determinadas ordenanzas dictadas en su beneficio. Este derecho lo extendieron a los comerciantes de Bilbao el 22 de junio de 1511; y, como se ha dicho, se pusieron finalmente en vigencia general constituyendo un verdadero Código de Comercio en 1737. Se trata de un verdadero documento jurídico en su materia, especialmente en el Derecho de la Navegación, todavía vigente en muchos países - por lo cual forma parte del Derecho Internacional privado a justo título- ; e informó el capítulo sobre Derecho Marítimo de nuestro Código de Comercio. (43)

28. Además, según REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO, el Cabildo de Buenos Aires (luego habría de ocurrir con el de Montevideo) "tenía funciones de Junta Económica 'para el fomento de las materias primas y víveres'. De allí nació la necesidad de integrarlo también con *hacendados*, por la Real Cédula de 1797. Tuvo, entonces, comerciantes y hacendados en igual número, nombrados por bienios, y así se esforzaron, atendidos sus evidentes intereses, por fomentar el libre comercio de estas colonias". El Delegado de Montevideo era un comerciante residente en nuestra ciudad, que era asistido por otros dos comerciantes en calidad de conjueces. (44)

29. Ya en las postrimerías del régimen colonial, el Gobernador de Montevideo Gaspar de Vigodet, por Auto de 24 de mayo de 1812, y en cumplimien-

to del Real Decreto de 9 de febrero de 1810 y el del 23 de marzo del mismo año, instituyó ese tribunal en nuestra ciudad. El mismo continuaría en forma provisional, hasta nueva disposición, según la eficacia que demostrara, y se regiría por lo que en 1794 se había dispuesto para Buenos Aires. Sus miembros serían elegidos en junta general de comerciantes, presidida por el Gobernador , con asistencia del Escribano de Gobierno.

Contaba con un *Prior,* un *Asesor,* un *Contador,* un *Tesorero* y otros *Cónsules*; fijándose una modesta dotación que no se haría efectiva hasta nueva disposición. (45)

30. Ya constituido el Estado Oriental, por decreto del Poder Ejecutivo del 7 de diciembre de 1838, se suprimió el Consulado instituyéndose en su lugar el Juzgado de Comercio. Se argumentaba la conveniencia de unificar la organización de la Justicia. Por otro decreto, del 28 de enero de 1854, se restableció el Consulado, con alzada ante el Juez de Comercio, que intervenía en la segunda instancia acompañado por los Jueces Letrados del Crimen y de lo Civil, presididos por el primero. Se suprimió, esta vez definitivamente, por decreto del 22 de mayo de 1858, alegándose, igual que la primera vez, la necesidad de evitar la falta de uniformidad y de armonía en la función judicial. (46)

CAPÍTULO VII
OTROS ÓRGANOS JUDICIALES MENORES.

31. En general, los cabildantes (como en el caso de los Alcaldes de Santa Hermandad o Provincial, etc.) intervenían a modo de juzgados, y así se organizaban, como tareas especiales, sin perjuicio de las comunes del Cuerpo. Lo mismo sucedía con el Gobernador, en la jurisdicción militar, en el control de la navegación (arribadas, corso), etc.

Pero los había que actuaban con plena autonomía y con jurisdicción propia (como los tribunales eclesiásticos), y otros que, aun con autoridad delegada y conjuntamente con su labor como cabildantes, se manejaban con cierta autonomía técnica. Por ejemplo, integrando el juzgado de mercaderes a que ya nos referimos.

FERRÉS nos habla del *Juez de naturales* (que era también el Alcalde de

Primer Voto), de los *Jueces comisionados* de los juzgados porteños, del *Juzgado de bienes de difuntos,* a cargo de abogados particulares y con actuario propio; de la *Junta Municipal de Temporalidades.* El Gobernador, además de serlo, y aunque por lo general esos jerarcas carecían de funciones judiciales, por disposición real expresa fueron también *Jueces* de *Correos,* de *Naufragios,* de *Real Hacienda.* (47)

32. Naturalmente que la mayoría de los órganos judiciales mencionados en esta Primera Parte, habrán de sufrir modificaciones más o menos radicales durante los períodos de la Patria Vieja, del dominio Británico y del Lusitano, y en el Republicano.

SECCIÓN SEGUNDA: DURANTE LA DOMINACIÓN BRITÁNICA

CAPÍTULO I
REPERCUSIONES DE LA INVASIÓN

33. Indica FERRÉS que en los cinco meses durante los cuales los británicos ejercieron efectivamente su dominio, ellos "repercutieron, principalmente, en todos aquellos cometidos de justicia que eran de incumbencia del juzgado del Gobernador y en los otros juzgados cuyo titular era esa autoridad militar y política, como juez delegado o subdelegado".

"La política inglesa - sigue diciendo- se ajustó, en lo que fue posible, dentro de las circunstancias de violencia con que debía establecer la nueva dominación, a reconocer, en materia de organización de justicia, a Montevideo todas las atribuciones que correpondía a sus instituciones de origen popular; pero no podía seguir igual temperamento para todas aquellas facultades que radicaban en el Gobernador, ya que éste, como titular de lo que era justicia propia de la ciudad, ejercida por él y en la que actuaba por delegación o subdelegación, había desaparecido, suplantado por los jefes militares ingleses de las fuerzas de ocupación." [....] (47)

"Pero no ocurrió lo mismo en lo referente a la justicia del Cabildo. En esa materia, la jurisdicción no fue tocada ni rozada; actuaron los jueces del Cabil-

do con entera autonomía, y prestó la autoridad inglesa todo acatamiento a las decisiones en los casos en que aquellos jueces hicieron sus pronunciamientos." (48)

34. Este respeto por la Justicia menor, que provocó la injusta acusación de colaboracionismo contra los cabildantes, ha sido reconocida también en una publicación de la Intendencia Municipal de Montevideo: "Una vez rendida la plaza, el comandante inglés Auchmuty, entre las disposiciones dictadas respetó las prerrogativas del Cabildo, dejándolo encargado del gobierno municipal. El tratamiento de los cabildantes fue por demás ceremonioso, lo que se aprecia en el tratamiento de "gentlemen"(caballeros) con que encabezaba las notas que les dirigía, situación que perduró hasta el momento en que los ingleses se retiraron de la ciudad, en septiembre de 1807". (49)

No es extraño, por otra parte, que existiera, más allá del indudable espíritu patriótico de los españoles, cierta corriente de afinidad o de mutua simpatía entre un ayuntamiento formado especialmente por comerciantes o productores y un invasor que les aportaba principios protectores de la libertad de comercio y de la economía liberal, tan contrarios al monopolio mercantil hispano; aunque haya que convenir en que aquel monopolio ya era cuestionado en la Colonia y en la misma metrópolis.

CAPÍTULO II
EXPRESIONES DE UN ELEVADO CRITERIO JURÍDICO ENTRE NUESTROS CABILDANTES

35. Este cuasi entendimiento sobre conceptos de economía liberal no evitó que, en algunos aspectos, los montevideanos llegaran a dar una verdadera lección en materia de derechos humanos, a sus dominadores.

PÉREZ CASTELLANO nos ha dejado este interesantísimo recuerdo al efecto, con relación a una condena corporal dictada y ejecutada por tribunal militar británico:

"*En esta ejecución, no hubo otra cosa que la hiciese chocante y, a nuestro parecer, injusta, sino que a los reos no se les diese defensor, ni*

aun se les oyeron en juicio sus descargos. La sentencia fue pronunciada sólo oyendo a los testigos que depusieron contra los reos. El Cabildo, que extrañó un proceder tan ajeno a nuestras leyes, y al parecer contrario al derecho natural de los hombres, reconvino al General inglés haciéndole presente que entre nosotros no se condenaba a nadie sin oírle y sin darle defensor cuando el reo se obstinase en no querer defenderse. El General replicó que el juicio en que se había condenado a muerte a los dos reos había sido público y a puerta abierta con el objeto de oír en su defensa a los que quisiesen tomarla a su cargo. Esa salida no nos satisfizo, porque siempre quedaba en pie el que a los reos no se les había oído ni se les había dicho: contra vosotros hay esta acusación y hay testigos que con su testimonio la aseguran, ¿qué respondéis vosotros? Además de que, ignorándose entre los españoles el derecho que se le daba a cualquiera de defender a los reos en aquel tribunal, e ignorándose la lengua en que el juicio se hacía y se pronunciaba la sentencia para los reos y para los defensores españoles que pudiesen presentarse en su favor, era lo mismo que si no tuvieran ese derecho y que si la puerta del tribunal estuviera para ellos cerrada a cal y canto. O sea que la fuerza de estas reflexiones hiciesen impresión en el General inglés, o sea que no tuviese por conveniente escandalizar a un pueblo, cuyos corazones pretendía ganar, con un modo de decidir de la vida de los hombres, que lo afligía y rebelaba sobre manera; lo cierto es que después no se ejecutaron otros reos, que fueron acusados de igual crimen [fomentar la deserción de soldados ingleses]". (50)

No deja de ser notable la defensa de principios como el de derecho de defensa obligatoria - incluso de oficio, que España ya tenía en el siglo XVIII y los anglo- sajones habrían de reconocer recién en el nuestro- así como el juzgamiento en lengua corriente, hoy expresamente reconocidos por todos los derechos democráticos, obviamente el vigente en el Uruguay.

36. Con relación al deber de litigar en la lengua corriente oficial, es interesante referir también otro hecho relatado por FERRÉS: "Ya concluido el dominio británico, en 1810, durante el cual se recibieron demandas redactadas en lengua británica, alguien quiso hacerlo aún y se les dictó este auto: '*Debuélvase este escrito y hagaseles entender a estos individuos contesten en espaniol baliéndose para ello de profesor letrado*' ". (51)

SECCIÓN TERCERA
LAS POSTRIMERÍAS DEL DOMINIO ESPAÑOL.

CAPÍTULO ÚNICO.

37. Napoleón Bonaparte, reaccionando contra el tratado de alianza entre España y la Gran Bretaña, declaró la guerra a estos reinos e invadió la Península Ibérica en 1808.

El pueblo español ante la ineficacia de su Corona, tomó en sus manos la defensa de la patria en la feroz Guerra de la Independencia, cuyos excesos ha recordado bien el pintor Goya, en sus célebres aguafuertes. Ello llevó entre otras cosas, a la constitución de Juntas de Gobierno en España y en algunas de sus colonias.

La Junta constituida en Sevilla (en que actuaron diputados por el Río de la Plata, entre ellos el oriental Nicolás Herrera) optó por someterse al Emperador y a su hermano José (más conocido por "Pepe Botella", debido a su aspecto y a su gusto por el alcohol).

Para obtener el apoyo del Virreinato del Río de la Plata, la Junta de Sevilla envió a estas regiones al francés marqués de Sassenay y al español capitán Juan M. Goyeneche, con la misión de obtener la adhesión al nuevo monarca. Buenos Aires optó por aceptar esa adhesión - se ha dicho que por el motivo de ser su entonces virrey Santiago de Liniers de origen francés, aunque eso no está bien averiguado- siendo también posible que la dirigencia porteña, simpatizante de la nueva ideología democrática, viera con buenos ojos la política liberal de los invasores de la metrópolis.

Montevideo, por el contrario, expulsó a los enviados de la Junta de Sevilla y de Buenos Aires y proclamó su adhesión al rey Fernando VII, que a su juicio personificaba a la patria, y que consideraba el monarca legítimo.

38. A estos efectos, se llamó a un Cabildo Abierto, en el que se dispuso la constitución de una Junta de Gobierno a imagen de la establecida en Cádiz, que encabezaba la resistencia. Se dispuso también la separación de Montevideo de Buenos Aires, no considerando que el Virreinato fuera apto para la defensa nacional(de las poblaciones hispánicas) y alegando que, no existiendo un rey en actividad en la Península, ni un virrey legítimo en Buenos Aires, habían caducado sus autoridades.

La Junta de Montevideo duró poco tiempo porque al año siguiente fue disuelta por el nuevo Virrey, Cisneros. Pero, como se ha dicho bien, "con su actitud de desobediencia [se acataba pero no se obedecía lo dispuesto en Buenos Aires] dieron la señal de la sublevación contra las autoridades españolas, constituyéndose en precursores de la Revolución de Mayo" y teniendo "gran influencia en la emancipación de las colonias americanas". (51)

39. Es interesante repetir algunos de los argumentos que uno de los pocos abogados que había entonces en Montevideo, el doctor Magariños expresó para fundamentar la valiente posición de nuestro Cabildo:

"El primero de los derechos del hombre - decía- *es su conservación y, por ello, es lícito en propia defensa matar al agresor: y para evitar esto, y la ley del más fuerte, convinieron en unirse en Sociedad, formando partidos y ciudades, y eligiendo al fin caudillos que los gobernasen, de donde proviene el origen de los Reyes y potentados, derivándose todo su poder de estas causas del Derecho Natural, y por lo mismo es estrecha obligación de los soberanos la defensa de los Pueblos.* [.....] *Un pueblo fiel, benemérito y honrado, así como debe coadyuvar a las Reales intenciones del soberano expedidas en su beneficio; por iguales principios está legítimamente autorizado para oponerse a lo que se ha impuesto a su voluntad y correlativamente para remover por tiempo, aunque sea con violencia al que, en lugar de ser su protector, puede ser su destructor, cuando de pronto no puede fijar por otra vía su seguridad, ni atender a su conservación e indemnidad, que es el objeto de todo gobierno bien organizado".* Y citaba en su favor las Siete Partidas que, a su juicio, advertían que *"Si el Emperador o Rey sale a la guerra"* y no posee las condiciones esenciales de *"esfuerzo, maestría y seso", "debe subrogar otro en su lugar aunque las tenga para que acaudille y dirija diestramente a la gente".* (52)

Puede verse en estas palabras la influencia de los autores liberales de su tiempo y los principios democráticos que iban determinando nuestro espíritu jurídico, como ya lo anticipamos en la Sección anterior.

SECCIÓN CUARTA:
LA "PATRIA VIEJA" (1811- 1820)

CAPÍTULO I
LA REVOLUCIÓN DE MAYO

40. La Colonia, según se ha visto, no reconoció - por lo menos en su plenitud- tal como era de esperar en un sistema no republicano, el principio de la separación de los poderes públicos, que tanta importancia tiene para la existencia de una buena administración de Justicia.

Otras ideas, como es natural, acompañaron a los revolucionarios americanos, incluidos los del Río de la Plata.

41. *Moreno,* tal vez el más lúcido de los hombres de Mayo, propagaba, desde *"La Gaceta"* en 1810 que: "la división de los poderes [es] el único freno para contener al magistrado en sus deberes"(por "magistrado" no se entiende en este caso al juez, sino al gobernante con facultades ejecutivas).

Nuestro *Artigas*, en sus célebres "Instrucciones del Año XIII", había propuesto que en la constitución del nuevo estado, tanto en lo nacional como en lo provincial, "el gobierno se dividirá en poder legislativo, ejecutivo y judicial"(artículo 5), agregando que "estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades"(art.6), principios de evidente inspiración norteamericana (se sabe que era lector convencido de la obra de Tomás Paine - "La Independencia de Costa Firme"- y de la Constitución de Massachussets"). (53)

En el Proyecto de Constitución para la Provincia Oriental, formulado en 1813, - nos informa Ariosto GONZÁLEZ- cuya parte dogmática está en el capítulo I, artículos 1 a 21, "la separación de poderes está legislada [*rethius:* propuesta] en el art.30, parte 1ª, de [la Constitución] de Massachusets". (53, *ídem*)

42. Aunque integrando formalmente el sistema jurídico argentino, las luchas intestinas de las Provincias Unidas y la anarquía de los intentos de organización a cargo de las asambleas constituyentes (que se limitaban a dictar leyes aisladas o debían interrumpir sus sesiones por los acontecimientos políticos)

hicieron que, con anterioridad a la invasión portuguesa, nuestro sistema judicial no avanzara más allá de los cabildos.

La llamada Junta Conservadora de Buenos Aires dictó, el 22 de octubre de 1811, un "Reglamento de la División de Poderes", en el que se prevé que "el poder judicial es independiente y a él solo toca juzgar a los ciudadanos", pero no va mucho más adelante, limitándose a agregar que: "subsistirá este Reglamento hasta que el Congreso deslinde constitucionalmente las atribuciones y facultades del poder judicial". (54) Que no se tuvo aquí en consideración.

Tampoco tuvo entre nosotros aplicación el "Reglamento para la Administración de Justicia de las Provincias del Río de la Plata", redactado por Rivadavia el 23 de enero de 1812. Ni el "Reglamento" que lo sustituyó poco después, sancionado por la Asamblea del año XIII el 6 de septiembre de 1813. Ni siquiera en la misma Argentina llegó a prosperar el Proyecto de Constitución para las Provincias del Río de la Plata, de 1812, redactado, entre otros, por el montevideano Nicolás de Herrera. (55) Ni el "Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado" preparado por la Junta de Observación, presidida por Rondeau el 5 de mayo de 1815. Ni el "Reglamento Provisorio" del Congreso de Tucumán de 3 de diciembre de 1817; ni la Constitución de 1819.

En todos estos textos, se establecía el principio de la separación y autonomía de los poderes, y se sustituían los cabildos y la Audiencia por tribunales de apelaciones, jueces letrados y de paz.

Pero, repetimos, la Banda Oriental continuó durante el período artiguista (y habría de estarlo todavía hasta 1819) con sus viejos cabildos.

CAPÍTULO II
INNOVACIONES Y CONTINUIDADES.

43. Como magistratura original del primer gobierno patrio, el de Artigas, es interesante recordar la creación del *Juez de Propiedades Extrañas;* magistrado que tenía la misión de hacer efectivas las disposiciones sobre el Reglamento de Tierras, por el que se había regularizado la tenencia de los predios rurales, siguiendo el conocido principio de que "los más infelices fueran los más beneficiados".

Los expedientes levantados al efecto (tomando las propiedades de los

"malos españoles y peores americanos") que uno de los autores de este trabajo tuvo oportunidad de exhumar conjuntamente con el lamentablemente fallecido profesor Traversoni, en el archivo del Juzgado Letrado de Primer Turno de Canelones en 1964, ponen de manifiesto que los mismos eran atendidos personalmente por el General, y que se llevaban con un minucioso y sorprendente conocimiento de los ritos procesales; aprendidos por el héroe probablemente en sus funciones de comisario de campaña, que entonces era, en puridad, un modesto juez.

44. Por lo demás, aquellas disposiciones legales y constitucionales argentinas y españolas, que en su tiempo se declararon vigentes (aunque no siempre se aplicaron en nuestra realidad jurídica) y que no hubieran sido derogadas tácita o expresamente, habrían de subsistir en la época republicana, como veremos más adelante, en virtud de lo dispuesto por el art. 148 de la Constitución de 1830.

Ejemplo de ello fueron - y en parte todavía son- las Leyes de Partidas y las Recopilaciones hispánicas, y los principios esenciales de las primeras constituciones argentinas.

SECCIÓN QUINTA:
LA DOMINACIÓN LUSITANA.

CAPÍTULO I
DESDE EL PREDOMINIO PORTEÑO HASTA LA INVASIÓN PORTUGUESA.

45. No obstante el Reglamento para la Justicia de 1811 y la Constitución de 1819 promulgados en Buenos Aires que, por tratarse de una de las Provincias Unidas del Río de la Plata, debieron haber tenido vigencia en la Banda Oriental (y, sustituidos como dijimos los cabildos y las audiencias por los tribunales de apelaciones y juzgados de paz), continuaron actuando los cabildos de Montevideo, de San Juan Bautista (hoy Santa Lucía), San José, Colonia y Maldonado y los medio- cabildos y comandantes militares de otros pueblos.

46. Con la complicidad del gobierno porteño - contrario al proyecto de federación de Artigas que ya había soliviantado contra el centralismo a otras provincias- los portugueses invadieron la Banda Oriental en 1815.

Al aproximarse a Montevideo, luego de una abnegada pero inútil resistencia de los militares artiguistas, las fuerzas invasoras, al mando del Barón de la Laguna(general Federico Lecor) se constituyen a la vista de las murallas de la ciudad. Aquí se convocó al Cabildo, el 19 de enero de 1817, resolviéndose, luego de un extenso debate, entregar la Plaza "a la protección de su Majestad Fidelísima, el Rey de Portugal, para paliar la anarquía reinante durante los tres últimos años". (55)

CAPÍTULO II
LA CÁMARA DE APELACIONES.

47. Cupo a los nuevos dominadores el honor de instalar el primer órgano estrictamente judicial en nuestra Banda, con jurisdicción superior a la de los cabildos, poco tiempo después de recibir las llaves de la ciudad: **la Cámara de Apelaciones,** que funcionó como tribunal de alzada de la Provincia (llamada entonces Cisplatina), desde el 18 de diciembre de 1818. Dependió, alternativamente, de los gobiernos portugués y brasileño y fue presidida muchas veces por el propio general Lecor. Más tarde, con la Independencia, dejó de funcionar, en 1828, y, desde la Constitución de 1830, fue sustituida por el Tribunal Superior de Justicia, hasta que las condiciones del país, recién en 1907, permitieron instalar la Alta Corte de Justicia, prevista ya en aquella Constitución.

CAPÍTULO III
LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE LA CÁMARA DE APELACIONES.

48. Examinados los Libros de Acuerdos de la Cámara de Apelaciones que obran en el Archivo de nuestra Suprema Corte de Justicia, vemos que, el 11 de diciembre de 1818 se registra el primer Acuerdo, por el que se integran a ese Cuerpo los camaristas *Nicolás de Herrera, Francisco Llambí, Tomás García de Zúñiga* y *Francisco Juanicó,* se instalan en una de las salas de la vivienda

del Gobernador Lecor, provisionalmente, y los magistrados aludidos prestan el juramento prescripto por la ley, ante el Gobernador y, a modo de secretario, el escribano Bartolomé Bianchi.

49. El Acuerdo siguiente, realizado el 15 de diciembre de 1818, establece en forma ahora directa que los camaristas, en lo sucesivo, deberán reunirse en "la posada de Lecor" (en el lenguaje de la época, por "posada" se entiende domicilio particular) "mientras no se prepara y adorna con el decoro que corresponde la Sala que ha de servir de Tribunal, en la Casa Fuerte de esta Ciudad", y se agrega que los días y horas de sesión serían aquellos que fijase el Barón de la Laguna.

Finalmente, se ubicó la Cámara en el extremo del edificio del Fuerte que hacía esquina con la hoy calle 1° de Mayo, en la planta alta (ver figura núm.3).

50. Siempre de conformidad con los Libros de Acuerdos mencionados, la primera sesión que celebró la Cámara en 1819 fue la del 16 de abril, "después de la Pascua de Resurrección", ya en el descripto salón del Fuerte. En ese Acuerdo, se leyó una Memoria presentada por el entonces Escribano de Cámara y Secretario del Tribunal, don Joaquín de Sagra y Periz; personaje que, sin ser un idóneo en Derecho, figuró luego reiteradamente en diversos organismos judiciales del país, como lo ha destacado FERRÉS. (56)

En efecto, todavía en la Banda Oriental no se confería títulos académicos ni se podía cursar regularmente estudios terciarios. El primer abogado graduado (fuera del país) que había profesado como tal fue don Francisco de los Ángeles Muñoz, doctorado por la universidad de Chuquisaca (Bolivia) y que había fallecido antes de los hechos relatados, en 1794, a los cuarenta años de edad.

51. Vemos, además, en los Libros de Acuerdos de la Cámara, que el 18 de agosto de 1820 se nombró al doctor Julián Álvarez - graduado en otro lugar de América, desde luego- "Defensor de este Tribunal para que entienda en las causas criminales de los pobres de la Provincia": vale decir, defensor de oficio en materia penal, como diríamos en la actualidad.

52. Producida en 1822, la independencia del Brasil, el 12 de septiembre de ese año se coronó Emperador del nuevo estado a don Pedro I, hijo del Rey Juan VI de Portugal. Tales acontecimientos, habrían de provocar en la Provin-

cia Cisplatina la aparición de dos bandos: uno fiel a la antigua metrópolis y otro adherido a la revolución iniciada en Río de Janeiro.

Lecor se declaró partidario del nuevo régimen y sin apoyo en Montevideo - que mantuvo lealtad al antiguo- se vio precisado a huir a la campaña, en tanto el Cabildo montevideano desconocía su autoridad.

Y mientras el Cabildo, como es natural, permaneció en Montevideo, la Cámara, también naturalmente, siguió a su Presidente y abandonó la ciudad, instalándose en la villa de Guadalupe (hoy ciudad de Canelones).

El 22 de diciembre de 1822, la Cámara, ya en su nueva instalación, extiende un Acuerdo, por el que se da cuenta de que "en virtud de la orden del Cap. Gral. Barón de la Laguna salieron los oidores Francisco Llambí y Xavier García de Zúñiga con el Secretario de Sagra y Periz de la Plaza de Montevideo, no habiéndolo verificado el señor don Félix Laenz por no permitírselo su salud y achaques, no conduciéndose el Archivo por ser impracticable en las circunstancias del día". Concluye el Acuerdo informando que la Cámara había llegado a Guadalupe - de lo que se da cuenta a Lecor- y que esperaban sus órdenes.

53. En la sesión del 14 de enero de 1823, expresa un acta de la Cámara que: "reunida en Acuerdo de Justicia la Excma. Cámara de Apelaciones, viéndose libre de la opresión en que se hallaba en Montevideo y en aptitud de poder manifestar sus sentimientos, resolvió elevar a S.M.F., una reverente protestación de su júbilo por la exaltación de S.M. al trono, y de la lealtad y adhesión que la animan hacia su Augusta Persona" [se refieren, obviamente, a Pedro I]. Y firman: Llambí, García de Zúñiga, y Sagra y Periz.

54. Es interesante agregar que el poder de Lecor fue absoluto en esta segunda etapa de la dominación lusitana. Disponía libremente sobre el nombramiento y remoción de los jueces; votaba e intervenía en el dictado de las sentencias del Tribunal, a pesar de que "no tenía conocimiento de las leyes, usos, costumbres e idioma de estos pueblos", como lo expresó el Oidor Fiscal de Hacienda Lucas Obes, en comunicación leída en el Acuerdo del 4 de junio de 1824; lo que le valió ser suspendido en sus funciones. Pero por Real Orden del 28 de septiembre de 1824, el Emperador desautorizó a Lecor, reintegrándolo.

* * * *

Muy pronto habría de iniciarse una nueva e importante etapa: la de la propia Justicia Nacional.

NOTAS DE LA PRIMERA PARTE

(Los detalles bibliográficos de las obras citadas se han detallado en la sección Bibliografía).

(1) CAPUTI, op. cit. pág. 40. COUTURE, op.cit. pág. 91. Los mismos conceptos, con carácter general, los menciona CHIOVENDA, José, en sus *"Principios"*, tomo I, pág. 582, de a edición española de Reus S.A., s/f.

(2) Op. et loc. cit. en la nota anterior.

(3) Esquema adoptado de la información ofrecida por FERRÉS, ob.cit., pág. 44.

(4) Puede verse una reproducción del Acta Fundacional del Cabildo de Montevideo, en la publicación de la I.M.M., versión de 1980, pág. 9.

(5) DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO HISPANO AMERICANO, tomo IV, pág. 48, op.cit.

(6) FERRÉS, op.cit, pág. 271

(7) DICCIONARIO E. HISPANO AMERICANO cit., tomo I, pág. 822.

(8) *"Los Códigos Españoles"*, cit., tomo XII, pág. 48.

(9) INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO, versión de 1977, págs. 14-15.

(10) FERRÉS, op. cit., pág. 27.

(11) FERRÉS, op. cit. pág. 29.

(12) FERRÉS, op. cit., pág. 7.

(13) BAUZÁ, op. cit., pág. 231.

(14) INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO, versión de 1977, pág. 35.

(15) Obra citada en la nota anterior, pág. 17.

(16) FERRÉS, op. cit., pág. 18.

(17) Obra citada en la nota 15, pág. 17.

(18) RODRÍGUEZ, A.: op. cit., tomo I, pág.64.

(19) FERRÉS, op. cit., pág. 22.

(20) FERRÉS, Op. cit., pág.21.

(21) Según FALCAO ESPALTER, M., citado en la publicación de la I.M.M. versión de 1980, cit., pág. 3

(22) DE MARÍA, Isidoro, citado en la publicación de la I.M.M., versión de 1980, pág.24.

(23) REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO, op.cit, , tomo I, pág.342.

(24) INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO, versión de 1980, pág.13.

(25) Obra citada en la nota anterior, pág.15.

(26) PÉREZ MONTERO, C. citado en I.M.M., versión de 1980, pág.19.

(27) REYES ABADIE Y VÁZQUEZ ROMERO, op. cit., tomo I pág.342.

(28) FERRÉS, op.cit., pág.35- 36, con nota al pie de Francisco J.ROS, tomada de la revista "Rojo y Blanco", año II núm.1, enero 1° de 1911.

(29) AZAROLA GIL, op. cit., págs. 92 y siguientes.

(30) ARAÚJO, Orestes, citado en la publicación de la I.M.M., versión de 1980, págs.21- 22.

(31) Publicación citada en la nota anterior, pág.24.

(32) Ver nota anterior.

(33) INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO, versión de 1977, pág.22.

(34) DE MARÍA, I.:"*Tradiciones y Recuerdos",* citado en I.M.M., versión de 1980, pág.24.

(35) REYES ABADIE- VÁZQUEZ ROMERO, op. cit, , t.II, pág.393.

(36) FERRÉS, op. cit., pág.52.

(37) REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO, op.cit. , t.II, págs.392- 394.

(38) FERRÉS, op. cit., pág. 52.

(39) REYES ABADIE- VÁZQUEZ ROMERO, obra citada, t.II, pág. 394.

(40) Ver nota anterior.

(41) INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO, publicación de 1977, pág.30.

(42) REYES ABADIE- VÁZQUEZ ROMERO, op. cit., tomo II, págs.381- 382..

(43) "Introducción" a "*Las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao",* "Acordadas y confirmadas por el Rey Nuestro Señor don Felipe Quinto(que Dios guarde), año de 1737", en "Los Códigos Españoles", citad., tomo XII pág.445.

(44) REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO, Op. cit, tomo Il, págs.381-382.

(45) FERRÉS, op. cit., págs.144 y siguientes.

(46) Los decretos correspondientes pueden verse en la obra citada de Adolfo RODRÍGUEZ, 1ª Parte, págs. 180 y 261, y 2ª Parte, pág.44.

(47) FERRÉS, op. cit.., págs.309- 310.

(48) REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO, op. cit., tomo I, págs133-134.

(49) INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO, versión de 1977, pág.32.

(50) REYES ABADIE y VÁZQUEZ ROMERO, op. cit, tomo I, pág.134.

(51) FERRÉS, op. cit., pág. 316.

(52) INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO, versión de 1977, págs.32- 33.

(53) REYES ABADIE- VÁZQUEZ ROMERO, op. cit., tomo ll, págs.158 y siguientes.

Ver además: PETIT MUÑOZ, E, :"*Artigas y la Administración de Justicia";* edic. de la S.Corte de Justicia; Montevideo, 1950.

(54) GONZÁLEZ, A.: op. cit. págs.79 y 84.

(55) Libro de Acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia de 1818.

(56) "FERRÉS, op. cit., pág.290.

BIBLIOGRAFÍA DE LA PRIMERA PARTE.

AZAROLA GIL, Luis Enrique: *"Los orígenes de Montevideo (1607-1749)"* ; Montevideo, edición de la Comisión de Actos Conmemorativos del 250º Aniversario, 1976.

BAUZÁ, Franciso: *"Un gobierno de otros tiempos"*; Montevideo, "Colección de Clásicos Uruguayos", 1973.

BOUZA, Luis Alberto: Discurso pronunciado en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, en oportunidad de celebrarse el 50º aniversario de la Corporación, 1957. Además, ver Revista de .Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 56, páginas 134 y siguientes.

CAPUTI, Vicente: *"Rememoraciones Centenarias"*; Montevideo, Ed. Barreiro y Ramos, 1930.

COUTURE, Eduardo J.: *"De la Organización judicial y del régimen procesal"*, en revista "La Justicia Uruguaya"; tomo IX, secc. 2ª.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO HISPANO - AMERICANO; Barcelona, Montaner y Simón, y Jackson, Nueva York, s/f., tomos I y II.

FERRÉS, Carlos: *"La Administración de Justicia en Montevideo.- Época Colonial" ;* Montevideo, Edit. Barreiro y Ramos; 1944.

GELSI BIDART, Adolfo: *"Cuestiones de la Organización Procesal"* ; Mont. Edit. Amalio M. Fernández;1977.

GIURIA, Juan: *"Desde la época del cuero crudo hasta la del hormigón armado"*, s/f.;publicado por la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República; Montevideo.

GONZÁLEZ, Ariosto D.: *"Los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el Río de la Plata"* ; en "La Justicia Uruguaya", tomo XLVIII, secc. 2a., especialmente págs.75 y siguientes.

INTENDENCIA M. DE MONTEVIDEO: *"El Cabildo de Montevideo" ;* publicaciones de 1977 y 1980.

JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Justino: *"Derecho Público Español"; Montevideo, 1942.*

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO: *"La Revolución de 1811 en la Banda Oriental"* ; Publicación dirigida por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay; Montevideo, 1964,

LARRAÑAGA, Dámaso A.: *"Diario de Viaje de Montevideo a Paysandú"* ; Colección de Clásicos Uruguayos; Montevideo, 1952.

LEVENE, Ricardo: *"Introducción a la Historia del Derecho Indiano"*; Buenos Aires, 1924.

LEVENE, Ricardo y Enrique **de GANDIA**: *"Historia de América"*; Buenos Aires, Edit. Jackson; 1949, espec. tomo IV.

"LOS CÓDIGOS ESPAÑOLES", versiones de la Real Academia de la Lengua Española; Madrid., San Martín Edit., 1873; tomos I y XII.

LIBROS DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, (Archivo de la Corporación) de 1818 a 1829.

MÉNDEZ CALZADA: *"La función judicial en las primeras épocas de la Independencia"*; Buenos Aires, Edit. Losada S.A., 1944.

NICOLIELLO, Nelson y Luis A. **VÁZQUEZ PRADERI**: *"Tratado Elemental de Técnica Forense"*; Montevideo, Edit. Amalio M.Fernández; 1973, tomo I.

PETIT MUÑOZ, Eugenio: *"Artigas y la Administración de Justicia"*; Edición. de la Suprema. Corte de Justicia; Montevideo, 1957

REYES ABADIE, Wáshington, **BRUSCHERA**, Óscar y

MELOGNO, Tabaré: *"Artigas. Su significación en la Revolución y en el Proceso Institucional Iberoamericano"*; Montevideo, edición del ex- Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social; Montevideo, 1966.

REYES ABADIE, Wáshington y A. **VÁZQUEZ ROMERO**: *"Crónica General del Uruguay"*; Montevideo, Banda Oriental, tomos I y II.

RODRÍGUEZ , Adolfo: *"Colección de Leyes, Decretos del Gobierno, Tratados Internacionales y Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de la República Oriental del Uruguay"*; Montevideo, Edic. del autor, tomos I a V.

SEGUNDA PARTE

PARTE SEGUNDA

LA JUSTICIA NACIONAL

SECCIÓN PRIMERA: EL PERÍODO PRECONSTITUCIONAL (1825-1830)

CAPÍTULO I
LA TRANSICIÓN.

55. En esta etapa inicial de una justicia propia de la Nación, hay que tener en consideración dos grandes períodos, mediante los cuales se va estableciendo el nuevo Estado: el inicial, en el cual el país declara su independencia respecto de España, de Brasil y de Portugal, pero al mismo tiempo, declara su incorporación a las Provincias del Río de la Plata, como una provincia más pero con la autonomía de un estado federal; y un segundo, ya definitivo, el que se transforma en república independiente.

Estas transformaciones administrativas, unidas a dificultades prácticas y a tradiciones ya muy fuertes en la realidad judicial de la región, presentan inicialmente un panorama un tanto confuso. Como ha dicho bien el Prof. Dr. Adolfo GELSI BIDART, *:"Este período se caracteriza (la lucha emancipadora se prolonga de 1825 a 1828) por: -una insuficiente distinción de los poderes del Estado (en lo que hace a la organización de la justicia); -la persistencia de algunos de los órganos jurisdiccionales precedentes; -el inicio de la modificación orgánica, según criterios que habrán de predominar ulteriormente(v.gr.: el unipersonalismo en primera instancia); -la significación acordada al juez-lego: arbitraje, conjueces, etc. - en parte fundada en la falta de letrados y en parte en el criterio de la importancia del conocimiento 'técnico' en los jueces (en el fondo: confusión entre juez y peritos)."* (1)

Se advierte, por ejemplo, la relativa persistencia de los cabildos, que recién serán suprimidos en 1826; la de la figura de los Alcaldes, como magistra-

dos unipersonales, especialmente en el interior del país (expresamente, regulados en el decreto dictado por el Gobierno Provisional, en Durazno, el 6 de diciembre de 1827); la Cámara de Justicia, que pasará a ser el Tribunal de Justicia por la ley de 15 de octubre de 1826, pero no cambiará mayormente en su organización ni en su integración (todavía en 1828, se reunirá la Cámara fundada por los lusitanos, y en ella se dará cuenta de haberse recibido un oficio del Encargado del Poder Ejecutivo don Joaquín Suárez, por el que se dispone que el Cuerpo continúe desempeñándose como hasta el momento, como Tribunal de Justicia de la Provincia: acta del 10 de diciembre de esa fecha); el deber -cumplido a medias- de ajustar su organización a la Constitución de las Provincias Unidas, como correspondía, creando órganos nuevos como el Tribunal de Apelaciones, los jueces letrados de Montevideo, los de paz; y los principios artiguistas de separación e independencia de poderes, con un énfasis superior a los de las constituciones y leyes argentinas. El mismo Suárez, en su calidad de Delegado del Gobierno Provisorio, había dictado la "Proclama" del 13 de diciembre de 1828, por la cual: *"Queda prohibido a los tribunales, magistrados, cuerpos municipales y, en general, a todos los ciudadanos y vecinos, cumplir ni obedecer órdenes, providencias o decretos de toda autoridad extranjera".*

56. Corresponde mencionar, como disposiciones más importantes de esta etapa previa -que en gran parte fundamentarán después el período constitucional-:

a) la ya mencionada ley -sancionada por el Gobierno Patrio en Canelones el 6 de octubre de 1826 y promulgada el 15 de ese mes- por la que, como vimos en la Parte anterior, se suprimió los cabildos y se previó la instalación del Tribunal de Justicia;
b) las disposiciones relativas al ya citado Tribunal de Justicia, tales como:
   (i) la ley promulgada en Canelones el 18 de abril de 1827, que instala dicho Cuerpo y lo integra con tres Ministros, uno de los cuales se desempeñará como Fiscal de Hacienda, un escribano relator y un portero-alguacil; (ii) la ley, ya en Montevideo, del 3 de abril de 1830, que aumenta a cinco el número de Ministros, y establece el *quorum* de cuatro miembros para que haya tribunal y de tres para dictar sentencia; y (iii) la ley del 12 de febrero de

1831 (ya en período constitucional) que determina la manera de elegir los Ministros: hasta que se instale la Alta Corte de Justicia, el nombramiento de los jueces del Tribunal de Apelaciones se hará en la forma preceptuada constitucionalmente para los de aquella Corte: por la Asamblea General del Poder Legislativo;

c) el estatuto de los Alcaldes y Tenientes Alcaldes aparece consagrado por el decreto dictado en Durazno el 6 de diciembre de 1827: se les considera, como ocurría en la época del cabildo, jueces ordinarios, con jurisdicción en las capitales de los departamentos ("pueblos cabeza de departamentos"), conjuntamente con un defensor de pobres y menores y un agente fiscal del crimen. Las funciones de todos ellos son gratuitas, pero se les asigna un rubro para gastos; los alcaldes, como en España, se reunirían en consejos de administración con el objeto de "velar sobre las necesidades de los departamentos", lo que recuerda su calidad edilicia en la época colonial;

d) los Jueces de Paz, magistratura menor que aparece por primera vez en este período, cumpliendo la debida legislación rioplatense, tienen también su estatuto en el Reglamento para la Justicia de Paz, dictado por el Gobierno (*ad referendum* de la Honorable Junta de Representantes) el 26 de enero de 1827. Sus funciones son fundamentalmente conciliatorias y arbitrales, y se manejan con un formulario que les suministra el Tribunal de Justicia (personalmente, hemos tenido oportunidad de observar que esos magistrados llevaban sus causas -verbales- y conciliaciones, en grandes libros, que rayaban siguiendo el modelo o formulario que se les proporcionaba; rara vez, en expedientes);

e) empero, seguramente, la norma relativa a nuestro tema dictada en este período, con mayor interés, es el "Reglamento *Provisorio* (*rethius:* "Provisional") para la Administración de justicia, promulgado en calidad de ley por la Asamblea .General Constituyente y Legislativa, en Montevideo, el 10 de agosto de 1829. Mas la importancia de este documento -en su época y como anticipación de la futura legislación procesal y de organización de la Justicia futura- aconseja su examen por separado. (2)

CAPÍTULO II
EL REGLAMENTO "PROVISORIO"
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

57. Aunque se le haya denominado "Provisorio" (con un galicismo de increíble persistencia en el lenguaje jurídico del país, hasta ahora no aceptado por la Academia de la Lengua), por su contenido, este Reglamento tiene gran trascendencia, no sólo histórica, sino como antecedente de parte fundamental de nuestra realidad forense.

El Dr. GELSI BIDART ha resumido lo fundamental de este Reglamento de la siguiente manera:

[Sus órganos son] -*Tenientes Alcaldes,* que intervienen en sumarios penales para aprehender a los reos y, en juicios civiles, por suma menor a veinte pesos.

-*Jueces de Paz*: son no menos de tres ni más de cinco por departamento.

-*Alcaldes Ordinarios*: [intervienen en:] causas civiles: en segunda instancia, de las apelaciones contra los jueces de paz; en primera, en asuntos de más de doscientos y menos de tres mil pesos. En las causas civiles, sentencian con dos colegas sacados por la suerte de una lista de treinta vecinos nombrados por los Consejos o Cabildos antes de cesar. En materia penal, intervienen en lo sumarios.También en plenario (primera instancia) en causas de vagos, embriaguez, uso de armas en pelea, juegos prohibidos e injurias(según la ley de 1° de diciembre de 1829). Nombrarán perito que dictamine por escrito en todos los asuntos que "exijan conocimientos facultativos"(art.13).

-*Jueces Letrados:* dos en la Capital: uno para lo civil y otro para lo criminal. Éste tendrá competencia nacional y forma el tribunal con cuatro "hombres buenos" sacados a la suerte. El civil interviene en primera instancia en asuntos mayores de tres mil pesos y en apelaciones de los restantes.

-*Tribunal de Comercio:* - Tribunal del Consulado en Montevideo y diputaciones subalternas en Maldonado, Colonia, Mercedes y Paysandú. Los diputados de comercio proceden con dos colegas nombrados a la suerte entre todos los comerciantes del lugar. Juzgado de Alzadas (para asuntos mercantiles): un miembro del Tribunal de Apelaciones elegido por dos años por el Tribunal, que actuará con dos colegas de una lista de sesenta comerciantes que formarán el Tribunal del Consulado cada dos años. [Por más información sobre el Consulado, ver la Parte Primera de este trabajo].

-*Tribunal de Apelaciones* : Interviene en los recursos de apelación y de súplica de los jueces de lo Civil y Comercial, y de los recursos de nulidad e injusticia notoria de las causas de comercio y en las causas por fuerza (ley de 17 de agosto de 1829). --*Integración:* del Tribunal, tres miembros; a) para la apelación, tres; b) para la súplica, tres más cuatro hombres buenos de una lista de sesenta vecinos que cada año forma el Gobierno; c) para el recurso de injusticia notoria, los tres más ocho hombres buenos; d) en las causas criminales en que se imponga pena capital, deportación perpetua o más de seis años de presidio, los tres y un jurado de nueve individuos elegidos por sorteo, que entenderá en cuanto a los hechos, en tanto los tres Ministros lo hacen en cuanto al derecho.

En la primera instancia, la integración es, ordinariamente, unipersonal. Pero el Tribunal de Comercio se compone de un prior y dos cónsules (según Real Cédula de enero de 1794). En las causas civiles, el Alcalde ordinario se integra con dos colegas, legos; igualmente, las Diputaciones de Comercio y el Juzgado de Alzadas.

La segunda instancia es unipersonal para los jueces de lo Civil y Criminal, y pluripersonal para los Alcaldes, el Juzgado de Alzadas y el Tribunal de Apelaciones.

- *Designaciones:*

Los Tenientes Alcaldes son elegidos por los vecinos del partido, en junta presidida por el saliente. Los Jueces de Paz por los Tenientes Alcaldes reunidos en junta presidida por el Alcalde saliente. Los Alcaldes Ordinarios, por los vecinos de "la cabeza" del departamento que quieran concurrir. El Juez Letrado, por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones por la Asamblea General, de una lista de doble número presentada por el Gobierno.

-*Duración:* Los Tenientes Alcaldes, los Alcaldes y los Jueces de Paz, duran un año; los restantes, por el tiempo de su buen comportamiento.

-*Otros funcionarios:*

-Hay escribanos, designados por el Tribunal de Apelaciones a propuesta de los respectivos jueces en donde sea factible; si no, el Alcalde y el Juez de Paz recibirán los emolumentos que les habría correspondido a esos escribanos.

-Además, hay un ordenanza para cada tribunal, a propuesta del juez, menos para los Tenientes Alcaldes; y un alguacil.

-Cabe agregar: a) un Agente Fiscal del Crimen, acusador público y que se

desempeñará como defensor en los juicios civiles de menores; b) un Fiscal General, designado por el poder Ejecutivo; c) un Defensor en las causas de menores y esclavos, nombrados, como los Alcaldes Ordinarios (art.16; y ley de 24 de octubre de 1829, art.1°).

-La ley de 13 de febrero de 1830 dispuso que, cuando no se pudiera conseguir la reunión de los "colegas", el Alcalde ordinario procedería por sí solo, aconsejándose previamente con dos "individuos". Y los Jueces Letrados, con el consentimiento de las partes, podrían también decidir por sí solos.

-La ley de 13 de marzo de 1830, dispuso que en cada pueblo de más de mil "almas" habría un Alcalde Ordinario, un Defensor y dos suplentes.(3)

58. **Otros aspectos del Reglamento "Provisorio" de Justicia.**

A los aspectos de la ley de 1829 relevados por el Prof GELSI , podemos agregar los siguientes:

a) que este Reglamento mantenía, en general, varias de las previsiones edictadas por la legislatura de la Provincia el 26 de enero de 1827;
b) que los jueces debían designar defensores de oficio en todas las causas relativas a los esclavos, para patrocinarlos y representarlos (desde que los mismos carecían de capacidad legal de ejercicio, como los menores: art.6);
c) que los jueces letrados tendrían sueldos (dos mil pesos anuales el Civil, dos mil quinientos el del Crimen, más el cobro del derecho de firma y sesenta pesos para gastos de oficina (art.20);
d) ganarían: los Ministros del Tribunal, tres mil pesos anuales, el escribano relator, quinientos; el ordenanza-alguacil, doscientos;
e) el Tribunal se debía reunir diariamente (menos los días "de guardar"-fechas religiosas- y festivos), durante tres horas por lo menos (art.60);
f) de las penas, se declaraba abolidas la de tormento y la de confiscación de bienes; así como el juramento de los acusados (art.71); persistía, empero la pena de muerte, aunque ya había quienes, como Larrañaga, postulaban su abolición.
g) y se prohibía la prisión por deudas civiles y por cuasidelitos (art.72).
h) Los Ministros, jueces letrados y Alcaldes ordinarios, en su oficio debían usar "vestido negro y decente", sombrero armado y bastón. (Art.94).

59. **Últimas actividades de la Cámara de Justicia.** La Cámara de Justicia, primer órgano específicamente judicial del país, cuyo mérito correspondió -con otros modernizadores, es justo reconocerlo- a la dominación lusitana, a fines de esta etapa estaba ya en camino de llegar a ser, sin grandes transformaciones, el Tribunal de Apelaciones del Estado. (3 bis)

Por ello, echaremos una última mirada a sus Libros de Acuerdos, hoy en el Archivo de la Suprema Corte de Justicia.

a) Por ejemplo, en el acuerdo del 10 de diciembre de 1828: *"...se reúne la Cámara de Apelaciones en forma extraordinaria para escuchar el siguiente oficio recibido del Ilustrísimo y Excelentísimo Barón de la Calera* [lo era Tomás García de Zúñiga] *que dice: 'Habiendo la Asamblea General Constituyente del Estado elegido para Gobernador y Capitán General Provisorio* (sic) *al señor Brigadier don José Rondeau y al ciudadano don José* [hoy más conocido como Joaquín] *Suárez para sustituirlo hasta el apersonamiento del expresado Sr. Rondeau* (4), *cese por tal motivo esta Presidencia, en conformidad con el art. 6 de la Convención Preliminar de Paz celebrada entre S.M. el Emperador del Brasil y el Gobierno de la República Argentina, lo que participo a V.E. para inteligencia y fines consiguientes. Dios guarde a V.E. -Montevideo, 9 de diciembre de 1818.* [Firmado:]*Barón de la Calera.' "*. Corresponde agregar que, por el mismo acuerdo, cesó en su cargo el Oidor Decano Propietario don Nicolás Herrera que, como la mayor parte de sus colegas, habría de tener prolongado papel público en la naciente República

b) En otro acuerdo al que nos hemos referido brevemente ya, el de fecha 10 de diciembre de 1828, se expresa que: *"...compuesta la Exma. Cámara de Apelaciones por los Sres. Oidor Decano d. Nicolás Herrera, Oidor don Francisco Llambí y Hombre Bueno don José de Béjar (no asistió el Oidor d. Xavier García de Zúñiga por hallarse enfermo) se recibió el siguiente oficio del Exmo. Sr. don Joaquín Suárez: 'El Gobernador y Capitán General Interino, Encargado del Poder Executivo del Estado, hace presente a los Sres. de la Exma. Cámara de Apelaciones que mientras no se expida la ley que uniforme la Administración de Justicia, debe continuar ese Tribunal desempeñando las funciones*

que hasta aquí ha desempeñado, sin hacer alteración alguna de las formas, método de su despacho y número de empleados, quedando la Presidencia a cargo del más antiguo. El Gobernador que firma, al comunicarlo a los Sres. de la Exma. Cámara, tiene el honor de saludarlos con la mayor consideración. 3 de Diciembre de 1828.[Firmado.] *Suárez.".*

Como se advierte, el tribunal principal del nuevo Estado conservaba su integración, sus facultades y procedimientos, por lo menos en forma provisional, hasta su reorganización jurídica.

SECCIÓN SEGUNDA:
LA CONSTITUCIÓN DE 1830.

CAPÍTULO I
PROCESO DE FORMACIÓN PARLAMENTARIA DE LA PRIMERA CARTA.

60. La gestación de nuestra primera Constitución fue lenta y laboriosa, promoviéndose a menudo durante ella enfriamientos del entusiasmo, roces, detenciones y conflictos menores de carácter principalmente político, que en algunos momentos amenazaron (no olvidemos el clima bélico de nuestra independencia) con llegar a los mismos límites de una guerra civil.

En una de sus primeras sesiones, la Asamblea General Constituyente y Legislativa designó una Comisión de Constitución y Legislación, integrada por *Jaime Zudáñez, José Ellauri, Cristóbal Echeverriarza, José Zubillaga, Juan Francisco Giró, Luis D. Cavia y Solano García.* El 7 de marzo de 1829, la referida Comisión presentó a la Asamblea su proyecto de Constitución.

Aunque la discusión legislativa presenta muchos aspectos dignos de atención, nos limitaremos a recordar, fundamentalmente, aquellos que se relacionan con la materia de este trabajo, o sea los relativos a la función jurisdiccional.

Así, por ejemplo, al tratarse el Capítulo I del tema relativo a la Administración de Justicia -según CAPUTI- la discusión se siguió en la siguiente forma: (5)

a) se leyó el artículo 111 del citado proyecto, según el cual: " CAPÍTULO I.- Art.111: *El Poder Judicial se ejercerá por una Alta Corte de Justicia, Tribunal o Tribunales de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia en la forma que estableciere la ley".*
"Puesto en discusión:
"El señor Barreiro (don Miguel), propuso que este artículo y los siguientes hasta el 126 inclusive del Proyecto volviesen a la Comisión para que los redactase de nuevo, teniendo presentes las circunstancias en que se hallaba el País y la escasez de Letrados que tenemos.
"Fue suficientemente apoyado y se pasó a discusión como cuestión previa. Varios señores Diputados adujeron diferentes razones en pro y en contra de esta indicación y últimamente se dio el punto por suficientemente discutido, y se fijó la votación en estos términos:
"Si los artículos desde el 111 hasta el 126 inclusive del Proyecto han de volver a la Comisión: *Afirmativa.* En seguida, el señor Ellauri pidió que se le eximiese de entender en la nueva redacción de los artículos o que se nombrase para esto una Comisión especial. Otros señores miembros de la Comisión de Legislación hicieron igual solicitud y en consecuencia se pasó a la resolución de la Asamblea si se había de nombrar una Comisión especial a los objetos indicados en la moción del Sr. Barreiro: resultó la afirmativa y se nombraron para componerla a los Sres. Zudáñez, Álvarez, Chucarro, Costa, Barreiro (don Miguel), Vázquez y Vidal. En este estado, se suprimió la sesión por ser la hora avanzada y se retiraron los señores a las diez de la noche." (5)

b) Según el acta del 1° de agosto de 1829, se recibió una comunicación de la Comisión Especial proponiendo la suspensión de la entrada en vigencia del Capítulo correspondiente a una parte de la organización de la Justicia, que decía: "CAPÍTULO VII. Artículo Único: *La organización del Poder Judicial sobre las bases comprendidas desde el artículo 111 hasta el 126, podrá suspenderse por las Legislaturas siguientes, ínterin a juicio de ellas no haya suficiente número de abogados y demás medios de realizarse. Las mismas proveerán por un Reglamento provisorio, Leyes y Decretos lo conveniente para ocurrir a las necesidades más*

urgentes, observándose entre tanto el Reglamento que, con la misma calidad provisoria está sancionando la Asamblea General." [Y firman:] *Costa, Vázquez, Álvarez, Chucarro, Vidal, Zudáñez.*

c) En la sesión del 7 de agosto de 1829, Ellauri propuso que no se crease todavía la Alta Corte, contestándole Barreiro que ello no eliminaba el problema de la carencia de letrados. Sugirió entonces Chucarro que se sustituyera la denominación de Juzgados de Primera Instancia, por "Juzgados Inferiores", por la misma razón.

En esa misma sesión, se discutió el número de integrantes de la Alta Corte, proponiendo Gadea que esos miembros no fuesen más de nueve ni menos de cinco. Se adoptó finalmente el temperamento de Ellauri de que la Constitución determinara solamente el número de tribunales y juzgados, pero no el de sus integrantes, lo que se efectuaría por leyes especiales.

Como dato curioso, puede citarse la pintoresca sugestión de Miguel Barreiro, que proponía que los integrantes de la Alta Corte fuesen obligatoriamente de estado civil casados, ponencia que obviamente se rechazó.

d) Hesitaciones similares se produjeron en cuanto al tema de la antigüedad en el ejercicio profesional para acceder a los diferentes órganos judiciales.

61. **La Constitución.** - La Carta Fundamental que primero rigió los destinos de nuestro país, ha sido justamente elogiada para su época. En su redacción se advierte los primores de su inspiración, pues en ella influyó la de la Constitución chilena de 1825, redactada por Mora, un celebrado poeta de aquel país; también tuvo mucho que ver en esa redacción -además que en sus avanzados conceptos- la intervención del insigne jurista y político americanista, el doctor *Jaime Zudáñez.*

La figura de Zudáñez merece un pequeño escolio. No era oriental, sino que había nacido en Chuquisaca, entonces Alto Perú y hoy República de Bolivia. Se doctoró como abogado en la prestigiosa Universidad de Charcas e integró el Tribunal de Justicia chileno. Verdadero ciudadano de América, llevó sus ideas liberales a muchos otros lugares del continente, habiendo sido asesor del Cabildo de Buenos Aires en 1815; integrante del Congreso Constituyente de

Tucumán -donde colaboró en la preparación de la Constitución de las Provincias Unidas y tuvo la valentía y dignidad republicana de oponerse enérgicamente allí al proyecto (sugerido desde París) de establecer una monarquía para estas Provincias-. Llegó a nuestra tierra en una época fermental, representando a Montevideo en la Asamblea General Constituyente de 1828 y, como decíamos, intervino en la redacción de la Constitución. Lo veremos más adelante como primer Presidente del Tribunal Superior de Justicia. A él se le debería, entre otras colaboraciones en la Carta, el *"Manifiesto a los Pueblos"* con el que la presentó la Asamblea Constituyente. (6)

62. Las dificultades en que debió hallarse la Asamblea Constituyente para culminar su importante labor, se advierten bien en el informe que el 6 de mayo elevó a la misma Ellauri, al procederse a comenzar el estudio del proyecto en plenario: *"...La Comisión -decía- no tiene la vanidad de persuadirse de que haya hecho una obra original, grande, ni perfecta. Lo primero, sería una extravagancia; porque en materia de Constitución, señores, poco o nada nuevo hay que discurrir después de que las naciones más civilizadas del globo han apurado las grandes verdades de la política, y resuelto sus más intrincados problemas, que antes nos eran desconocidos. Todo lo que puede ya exigirse es que se consulte detenidamente la prudencia para hacer prácticamente posible la aplicación más adecuada y conveniente de esos principios consagrados como dogmas en las diferentes cartas que han visto la luz pública.*

"Lo grande y perfecto no era compatible con las escasas luces de los miembros de la Comisión, y con las dificultades de todo origen que les ha sido forzoso superar para concluir un trabajo tan delicado, como importante. Los señores Representantes son testigos oculares de las faltas que se han sufrido en las diferentes residencias accidentales, que ha hecho necesariamente la Asamblea en los otros departamentos. Sin la comodidad precisa para el recogimiento, y la meditación, sin libros, y sin una sociedad numerosa de ciudadanos ilustrados a quienes consultar y de quienes recoger conocimientos útiles, desconfiando de nuestra propia debilidad, ¿cómo era posible lisonjearnos con la esperanza del acierto? Todo ello no obstante, la Comisión se veía obligada a emprender la obra y llevarla a su conclusión. Era preciso establecer el pacto; la Asamblea no podía desentenderse de su primera y más sagrada atención, de constituir el Estado." (7)

63. La Convención Preliminar de Paz, que puso fin a la guerra entre la República Argentina y el Imperio del Brasil, con la mediación del Imperio Británico, en Río de Janeiro el 27 de agosto de 1828, había previsto la creación de un estado independiente en la hasta entonces Provincia Cisplatina. Aprobado el proyecto de Constitución por esas potencias, que a la vez se comprometían a garantizar la independencia del nuevo estado, el 10 de septiembre de 1829 se sancionó por la Asamblea General Representativa y, para su ratificación, se procedió a jurar públicamente su reconocimiento, comenzando por Montevideo, el 18 de julio de 1830 como es sabido y gradualmente en las restantes poblaciones del interior del país.

64. **La Justicia en la Constitución de 1830.** Los temas vinculados con la Justicia en la Carta constituyente del Estado Oriental del Uruguay, pueden relevarse en dos partes fundamentales de su texto.

a) En las normas que constituyen el aspecto dogmático de ese texto, o sea la indicación de principios generales, como garantía de los derechos esenciales que garantizan la seguridad y demás beneficios de sus habitantes. Y b) en la creación y organización de los órganos de gobierno, a través de los cuales se hará efectiva la voluntad popular y se asegurará la soberanía de la Nación.

a) El aspecto dogmático de la Constitución de 1830, se encuentra establecido parcialmente en el capítulo 2o. de la Sección Primera (arts.9º y 10º), en la parte inicial del texto y fundamentalmente en su parte final -a diferencia de las Cartas posteriores- en las Secciones Undécima y Duodécima.

Puede decirse que este aspecto se apoya fundamentalmente en dos dogmas, que tienen su origen muy claro en los principios artiguistas y su inspiración en el movimiento constitucional liberal republicano de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Revolución Francesa, visibles desde entonces en todas las sociedades democráticas: la protección de la libertad nacional e individual y la consagración de la igualdad de todas las personas. Así, por ejemplo:(i) el art. 9º establece que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y el 10 establece que todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos; (ii) el art.130 asegura a todos los habitantes del Estado (aquí no se limita a los ciudadanos, como los artículos anteriormente citados, en los que la condición

elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punise. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux son également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle des leurs vertus et de leurs talents"(La ley es la expresión de la voluntad general; todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir personalmente o por sus representantes a su formación; debe ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue. Siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que las de sus virtudes y de sus talentos); (iv) tal vez más aproximados a nuestra materia -aunque no por ello los únicos importantes- son los arts.133 (que prohíbe los títulos de nobleza), el art.134 (que pone al abrigo de las autoridades las acciones privadas), el art.135 (que establece la inviolabilidad del domicilio), el 136, según el cual nadie puede ser penado ni confinado sin forma procesal y sentencia legal), el 137 (que comete al Legislativo establecer a la brevedad el juicio por jurados en las causas penales y hasta en las civiles), el 138 (tan avanzado para su tiempo, tal vez inspirado por Beccaria: "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí sólo para asegurar a los acusados"); y otros de los que ya habrá oportunidad de ocuparse.

b) Pero, además, como lo entendía bien ARISTÓTELES, una función esencial de toda constitución es el establecimiento de las magistraturas -o sea órganos de gobierno de un estado- y de sus respectivas funciones. (10)

Reconocida en la nueva Carta la división de las funciones a cargo de los diferentes órganos de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial: se delega el ejercicio de la soberanía "en los tres altos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo las reglas que se expresarán": art.14). El Poder Judicial "se ejercerá por una Alta Corte de Justicia, Tribunal o Tribunales de Apelaciones, y Juzgados de primera instancia en la forma que estableciere la ley"(art.91). La Alta Corte de Justicia se compondría del número de integrantes que estableciera la ley (art.92). Para ser miembro letrado de la Alta Corte (lo que luego se llamará Ministro, a diferencia de los

elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punise. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux son également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle des leurs vertus et de leurs talents"(La ley es la expresión de la voluntad general; todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir personalmente o por sus representantes a su formación; debe ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue. Siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que las de sus virtudes y de sus talentos); (iv) tal vez más aproximados a nuestra materia -aunque no por ello los únicos importantes- son los arts.133 (que prohíbe los títulos de nobleza), el art.134 (que pone al abrigo de las autoridades las acciones privadas), el art.135 (que establece la inviolabilidad del domicilio), el 136, según el cual nadie puede ser penado ni confinado sin forma procesal y sentencia legal), el 137 (que comete al Legislativo establecer a la brevedad el juicio por jurados en las causas penales y hasta en las civiles), el 138 (tan avanzado para su tiempo, tal vez inspirado por Beccaria: "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí sólo para asegurar a los acusados"); y otros de los que ya habrá oportunidad de ocuparse.

b) Pero, además, como lo entendía bien ARISTÓTELES, una función esencial de toda constitución es el establecimiento de las magistraturas -o sea órganos de gobierno de un estado- y de sus respectivas funciones. (10)

Reconocida en la nueva Carta la división de las funciones a cargo de los diferentes órganos de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial: se delega el ejercicio de la soberanía "en los tres altos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo las reglas que se expresarán": art.14). El Poder Judicial "se ejercerá por una Alta Corte de Justicia, Tribunal o Tribunales de Apelaciones, y Juzgados de primera instancia en la forma que estableciere la ley"(art.91). La Alta Corte de Justicia se compondría del número de integrantes que estableciera la ley (art.92). Para ser miembro letrado de la Alta Corte (lo que luego se llamará Ministro, a diferencia de los

conjueces) era preciso haber ejercido la abogacía durante seis años por lo menos, o cuatro la magistratura judicial, tener cuarenta años cumplidos de edad y las demás condiciones para ser Senador (ciudadanía legal en ejercicio o legal con catorce años de residencia, en las dos primeras legislaturas y siete en ejercicio, o un capital o rentas por diez mil pesos o profesión científica en las siguientes: art.30); los cuatro años de magistratura -como es natural- se exigirían a los cuatro años de jurada la Constitución, ya que antes no había magistrados constitucionales, estas condiciones podrían exigirse por ley posterior, también a los miembros no letrados (art.93). El nombramiento lo haría la Asamblea General, su sueldo se fijaría por ley y durarían en su cargo por todo el tiempo de su buen comportamiento (art.95). Se establecería, con jurisdicción nacional, uno o más Tribunales de Apelaciones por leyes, que también establecerían el número de sus integrantes, que debían ser ciudadanos naturales o legales, con cuatro años en la profesión de abogados (arts.102 y 103), designados por la Alta Corte de Justicia con aprobación del Senado o de la Comisión Permanente en caso de receso (art.100), durando también el tiempo de su buen comportamiento; sus atribuciones y retribución las determinaría la ley (arts.103 y 104). En los departamentos habría jueces letrados de primera instancia en lo civil y en lo criminal, de acuerdo con la ley, mientras no se estableciera el juicio por jurados; estos jueces debían ser ciudadanos y haber ejercido la abogacía por dos años (arts.105 y 106). Habría también jueces de paz (no letrados) con el cargo de procurar la conciliación, sin cuyo cumplimiento no se podía iniciar juicios civiles ni promover causas por injurias(art.107).

En razón de la falta de letrados en el nuevo Estado (como ya se había advertido en el proceso de redacción de la Carta, según vimos), esta organización judicial podía suspenderse por las legislaturas subsiguientes, en tanto no hubiera abogados y otros medios necesarios (art.117).

65. Como adelantamos, el 26 de mayo de 1830, este proyecto de Constitución había sido aprobado por las potencias que garantían la Convención de Paz de 1828. El Auto de aprobación respectivo decía así: "*Los abajo firma-*

dos, el General D. Tomás Guido, Ministro Secretario de Estado en los Departamentos de Gobierno y de Relaciones Exteriores del Gobierno de Buenos Ayres, y Miguel Calmón du Pin é Almedia, del Consejo de S.M. el Emperador del Brasil, Ministro Secretario de Estado, de los Negocios Extranjeros, Comisarios nombrados por sus respectivos Gobiernos, de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Brasil, conforme al art. 7° de la Convención preliminar de paz, firmada entre los referidos Gobiernos, a los 27 días de Agosto de 1828 en esta Corte del Río Janeiro, y ratificada el día 30 del mismo mes por S.M. Imperial, y en el día 29 de Septiembre del mismo año, por el Gobierno de la Unión del Río de la Plata, y debidamente autorizados sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, para examinar si la Constitución política de la Provincia de Montevideo [sic] *formada por los representantes de ella, en virtud de la mencionada Convención, contiene algún artículo o artículos que se opongan a la seguridad de sus respectivos Estados: -habiendo procedido al determinado examen con toda madurez y circunspección, declaran del modo más explícito y solemne, y de común y mutuo acuerdo, que en la Constitución firmada por dicha Provincia de Montevideo, que tiene por título* Constitución de la República Oriental del Uruguay, *sancionada en el día 10 de septiembre de 1829 por la Asamblea General Constituyente y Legislativa de la misma República, firmada por el Presidente de la misma Asamblea, y Diputado por Montevideo, D. Silvestre Blanco, y por veinte y ocho diputados más de los departamentos, a saber: -7 por Montevideo; 2 por el Cerro Largo; 4 por Santo Domingo Soriano; 3 por San José; 2 por la Colonia; 4 por Maldonado; 2 por Paysandú; 2 por Canelones; 1 por el Durazno y 1 por Sandú; y por los Secretarios D. Miguel Antonio Berro y D. Manuel José Errazquin, y finalmente, tal cual fue presentada a sus respectivos Gobiernos, impresa y sellada por los Encargados de Negocios de la misma República en la Ciudad de Buenos Aires y en la Corte del Brasil, no existe artículo ni artículos algunos que se opongan a la seguridad de la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Imperio del Brasil; -y que por consecuencia, puede ser inmediatamente jurada y debidamente ejecutada en la forma adoptada y prescripta en la misma Constitución en toda la República Oriental del Uruguay. -En fe de lo cual, los Comisarios abajo firmados, nombrados por los Gobiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Brasil, en virtud de sus plenos pode-*

res, firmaron con sus manos esta declaración y la sellaron con el sello de sus armas. -Dado en la Ciudad de Río Janeiro a 26 días del mes de Mayo del año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Cristo 1830."

SECCIÓN TERCERA:
EL PERÍODO POSCONSTITUCIONAL.

CAPÍTULO I
LA LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA.

66. Como es sabido, la Constitución es la norma de mayor jerarquía del Derecho positivo de todo estado independiente: es como el marco, el programa de la voluntad jurídica de una sociedad libre. Da las instrucciones al legislador común para que haga efectivos esos principios por medio de leyes corrientes; de otra manera, sus previsiones serían meras enunciaciones programáticas.

Por esta razón, una vez jurada la Carta de 1830 (que era un modo entonces habitual de promulgar popularmente una Constitución: recordemos cómo la Constitución española liberal de 1812 se juró en Montevideo (dando nombre a la entonces su plaza principal) el Poder Legislativo del Estado Oriental comenzó a dictar muchas e importantes leyes que la complementaran.

Nosotros nos limitaremos a mencionar las que tienen relación directa o indirecta con nuestro tema: la historia de la Justicia nacional.

67. E, incluso, entre esas normas relacionadas con nuestra materia, en razón de su explicable abundancia, solamente podremos dar una muy rápida versión de las más importantes y de las promulgadas en el período comprendido entre la puesta en vigencia de la Constitución de 1830 y el establecimiento de la Alta Corte de Justicia, en 1907.

68. Convendrá tener presente, además, que esta legislación se va formando de manera irregular y poco armónica, en tiempos de turbulencia para el país. No se está a salvo de las pasiones políticas, que llevan a un desarrollo contradictorio (con creaciones, derogaciones y recreaciones de algunos institutos o de su integración) y a veces herético, como la derogación o modifica-

ción de leyes comunes por meros decretos, y la invención, claramente inconstitucional, de los "decretos-leyes".

69. **Las primeras tentativas.** El Tribunal Superior de Justicia, que desde el Reglamento Provisorio de 1829, se componía de cinco miembros -de los que bastaban cuatro para poder sesionar y tres para fallar-, por la ley de 10 de mayo de 1858 (previos otros avatares), ante la dificultad de hallar letrados en cantidad suficiente, redujo a tres el número de camaristas.

Más tarde, en 1861, en razón de que la ley de 1859 había dividido en dos Secciones la justicia nacional de primera instancia, se establecieron dos Tribunales de Apelaciones, por lo cual ya no podía hablarse del Tribunal sino de "los Tribunales". Pero esto no duró mucho: por el decreto (en realidad, decreto-ley) de 3 de marzo de 1865, se redujo nuevamente a uno el Tribunal, pero con cinco integrantes letrados, de los cuales tres podían formar tribunal y dictar providencias de trámite con dos votos conformes, pero necesitando la conformidad de tres para dictar sentencia definitiva. Es preciso agregar que, cuando en 1861 hubo, como vimos, dos Tribunales de Apelaciones, ambos, reunidos, constituían el Tribunal Superior de Justicia; con el Código de Procedimiento Civil, sancionado por decreto-ley de Latorre el 17 de enero de 1878, el Tribunal vino a quedar constituido por tres Tribunales de Apelaciones, al preverse la constitución de un tercero. Fue lo que se llamó el "Tribunal Pleno".

Este Tribunal, uno o múltiple según la época, tuvo, además una misión fundamental respecto de la docencia jurídica. La reglamentación de la Universidad, aprobada por el decreto de 22 de febrero de 1836, encargó de la inspección de la cátedra de filosofía al juez letrado en lo civil y de la de jurisprudencia al presidente del Tribunal. Cuando, en 1838 se instaló la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, antecedente de la futura Facultad de Derecho, ésta se colocó bajo la superintendencia del Tribunal Superior de Justicia; el Tribunal tenía la misión de redactar el Reglamento interno de la Academia -lo que efectivamente realizó y se aprobó por el Ejecutivo en 1839- (la Academia, en realidad, realizaba un curso de práctica forense, para los ya graduados en filosofía y jurisprudencia, que duraba tres años; este instituto docente era dirigido por un Ministro del Tribunal de Justicia). Por decreto del 4 de mayo de 1865 se suprimió la Academia de Jurisprudencia, estableciéndose en su lugar una cátedra de procedimientos judiciales, que debía cursarse durante dos años -la carrera completa insumía cinco años-; para obtener el título de abogado debía

rendirse un examen general durante una hora ante el Tribunal Superior de Justicia, órgano además facultado para expedir el título profesional. (11)

70. Por la ley de 22 de mayo de 1837, se introdujo el procedimiento escrito en los procesos a cargo de los Alcaldes Ordinarios, que hasta entonces habían actuado en procedimiento verbal, de acuerdo con el Reglamento de 1829. Por la de 13 de junio se reglamentaron los juicios de herencia yacente para los extranjeros; esta ley tiene interés porque varios de sus principios habrían de ser recogidos posteriormente para todos los procesos de la misma naturaleza. Subsistiendo la escasez de letrados, la ley de 14 de junio de ese año autorizó a designar jueces de lo civil a "graduados o inteligentes": esto es, abogados o personas que, sin serlo, tuvieran conocimientos jurídicos.

En 1838, se amplió el Reglamento de Justicia de 1829, dando reglas para los jueces de paz; las principales innovaciones se referían a la manera de recusar a estos magistrados y a llevar un libro de conciliaciones independiente del que se dedicaba a reunir las actuaciones de los juicios de su competencia.

La ley de 29 de marzo de ese año dispuso que las actuaciones ante los Alcaldes ordinarios se asentaran en papel común, no en sellado, que debería emplearse, en cambio, ante los tribunales de apelaciones y los juzgados letrados.

71. Como vimos antes, el Tribunal de Apelaciones, como había ocurrido tradicionalmente en las Reales Audiencias españolas, y todavía se estila en otros países, contaba con un "secretario relator", encargado de resumir, para los camaristas, los procesos en que éstos debían fallar. Se jerarquizó la figura de estos funcionarios por la ley del 31 de mayo de 1838, disponiendo que el relator debía ser "abogado o inteligente". Este cargo, sin embargo, se suprimió años después.

72. El 29 de septiembre de 1851 se estableció el Tribunal, Superior Militar, presidido por el Ministro de Guerra e integrado por los "los seis jefes militares más condecorados y antiguos existentes en la Capital", a efectos de examinar las sentencias dictadas por las autoridades militares, empleando las antiguas reglamentaciones españolas de la materia.

73. Por la ley de 14 de julio de 1854 se creó tres juzgados en lo civil y criminal para la campaña con sedes, respectivamente, en las ciudades de Maldonado, Colonia y Paysandú, pero con jurisdicción sobre los más próximos. Así, los dos ya existentes -respectivamente de lo civil y de lo penal- en Montevideo tendrían, además, jurisdicción sobre los departamentos de Canelones y San José; el de Maldonado, también, sobre Minas (hoy Lavalleja) y Cerro Largo, y el de Paysandú, sobre Salto y Paysandú; se entiende que además de todo el territorio de sus respectivos departamentos. Se cubría así los nueve departamentos en que entonces se dividía la República.

74. En 1856 se promulga dos leyes de gran trascendencia e influencia en la vida jurídica del futuro nacional.

Una, la que más interesa al asunto tratado en este trabajo, es la Ley de Procedimientos, sancionada el día 9 de mayo de ese año y promulgada el 15, también de mayo. En ella se trata de manera prolija, el régimen de recursos (de los jueces de paz, se recurriría ante los alcades ordinarios; de éstos, ante los jueces letrados; de ellos, ante el Tribunal de Apelaciones, y del mismo ante el propio Tribunal, integrado con cinco miembros, dos de ellos conjueces, abogados o graduados, electos por sorteo); se indica los procedimientos para estos recursos -que pueden promoverse en primera o segunda apelación, con efectos devolutivos o suspensivos, según su naturaleza, y se establece el recurso de queja directa por denegación de apelación (arts. 1° a 22). Se regula el juicio ejecutivo (capítulo 2°, arts.23 a 40). Se dispone que las sentencias deben ser motivadas (contrariamente, el derecho colonial español, impedía fundamentar los fallos), (art.41). Trata de los alegatos de bien probado, y, lo que es fundamental, presenta muy claras normas para las notificaciones que, en lo esencial , han subsistido hasta ahora: personal, por cedulón, firmada por el interesado o a ruego;obligación de comparecer a notificarse en algunos casos, etc.

La otra ley importante de ese año es la Ley de Hipotecas, sancionada el 12 de junio y promulgada el 18 del mismo mes. Esta ley, inspirada por la Ley Hipotecaria española, si bien ha sufrido importantes modificaciones posteriores, persiste en sus grandes criterios. Esta ley interesa a nuestro tema, porque establece la hipoteca judicial(capítulo 3°) y trámites para su cobro forzado (arts.79 y ss.).

75. El año 1858 presenta otras dos leyes de interés: la del 10 de mayo, por la cual se limita a tres miembros letrados el Tribunal de Justicia, bastando dos

votos conformes para dictar decretos de trámite, sentencias interlocutorias o providencias que causen gravamen irreparable, siendo necesaria la de los tres para las definitivas; a falta de este número, por discordia, licencias, etc., se realiza un sorteo entre "ciudadanos inteligentes". El 12 de julio se dicta la primera ley sobre arrendamientos y desalojos, ante la escasez de viviendas en la ciudad al concluir la Guerra Grande y aumentarse la población con extranjeros y orientales llegados de la campaña; primera de las normas de la materia que abundarán en los años sucesivos, como es notorio.

76. En 1859 se procede a una nueva organización de los tribunales. Se divide el territorio nacional en dos grandes secciones judiciales. La primera, comprende los departamentos de Montevideo y de Canelones; la segunda, el resto del país. Habrá dos juzgados letrados en cada sección, que se subrogan recíprocamente, y con jurisdicción civil y criminal respectivamente. También hay dos Fiscales en cada sección -uno para lo civil y otro para lo penal-, designados por el Poder Ejecutivo. La falta de letrados para el interior, hizo que los cuatro jueces de las dos secciones judiciales residieran en Montevideo, solución de un evidente pero forzado centralismo.

Por la ley de 12 de junio de 1860, se dispuso la elección popular de los Alcaldes y de los Tenientes Alcaldes. Como se recordará, este sistema politizó esta parte de la Justicia, provocando un acto electivo en Montevideo que dio pretexto para la dictadura militar y llevó a la muerte a un joven y promisorio político nacionalista, como consecuencia de un tumulto en plena plaza Constitución.

CAPÍTULO II
LA CODIFICACIÓN.

77. **Los Códigos.** La segunda mitad del siglo XIX, a pocos años de concluida la Guerra Grande, se caracteriza por un intenso impulso modernizador (en el sentido del progreso económico y científico) proveniente de países que tuvieron gran intervención durante la mencionada guerra y de la que proviene una inmigración comercialmente muy activa, así como una fuerte influencia cultural). Este movimiento es impulsado por gobernantes enérgicos y ansiosos de obtener el apoyo de las potencias modelos; gobernantes en general caudillos

militares de fuerte personalidad, que dejan como huella de su paso las primeras líneas férreas y telegráficas; el servicio de aguas corrientes; la reforma y extensión de la enseñanza primaria; el alambrado y la pacificación(por la fuerza) de los campos y -con el apoyo de los comerciantes en su mayoría europeos- los primeros bancos, el alumbrado a gas, las fábricas (de conservas, textiles, cerveza, etc.) con energía a vapor, etc.

Esta modernidad, siempre en adaptación del modelo europeo, se complementa (inspirado por Francia, Argentina, Chile) con el afán de promulgar los primeros Códigos, para unificar y simplificar los principios dispersos en las viejas leyes patrias o en la subsistente (por necesidad) legislación colonial española.

Los códigos iniciales no tienen una relación directa con el tema que nos ocupa, sino que se dirigen a lo que la población común considera -y con razón, en tiempos del liberalismo- materias más urgentes: las que se vinculan con las relaciones de derecho Privado, pareciendo suficiente para el Público la ley de las leyes: la Constitución de la República. El primero de los códigos es el Código de Comercio, promulgado como decreto-ley el 24 de enero de 1866 y validado por la ley 928, de 30 de abril de 1868. Este código sigue casi a la letra el texto del Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires en 1859, y declarado ley para toda la República Argentina en 1862 (en cuya redacción colaboró el jurista oriental Dr.Eduardo Acevedo); tuvo posteriores reformas importantes; sólo contiene algunas pequeñas referencias de carácter procesal en sus previsiones sobre el derecho marítimo y en materia de concordatos y quiebras, y la cita ocasional al Juez de Comercio. El siguiente código en materia privatista es el Código Civil (le había antecedido un proyecto de Eduardo Acevedo en 1852, que no obtuvo aprobación legislativa), que se promulgó como decreto-ley el 4 de febrero de 1868 y se validó también como ley el 30 de abril de ese año; su redacción -en un correctísimo castellano- se debe al Dr. Tristán Narvaja (12), que puso fin a las dificultades por la abundancia de disposiciones muchas veces contradictorias que se heredara del viejo Derecho Civil español, vigente hasta entonces (13); como en el caso anterior, sus referencias a nuestro tema son muy escasas, pero interesa recordar las importantes previsiones de su Título Preliminar, relativas a las fuentes del Derecho, su interpretación e integración, deber de sentenciar, etc.(arts.1° a 20), entre otras.

Mayor relación, como es obvio, la tienen los códigos procesales, que, para

entonces -fuera de algunas leyes aisladas complementarias-, son el *Código de Procedimiento Civil* y el *Código de Instrucción Criminal.*

a) El Código de Procedimiento Civil fue sancionado por el dictador militar Latorre el 17 de enero de 1878, apoyándose fundamentalmente en un proyecto del doctor Joaquín Requena. A diferencia de otros códigos similares contemporáneos, el oriental incluye una parte dedicada a la organización de los tribunales, solución que, muchos años después, mereciera reparos al profesor Alejandro Lagarmilla. En esa parte, se suprime por fin el cargo de Alcalde Ordinario y se prevé la instalación de un tercer Tribunal de Apelaciones. La justicia nacional viene a quedar integrada (desde la de menor a la de mayor categoría) por:

   i) *Los Tenientes Alcaldes* (llamados posteriormente Jueces de Distrito), con competencia en los juicios civiles que no excedieran de veinte pesos y jurisdicción en ciertos asuntos en jurisdicción rural;

   ii) *Los Jueces de Paz,* competentes para entender en procesos civiles que no superen los doscientos pesos, cuya designación se haría por el Tribunal Superior de Justicia, en lugar de la anterior elección popular;

   iii) En el interior, *Jueces Letrados Departamentales,* en cada capital de departamento;

   iv) Tres *Jueces Letrados en lo Civil,* dos de *Comercio* y un *Juez Letrado Departamental,* en Montevideo.

   v) Y, finalmente, los tres *Tribunales de Apelaciones* que, por separado, entendían de la alzada de las causas seguidas ante los Juzgados Letrados y, reunidos, decidían de los recursos de fuerza y de nulidad notoria y tenían la superintendencia del Poder Judicial, en tanto no se instalara la Alta Corte de Justicia prevista por la Constitución.

Este código contiene, además, numerosas previsiones -en buena parte todavía aplicadas- relativas a los Actuarios, a la manera de hacer las notificaciones (similares a las de la ley de 1856) y organizar la actividad de las oficinas judiciales y llevar sus libros, y también las relativas a los fiscales, los abogados y procuradores; así como sobre la subrogación, recusación y res-

ponsabilidad de los jueces; sin contar las normas estrictamente procesales.

b) A la organización de la Justicia Civil, contenida en el mencionado Código de Procedimiento, siguió la de los tribunales penales, con el Código de Instrucción Criminal, sancionado por el decreto-ley de 31 de diciembre de 1878. Por el mismo, se prevé:
   i) Que los *Jueces de Paz* tuvieran competencia en los juicios por faltas y pudieran formalizar las primeras y más urgentes diligencias presumariales en los delitos, los que serían de jurisdicción de los
   ii) *Juzgados Letrados Departamentales* en el interior, y habría
   iii) un *Juez Letrado Correccional* y dos *del Crimen* en Montevideo,
   iv) culminando con los *Tribunales de Apelaciones,* en tanto no se instalara la Alta Corte de Justicia.

78. Un código que merece el mayor interés -atento a que la actividad agropecuaria ha sido siempre el fundamento de la economía nacional- es el *Código Rural*, sancionado el 17 de julio de 1875 y modificado casi en seguida por el decreto-ley de 28 de enero de 1879. Más adelante, será objeto de una reforma general importante por la ley 10.024 del 14 de junio de 1941, cuya redacción se debe al Dr. Daniel GARCÍA ACEVEDO.

Para nosotros, este cuerpo legal tiene relación con la materia de este trabajo, pues en él se da intervención frecuente a la Justicia de Paz, como jurisdicción especializada, al extremo de confiarle intervención sumarial -hoy derogada- en la causas por abigeato.

SECCIÓN CUARTA
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES.

79. Si nos tomamos la tarea de resumir cuanto hemos dicho ya sobre el Tribunal Superior de Justicia en la historia judicial de nuestro país, podremos observar fácilmente que es el órgano jurisdiccional de más antiguo origen y de

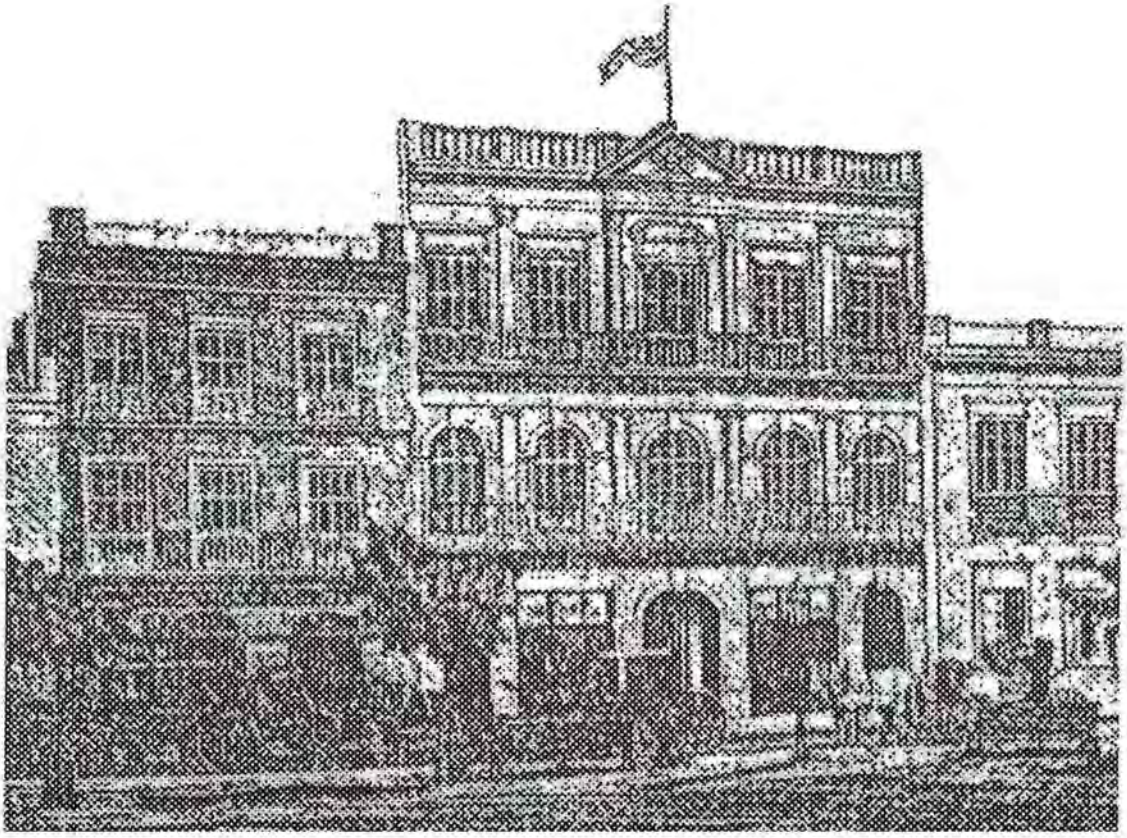


Fig. 4 - La sede del Superior Tribunal de Justicia en 1833, edificio aún existente en la acera norte de la Plaza Independencia.
(Grabado de la Escuela de A. y Oficios. La Ilustración Uruguaya.)

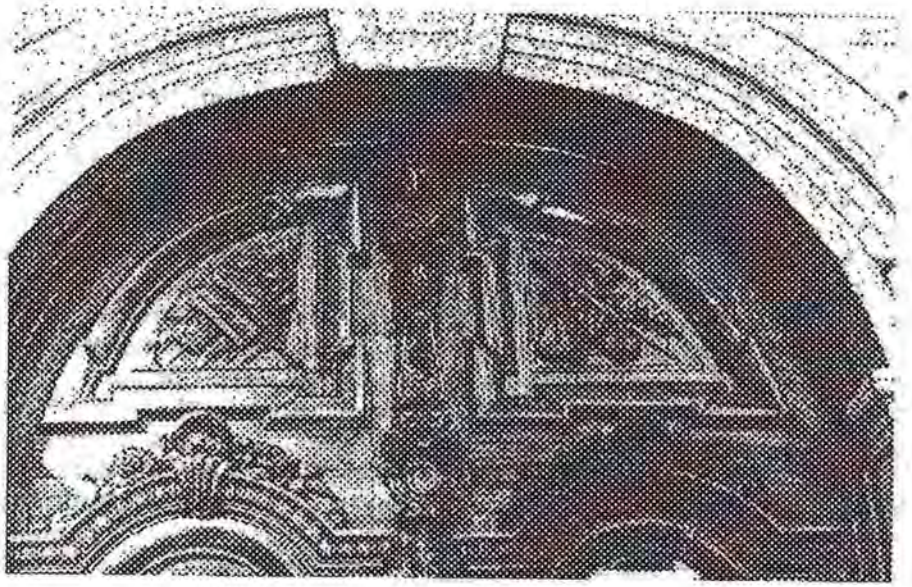


Fig. 4 bis - Detalle de los grabados superiores de la puerta principal en madera tallada - llamada "Cuarterones".

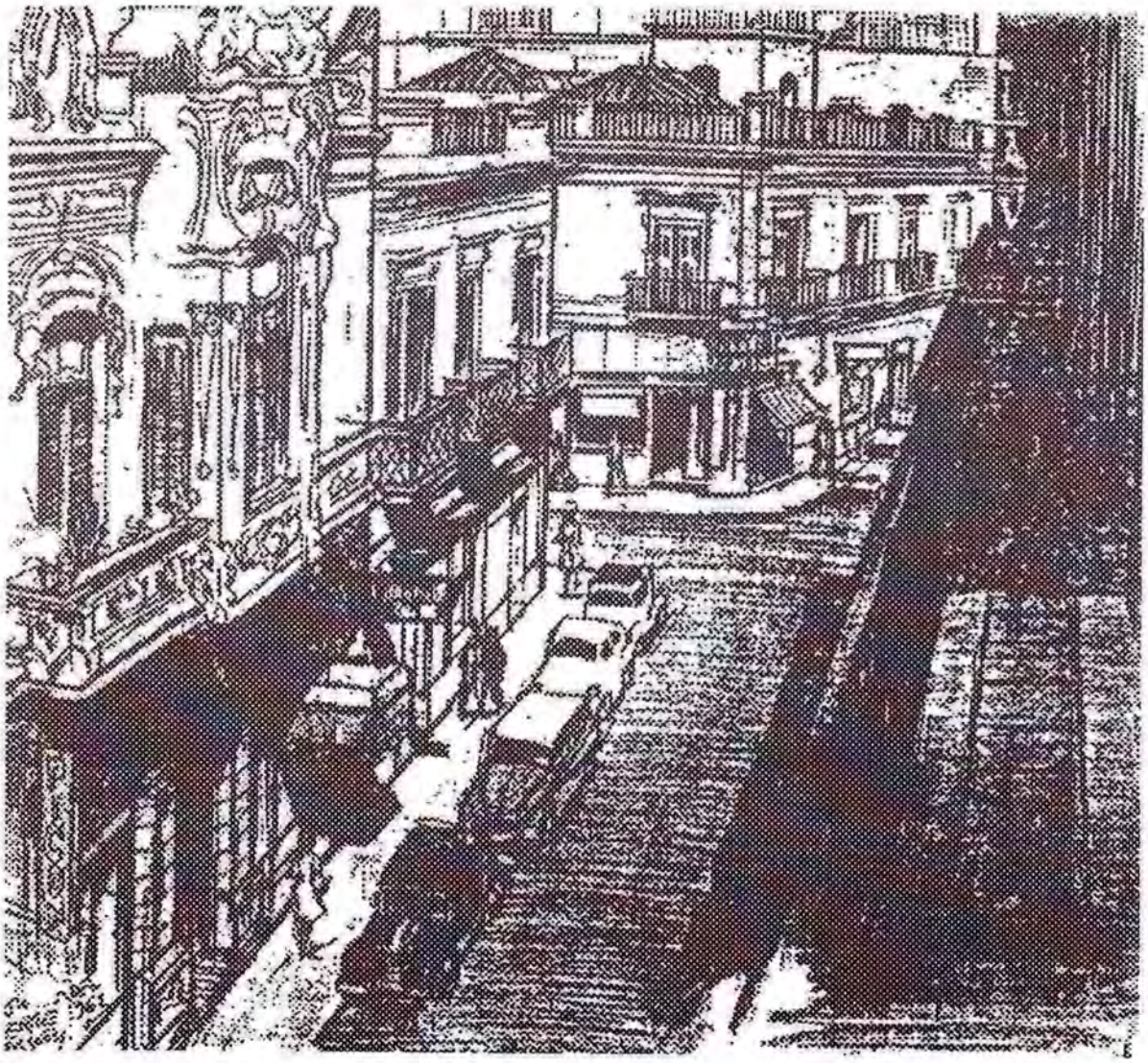


Figura 4.- "Consta de cuatro grandes cuerpos de edificios,cuya construcción elegante, al par que seria y ajustada a a los últimos adelantos del arte,fue dirigida por el ingeniero oriental D. Eduardo Canstatt, director de Obras Públicas, y a cuya pericia se debe también la dirección del *Manicomio.* Los dos cuerpos inferiores se hallan ocupados por la Escribanía de Gobierno y Hacienda, con tres entradas independientes y de comodidad suma para el servicio público.- Los archivos del Estado, los protocolos nacionales encerrados en armarios de hierro, cubren la parte lateral del piso bajo.-Al frente de éste se halla la oficina o despacho de los *Juzgados de Hacienda,* y al fondo los escritorios de los actuarios, en dos cómodos salones desde los cuales se domina y vigila todas las reparticiones. // El *Tribunal S. de Justicia* ocupa los dos pisos altos, cuyas reparticiones son casi correlativas. // Un espacioso vestíbulo y una ancha y cómoda escalera de mármol, comunica y da entrada a los dos cuerpos altos del edificio. // Siendo éstos iguales en su repartición interna, describiremos solamente uno de ellos. // El más elevado lo ocupa el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno, compuesto de los Dres.Rücker,Forteza y Nin. // El principal, de 1er. Turno lo componen los Dres.Velazco, Salvañach y Vilaza. Al frente se hallan los dos grandes salones de audiencias públicas, jurados, recursos extraordinarios, causas criminales,etc. etc. lujosamente amueblados por D.B. Caviglia.// El estrado para los magistrados, de forma semicircular, está algo levantado del suelo,las paredes cubiertas de de riquísimo brocato de seda granate oscuro, el cielo-raso de seda en forma de gran sol, centro dorado y cenefa de brocato, que separa el estrado del reso del salón formando un conjunto majestuoso.// Un hermoso escudo patrio, de nogal oscuro primorosamente tallado, colgado en el fondo sobre el sillón presidencial; una gran mesa de jacarandá maciza de siete varas, que ocupa casi todo el frente con los atributos de la justicia, estilo severísimo, y los sillones de los jueces en número de once colocados detrás de ella, completan el decorado de la cabecera de los salones. "La Ilustración Uruguaya" del 31 de diciembre de 1883.

mayor persistencia entre nosotros. Si hacemos abstracción de las Reales Audiencias -que nunca radicaron en la Banda Oriental y que, además, eran organismos híbridos; con funciones de tribunal de justicia, es verdad, pero además administrativas-, recordaremos su remoto origen como Cámara de Apelaciones, en la época de la dominación lusitana; lo veremos en seguida convertido en Tribunal de Apelaciones en la Provincia Oriental, integrando muy brevemente el período de adaptación a la organización de la Administración de Justicia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y también como Tribunal de Apelaciones, como órgano judiciario de segunda instancia en las primeras leyes nacionales y, particularmente, en la primera Constitución del Estado Oriental; y llenando el lugar en blanco destinado a la Alta Corte de Justicia -en blanco por carecerse de los medios necesarios para instalar esa Corte, particularmente por falta de letrados- constituyéndose para ello en Tribunal Superior de Justicia, sumando a la segunda instancia la superintendencia del Poder Judicial, y, ya como Tribunal Pleno, al establecerse primero dos y luego tres Tribunales de Apelaciones, también la tercera instancia y los procesos extraordinarios. Desaparecidos los cabildos y los alcaldes y tenientes alcaldes desde los primeros tiempos patrios o poco después, con sus diferentes denominaciones, el Tribunal persistirá hasta nuestros tiempos, incluso después del establecimiento de la Alta Corte (hoy Suprema Corte)pero ahora asumiendo nuevamente su papel de órgano de alzada en segunda instancia.

De las dos funciones que desempeñara antes de la instalación de la Alta Corte: la de ente juzgador o tribunal en sentido estricto (sin la confusión con actividades municipales, como las tuvieron cabildos y alcaldes) y la de jerarca administrativo del servicio (su superintendencia), es más difícil relevar hoy la primera, al no tenerse fácil acceso a los expedientes procesales sobre casos particulares; en cambio, por los registros (Libros de Acordadas, Registros de Jurisprudencia) guardados en la hoy Suprema Corte y los repertorios que se han publicado en diferentes fechas, es más fácil conocer la segunda.

De este modo, vemos ya a la Cámara de Apelaciones bajo el régimen portugués, disponer el 18 de diciembre de 1818, que no se cobre costas en los acuses de rebeldía al que los solicita sino al que la ha hecho necesaria("el moroso") o, también en Acordada, pero del 26 de enero de 1819, mandando rechazar los escritos, con apercibimiento, a los que los presenten faltando al decoro debido, etc. (14)

80. **Consecuencias de la Guerra Grande.** Durante la guerra, en parte civil, en parte internacional, conocida como "Guerra Grande" (por su excepcional prolongación: 1839 a 1851), que se libró entre el Gobierno de Montevideo, apoyado comercial y políticamente por Francia y Gran Bretaña, y militarmente por personas de esos países radicadas aquí (la legión francesa) o venidas en auxilio de otros orígenes, como el italiano Garibaldi y por los expatriados argentinos (como en el caso de Bartolomé Mitre); y el ejército sitiador de Manuel Oribe, apoyado por el gobierno argentino de Juan Manuel de Rosas; se dio una situación muy peculiar: hubo dos organizaciones judiciales, integrando ambos bandos. Tanto en el Cerrito como en Montevideo, funcionaron, simultáneamente, sendos Tribunales de Justicia, además de otras judicaturas menores.

En los Archivos de la actual Suprema Corte de Justicia se atesora los libros de Acuerdos de cada uno de esos Tribunales. El correspondiente al Gobierno del Cerrito -que se había instalado en el lugar conocido como el Miguelete, se hallaba integrado por los doctores *Carlos Anaya* (que lo presidía), *Bernardo P. Berro, Eduardo Acevedo, José Martoy* y *Fancisco Antuña.* Las actas de este Tribunal se encabezaban con el lema rosista "¡Mueran los salvajes unitarios!", como había impuesto su gobierno para todos los documentos oficiales, por un decreto de abril de 1845.

Corresponde agregar que los dos Tribunales se regían por el Reglamento Provisorio de la Administración de Justicia, de 1829, del que nos hemos ocupado ya.

CAPÍTULO II
LOS TRIBUNALES EN ACTIVIDAD.

81. En lo que tiene que ver con su labor concreta, vemos en los respectivos Libros de Acuerdos que el Tribunal de Justicia del Miguelete dictó "Instrucciones para el modo de proceder en los juicios verbales"(31 de enero de 1849) y emitió el "Reglamento para la Academia de Jurisprudencia de 1839"(30 de enero de 1850). En tanto que el Tribunal montevideano de la Defensa establecía normas reglamentando las causas de impedimento de los jueces (11 de noviembre de 1846) y para el cobro de las planillas de costas (13 de septiembre de 1851).

Cada Tribunal, por su lado, designaba a sus respectivos funcionarios y cumplía la actividad administrativa correspondiente.

82. El 20 de marzo de 1848, el Tribunal de Justicia de Montevideo tuvo oportunidad de ejercitar sus facultades de superintendencia respecto de un juzgado inferior. Ello ocurrió con motivo del asesinato del periodista y político inmigrado, doctor Florencio Varela. El homicida, Andrés Cabrera, se refugió en el campo sitiador, por cuyo motivo no pudo ser detenido ni procesado.Concluida la guerra, se sustanció el sumario, que recién concluyó, en manifestación de la demora procesal que ha sido endémica en nuestros pretorios, en 1853 (demora a la que habrían contribuido con su negligencia los abogados defensores). Ello motivó que el Tribunal de la Capital dijera en su Acuerdo: *"Que causando gran escándalo en la sociedad, no menos que mengua y desdoro de la Administración de Justicia, el enorme retraso de la causa criminal seguida de oficio, sobre el asesinato del Dr. Florencio Varela, por razón de las excusaciones, más o menos motivadas, de los letrados que en número de veintisiete se nombró sucesivamente para la necesaria defensa requerida pro forma esencial de los juicios,* "[se resuelve que:] *El juez que conoce de esta causa compela a tomar la defensa de Cabrera a uno de los abogados nombrados de oficio en el presente año* [....] *y se prevenga en el día al Juez respectivo empeñe todo el celo y actividad que reclama la Justicia y la moral pública y los serios deberes de su grave magistratura, para el más pronto posible progreso y conclusión de la sobredicha causa, con encargo de dar cuenta de su estado y adelantamiento* cada diez días, *y que, a los fines que fuesen convenientes, del presente Acuerdo, se inserten copias autorizadas en los periódicos de la Capital; y lo firman de que doy fe: Francisco ARAÚCHO, Estanislao VEGA, Francisco SOLANO ANTUÑA, Cándido JUANICÓ.- Martiniano Mouliá, Secretario de Cámara."* (15)

83. **Una profesión poco atractiva.** A la escasez de letrados en el nuevo Estado a la que hemos hecho reiteradas referencias, hubo que agregar, particularmente durante la Guerra Grande, la falta de recursos con los cuales retribuir de forma satisfactoria la delicada función judicial.

a) Por este motivo, reducido el Tribunal de Justicia durante dicha guerra a dos magistrados, los Dres. Francisco Araúcho y Estanislao

Vega (por haber emigrado al Cerrito algunos de los antiguos camaristas y varios de los más notorios letrados y no hallarse aspirantes entre los pocos abogados remanentes en la Plaza, hubo que recurrir, para obtener una integración mínima...a don Joaquín de Sagra y Periz, el viejo cabildante que conocimos en la Primera Parte de esta obra y que, si bien era escribano y como tal había trabajado antes como Secretario del Cuerpo, no había obtenido su título en universidad alguna, sino por mera experiencia práctica; en obvia infracción constitucional; por aquello de que, como decían los latinos, *necesitas caret legge,* y que significa que "la necesidad carece de ley" y no que "la necesidad tiene cara de hereje", como se dice -mal- en el latín macarrónico.

b) En septiembre de 1843, la Asamblea de Notables de la ciudad sitiada, que había asumido también por necesidad funciones legislativas, falta de recursos con que asistir al Poder Judicial, autorizó a los Tribunales y demás juzgados a cobrar "por concepto de honorarios", el *derecho de firma,* de dos hasta cinco reales, que se había derogado en 1829. Eran épocas ciertamente difíciles para la economía nacional y también de penuria para los jueces. Muy por debajo de los sueldos previstos por la ley de 1829, un decreto del Ministerio de Hacienda del año 1850 establecía para ese año que los Ministros del Tribunal percibirían un sueldo de cien pesos mensuales; y los Jueces Letrados (de lo Civil, Intestados, de Comercio, de Hacienda y del Crimen), la mitad de la suma que regulara el Ministro del ramo, y los "graduados e inteligentes" que suplieran a los letrados en los Tribunales, debían optar entre el derecho íntegro de firma o por los dos tercios del honorario (de ello se da cuenta en el Acuerdo del Tribunal Superior, de fecha 16 de marzo de 1850).

c) Pero ni siquiera era seguro que se les abonara estas modestas retribuciones. Ello dio motivo a un increíble pero piadoso episodio. En 1846, época en que habían mediado otras renuncias de magistrados en procura de actividades más rentables, el Dr.Andrés Lamas, que luego habría de hacer brillante carrera diplomática, pero siendo, entonces Juez de lo Civil e Intestados, presentó también su dimisión, expresando que "hallándose en la necesidad de adquirir honestamente medios de subsistencia y no permitir las leyes al Juez

otra ocupación que la de su ministerio, representaba que la prolongación de la guerra, agotando sus últimos recursos, le imposibilita esperar decorosamente el término de la calamitosa situación del país, para hacer entonces la renuncia de su empleo, y le obligaba a aceptar el nombramiento de Letrado de la sociedad compradora de las rentas de Aduana que le había hecho su directorio; en cuya virtud pedía se sirviese el tribunal admitir la renuncia del Juzgado Civil". Ante este pedido y la notoria dificultad para encontrar quien llenase esta nueva baja en la Administración de Justicia, el Tribunal decidió una insólita solución, a todas luces inconstitucional, de que informa el Acuerdo del día 11 de noviembre de 1846: "debían acordar y acordaron" *"que le sea permitido a dicho Juez* [porque "mui difíciles son las circunstancias en que se halla el tribunal para admitirla por ahora, pero deseando conciliar en lo posible unas y otras (razones)"] *aceptar el nombramiento de Defensor que hizo de él la sociedad compradora de las Rentas de Aduana, sin perjuicio de continuar desempeñando la magistratura que ejerce, ínterin aquellas permiten que se provea a su renuncia".* De donde el doctor Andrés Lamas vino a ser el primero -y creemos que único- juez que en nuestro país pudo ejercer la profesión liberal de abogado conjuntamente con la magistratura.

84. Pero esto no mellaba el énfasis en la defensa de sus fueros que hacían aquellos empobrecidos pero celosos y dignos guadianes de su autonomía en libertad, como lo hicieran sus antepasados de la Colonia ante la Gobernación, según relatamos ya en la Parte Primera.

a) A mediados de 1839, ocurrió un incidente de gran resonancia "que sirvió para dar estabilidad e independencia a la magistratura judicial". Como lo recuerda el historiador Eduardo ACEVEDO, "el Gobierno dirigió al Tribunal una nota en la que decía que el Juez Letrado de lo Civil se había instalado fuera de la planta urbana de la ciudad, que eso constituía un abandono del cargo, y que el Juez debía ser destituido de acuerdo con la Constitución. El Tribunal fijó al Juez un plazo para trasladar su despacho a la ciudad, y vencido el plazo sin que la orden hubiera sido cumplida, dictó el Poder Ejecutivo un decreto suspendiendo al Juez y mandando dar cuenta al

Senado. La Asamblea General aprovechó la oportunidad para sancionar una ley aclaratoria, por la que se establecía que 'la destitución de los jueces y el conocimiento de sus causas correspondía a los Tribunales' (ley del 15 de julio de 1839)".

b) Es interesante, en el mismo sentido, recordar el conflicto que se provocó entre el coronel Latorre y el Tribunal Superior de Justicia en 1876, y que casi provoca "medidas gremiales", casi de "huelga" en el alto órgano judicial.

En el Acuerdo de 17 de marzo del año expresado, se da cuenta de haber recibido desde el Ministerio de Gobierno una nota por la que se da cuenta de que "habiendo sabido extrajudicialmente que el Tribunal de Justicia que usted dignamente preside trata de nombrar los jueces inferiores para llenar las vacantes que han dejado los últimos sucesos; debo prevenir a usted por orden del Sr. Gobernador que, mientras el Gobierno no lo resuelva, debe prescindir el Tribunal de esos y otros nombramientos que se relacionen con la Administración de Justicia; lo que comunico a Ud. a sus efectos.".

El Tribunal, *considerando* que:(i) "la referida nota, tanto por su forma cuanto por la resolución a que se contrae, importa el absoluto desconocimiento de las atribuciones y facultades que la Constitución y las leyes del país atribuyen privativa y exclusivamente a este Alto Cuerpo del Estado"; (ii) que "el Tribunal Superior de Justicia, que debe su existencia al voto de las Legislaturas que en distintas épocas lo han integrado, asumiendo de tal manera una personalidad moral emanada de la Soberanía de la Nación, con las atribuciones, la independencia y los deberes que se deducen de su propio origen constitucional, no puede aceptar la ingerencia[*sic*] del Gobierno en los actos que le son relativos"; (iii) que "la libertad de las deliberaciones del Poder Judicial, son de todo punto inconciliables con actos de la naturaleza a que se refiere la nota del Gobierno Provisorio que encabeza el presente Acuerdo"; (iv) que "desde el momento en que el Superior Tribunal de Justicia se ve coartado en el ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, como lo está actualmente por la resolución del Gobierno Provisorio de que se ha hecho referencia, no puede continuar ejerciendo la autoridad de que ha sido investido por la Soberanía de la Nación, representada por las Asambleas que lo han nombrado"; y (v) que "los deberes supremos que le están cometidos, le impiden someterse a la coacción que le hace sobre él el Gobierno, sin poner en peligro la justicia y los dictados del honor de los Miembros que

forman el Tribunal, les prescribe no reconocer una situación humillante a su propia delicadeza de hombre y de magistrado", acordó: *"Que en virtud de las consideraciones indicadas, el Tribunal Superior de Justicia declina desde esta fecha de continuar en el ejercicio de sus funciones públicas como tal Tribunal, hasta tanto que el Cuerpo Legislativo resuelva lo que considere más justo y más decoroso a los derechos y a la inmunidades de los Poderes Públicos"*, agregando de inmediato: *"Se dispone, igualmente, que el presente Acuerdo se transcriba como contestación a la nota del señor Ministro de Gobierno a que se refiere, y a los señores Jueces de la dependencia del Tribunal; y se publique oportunamente"*. Y firmaban: *Conrado RUCKER, Laudelino VÁZQUEZ, Carlos DE CASTRO y L. FORTEZA.*

Pero la sangre no llegó al río: ante la firme, clara y valiente actitud del Tribunal, el "Gobernador Provisorio" dio marcha atrás en su inconsulta posición (probablemente motivado por el Legislativo) y ello motivó una nota al pie del acta mencionada, que textualmente dice:*"NOTA: Habiendo desaparecido las dificultades que motivaron el Acuerdo de 17 del corriente, se deja sin efecto, en cuya virtud, de mandato de S.E. se establece la presente constancia, en Montevideo, a veinte y dos de Marzo de mil ochocientos setenta y seis - Esc. Juan Fco. Castro (Escribano de Cámara").* (16)

Seguramente, el lector ya ha observado los notables caracteres de este Acuerdo. Por un lado, se da una verdadera lección de constitucionalidad, delicadeza y dignidad a un dictador prepotente. Por el otro, la "medida gremial" es francamente ejemplar: puesto que se desconocen sus facultades, el Cuerpo renuncia al cargo y lo devuelve al órgano que lo ha nombrado, siguiendo el principio administrativo que quien designa también declina los nombramientos, y le viene a decir, entre líneas, que si ese órgano legislativo no defiende los fueros del judicial, deber que le imponía la Constitución, asuma las consecuencias. Pero, lo más admirable es la solución final: satisfecho en su honor el Tribunal, deja sin efecto su enérgico Acuerdo; pero, con inteligente astucia, no lo ordena textar ni desglosar del libro de Acuerdos, sino que le pone una nota que no borra lo ocurrido, sino que en realidad lo conserva para eterna memoria y ejemplo. Y, en realidad, ello no fue inútil, pues debía transcurrir todo un siglo antes de que se reiterara un atropello similar.

85. **Los locales del Tribunal.** Vimos ya cómo la Cámara de Justicia del período de dominación lusitana, tuvo su asiento en el edificio del Fuerte, entonces palacio de gobierno, desde 1818.

Con el régimen constitucional, a partir del 25 de mayo de 1830, lo tuvo, con otras dependencias judiciales, en el Cabildo, ocupando previsiblemente los locales que antes tuvieran los cabildantes y regidores.

Y desde 1883 a 1907 -cuando debió ceder su lugar a la Alta Corte de Justicia- el edificio, todavía existente, en el número 713 de la Plaza Independencia (ver figura número 4 en pág.153)

Ya vuelto a su situación de Tribunal de Apelaciones, ha ocupado varios otros locales. Pero esa es información que excede del tema del presente Capítulo.

NOTAS DE LA SEGUNDA PARTE

(Las características de las obras citadas se indican en las Secciones Bibliografía de las Partes Primera y Segunda).

(1) GELSI BIDART: Obra citada en la Bibliografía de la Primera Parte, págs.32-33

(2) Ver el repertorio de RODRÍGUEZ A., citado en la Primera Parte, págs-56-60-

(3) GELSI BIDART, obra citada, págs.34-36.

(3bis) Como demostración de los muchos vínculos que el dominio lusitano llegó a tener con la población oriental, bastará decir que el propio Lecor celebró matrimonio en Montevideo con una dama local, doña Rosa Herrera, que así vino a convertirse en baronesa, según cuenta Isidoro DE MARÍA. No es extraña esta "conquista-revancha", por parte de una de aquellas damas bravías, una de las que, al negarse en Buenos Aires a inclinarse ante Juan Manuel de Rosas, provocando la curiosidad del dictador para preguntar de quién se trataba, y enterado de que era de esta Banda, le hizo pronunciar una frase que se hizo célebre:"¡Orientala, había de ser!"...

(4) El hábito ha hecho que el apellido del general Rondeau se pronuncie "Rondó", como si fuera francés. Pero, en realidad, este prócer ríoplatense era de origen catalán, y explica ello que parte de su carrera la cursara en el ejército español. Por tanto, debiera pronunciarse "Ron-de-a-u".

(5) CAPUTI, V.: obra citada en la Primera Parte, pág.66

(6) REYES ABADIE-VÁZQUEZ ROMERO: obra citada en la Primera Parte, tomo II, pág.571.

(7) RAVEAU, R.: obra que se cita en la Bibliografía de esta Parte, pág.24.

(8) Sentencia número 241 de 1988, etc.

(9) ARISTÓTELES: obra que se cita en la Bibliografía de esta Parte, *passim.*

(10) Del "Manifiesto" que publicó la Asamblea Constituyente -cuya redacción se atribuye a Zudáñez-, reproducimos algunos párrafos (los más relacionados con el tema de este trabajo):

"Sin una autoridad encargada de formar las leyes; sin un gobierno que cuide cumplirlas; sin jueces que las apliquen en las contiendas particulares: los hombres no reconocerían otro derecho que el del más fuerte, ni éste otra razón de obrar que su utilidad y su capricho; no habría deberes que llenar, ni obligaciones que cumplir; y una confusión perpetua sería el escollo en que vendrían a estrellarse la libertad individual, la seguridad de ciudadano y el tranquilo goce de sus propiedades. Estas verdades, que prueban la necesidad de un gobierno, nos enseña también que, cuando un mandatario, por la fuerza o el sufrimiento vergozoso de los pueblos consigue reunir los diversos poderes, que garantizan sus libertades, puede, por el mismo hecho, mandar lo que quiere y hacer cumplir lo que manda. Entonces, las leyes dejan de ser la convención que los hombres hacen entre sí, para reglar el ejercicio de sus facutades naturales, determinar la legalidad de sus acciones y lo que debe prohibirse a cada uno por el interés de todos; ellas son el precepto de un particular que somete a los demás, los esclaviza, dejándolos dependientes de sus deseos, y convierte a la sociedad en un espectáculo de despotismo o de anarquía.

De aquí nace la necesidad de estos diversos poderes, conservadores del orden público y la dificultad de trazar la línea que, detallando sus atribuciones, demarque también el deber del que manda y las obligaciones del que obedece. [.....] *Últimamente, el código constitucional establece un Tribunal Supremo de Justicia que, debiendo juzgar las infracciones de Constitución y los abusos de autoridad, reprimirá al poderoso por la aplicación de la ley y desagraviará al miserable: conteniendo así las personas que desempeñan las funciones de los poderes constituidos, los conducirá al solo objeto de su institución y los conservará dentro del círculo de sus respectivas atribuciones.*

Vuestros jueces, en el ejercicio de su judicatura, no dependerán ya del que manda, ni las sentencias que pronuncien serán el producto de su influjo; y cuando vuestros legisladores reglamenten el juicio por jurados, que advertiréis sancionado, aparecerá entre vosotros, por la primera vez, esa institución cuya utilidad es reconocida por el mundo civilizado. [.....] .

(Diario "*El Universal*", del día 17 de julio de 1830, en reproducción facsimilar, por CAPUTI, obra citada, págs. 156 a 157).

(11) (Ver las obras del Dr. Arturo ARDAO y del Esc. Saúl CESTAU, citadas en a Bibliografía de esta Parte, *passim*).

(12) NARVAJA, de origen cordobés, no sólo fue un eximio jurista, autor del proyecto tomado como base para nuestro Código Civil, sino profesor de la Universidad y de la Academia de Jurisprudencia, sino uno de los mayores latinistas de Sud América -lo que, entre otos méritos, puede explicar la excelente redacción del código mencionado- examinador de esa lengua en la mayor parte de los concursos y exámenes dedicados a ella, como lo indica su hijo Ricardo, en la "Introducción" al libro *"Fuentes, notas y concordancias del Código Civil de la República Oriental del Uruguay"*(Montevideo, Tipo-Litografía Oriental, 1910, especialmente pág. XV).

(13) Eduardo ACEVEDO, en el prólogo a su *Proyecto de Código Civil* (Paso del Molino, 1853), informa que el derecho español vigente en nuestro país con anterioridad a la codificación, debía emplear no menos de cincuenta mil leyes sueltas, sin sistema y muchas veces contradictorias entre sí.

(14) GARICOÏTS, F.: obra citada en la Bibliografía de esta Parte, págs.99 y siguientes.

(15) El texto completo de este Acuerdo, que hemos tenido oportunidad de consultar directamente en los Libros de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, con anuencia de sus autoridades, en 1957, puede ser complementado con la información que nos da el historiador Eduardo ACEVEDO, según el cual la causa prosiguió sin mayor celeridad y recién el 14 de julio de 1854 se vio en vista pública y en última instancia, confirmándose la sentencia de muerte del homicida y mandando formar causa penal a Manuel Oribe, imputado de complicidad. Sin embargo, la sentencia no llegó a cumplirse pues el condenado falleció antes de su ejecución por razones naturales y no se llegó a formar la causa contra Oribe(*"Anales"*, tomo II, pág.159)

(16) Tomado directamente de los Libros de Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, con la debida autorización. No figura en la recopilación de Hamlet Reyes, previsiblemente por haber sido declarada "sin efecto".

BIBLIOGRAFÍA SINTÉTICA Y OTRAS FUENTES DE LAS PARTES SEGUNDA Y TERCERA.

ACEVEDO, Eduardo: "*Historia del Uruguay*" y "*Anales*", varias editoriales, Montevideo, especialmente 1916 y 1920.

ACTAS de la Asamblea Constituyente y Legislativa (4 tomos).

ACORDADAS, varias, de la Suprema Corte de Justicia y RESOLUCIONES de su Dirección General Admnistrativa.

ANALES ADMINISTRATIVOS: publicación periódica de la Secretaría de la Presidencia de la República, en ediciones especiales del "Diario Oficial", 1970 a 1987.

ARDAO, Arturo: *"La Universidad de Montevideo"*, publicación de la Revista de la Facultad de Derecho de la República.

ARISTÓTELES: *"Constitución de Atenas"*; versión española de Edit. Aguilar; Buenos Aires, 1962.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, ejemplares de 1995 a 1997.

BRADSTREET, F.: *"La Corte Suprema de los Estados Unidos"*, en "Revista de los Jueces"; Santiago de Chile; número 3 de 1970.

CÁMARA DE REPRESENTANTES, DIARIO DE SESIONES DE LA: 3er. período de la XXII Legislatura, 1907.

CASSINELLI MUÑOZ, Hugo: *"Integración de la Suprema Corte de Justicia"*, en "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 65.

CESTAU, Saúl: "*Memorias de la Facultad de Derecho*" publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 1960.

COSTA, Ángel Floro: *"Proyecto de Código de Organización de la Administración de Justicia"*, folleto, circ.1900.

DIARIOS DE SESIONES de la Asamblea General, de las Cámaras de Senadores y de Representantes y de la Comisión Permanente del Poder Legislativo del Uruguay, publicaciones de la Imprenta Nacional, 1907 a 1990.

GARICOÏTS, Fermín: *"Acordadas y Resoluciones de la Alta Corte de Justicia"*; Montevideo, Edit. Barreiro y Ramos S..A.;1927.

INFORMACIÓN VERBAL, proporcionada por magistrados, ex-magistrados; actuarios, ex-actuarios; funcionarios y ex-funcionarios del Poder Judicial, y abogados.

"**JUDICATURA**": Revista de la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay; Montevideo, especialmente núms. 1 a 14; 1976 a 1988.

LIBROS DE ACUERDOS de la Cámara de Apelaciones, del Tribunal Superior de Justicia (Montevideo y Miguelete), de la Alta Corte de Justicia y de la Suprema Corte de Justicia, consultados en el Archivo de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, desde 1818 a 1976.

NICOLIELLO, Nelson: *"Nuevos Apuntes Jurídicos"*; Montevideo, Edit. Amalio M. Fernández, 1970.

NICOLIELLO, Nelson y Luis Alberto VÁZQUEZ PRADERI: *"Tratado de Técnica Forense"*, tomo I, Montevideo, Edit. Amalio M.Fernández; Montevideo, 1973.

ORIBE, Aquiles B.: *"Fundación de la Universidad y de la Academia de Jurisprudencia"*, citado en el trabajo inédito de NICOLIELLO, N., JUNIO, S. y LINDNER, A.:"Historia de una Presidencia"; Montevideo, 1940.

PATRÓN, Juan C. y Lauro RODRÍGUEZ POZZI: *"Manual de Enseñanza Práctica del Derecho"*; Montevideo, Centro Estudiantes de Derecho; Montevideo, 1958; tomo I.

RAVEAU S., Rafael: *"Derecho Constitucional Dogmático"*; Valparaíso (Chile); Imprenta y Litografía Universo; 1935.

REGISTRO NACIONAL DE LEYES Y DECRETOS. Imprenta Nacional; 1907-1990.

REYES, Hamlet: *"Acordadas"*; Montevideo, Imprenta Nacional, 1936.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: *"Decisiones Judiciales Históricas de la S. Corte de Justicia"*; en "Documentos básicos de la Historia de los Estados Unidos".

VÁZQUEZ, Laudelino: *"Anotaciones sobre la Alta Corte de Justicia", Montevideo, 1902.*

VÁZQUEZ PRADERI, Luis A. y colaboradores: *"Repertorio de Acordadas y Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia"*; Montevideo, Suprema Corte de Justicia, 1976.

VÁZQUEZ PRADERI, Luis A. y colaboradores: "*Repertorio de Acordadas y Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia"*; Montevideo, Suprema Corte de Justicia, 1992.

TERCERA PARTE



Reconstrucción imaginaria de una sesión de la primera Alta Corte de Justicia; según dibujo realizado por el ex- funcionario de la Suprema Corte, Sr. Hugo Arló, en base a fotografías de la época.

De izquierda a derecha, Dres. Piera, González, Garzón Cuñarro y Fein.

PARTE TERCERA

DE LA ALTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

A) LA ALTA CORTE DE JUSTICIA

INTRODUCCIÓN.

86. Hasta el momento no ha habido necesidad de especificar a qué clase de Justicia nos referíamos, porque, sin perjuicio de reconocer ciertas funciones jurisdiccionales en los otros poderes del Estado, que no llegan a formalizar una organización judicial, sino un complemento accesorio de facultades, la realidad es que la Justicia en sí misma era solamente una. Pero en el período en que ahora ingresaremos (prácticamente todo el siglo XX) hay que recordar la existencia de otras instituciones jurisdiccionales, que también juzgan en materias especiales,y que antes integraron la jurisdicción común, con las condiciones de imparcialidad e independencia propias de los tribunales (como así se llaman, incluso, a veces,ellas mismas).

De este modo, cabe tener presente que desde la Ley Electoral núm.7.690 de 9 de enero de 1924, la Corte Electoral tiene competencia en su materia; que la Constitución de 1934 estableció el Tribunal de lo Contencioso Adminisitrativo, con la facultad de anular los actos administrativos contrarios a Derecho (la Justicia común sólo puede intervenir en la reparación económica de esos actos) y al Tribunal de Cuentas corresponde la superintendencia en el control de la contabilidad pública; así como la Justicia Militar debe ocuparse de juzgar los actos estrictamente militares(Const. arts.208 y 253,resp.) De este modo una Historia de toda la actividad jurisdiccional excedería de la relativa a la Administración de Justicia o Justicia Ordinaria, a la que, por razones de tiempo y espacio nos hemos limitado.

También hubiera sido muy interesante encarar la evolución del Ministerio Público, tan ligado a la Justicia común; pero han obrado las razones ya expresadas.

Corresponde, pues, tener presente que, a partir de esta Parte, la Historia estudiada es, como acabamos de decir, la de la Justicia en sentido estricto.

SECCIÓN PRIMERA: RAZONES DE SU DEMORA.

CAPÍTULO ÚNICO.

87. Como se recordará, la Constitución de 1830 ya había previsto la existencia de una Alta Corte de Justicia, nombre inspirado en los textos agentinos e, indirectamente, en la designación de la legislación francesa: *"Haute Court"*. Pero, se recordará además que esa misma Constitución había autorizado a suspender el establecimiento efectivo de dicho órgano judicial en tanto no hubiera suficientes letrados y los medios necesarios en la República, lo que también se determinaba respecto de los jueces letrados de primera instancia. Como una institución de esa naturaleza era, no obstante, imprescindible, para operar como jerarca y representante de un poder independiente, las funciones de la Corte se ponían, entre tanto, a cargo del Tribunal (o Tribunales) de Apelaciones.

88. Pero las razones de esta demora eran varias.

a) **La falta de letrados.** Se ha visto ya cómo un medio reducido y pobre, en que también se dilató la posibilidad de seguir cursos universitarios en forma regular, fue la realidad que no pudo obviarse desde la colonia.

De este problema trató ya la comisión redactora de la primera Constitución, como hemos referido en la Segunda Parte. Y ya vigente la Carta, no dejó de preocupar, lo que era visible en forma frecuente recorriendo la prensa de la época. Era tema constante en las discusiones partamentarias, y un argumento muy utilizado por quienes se mostraban renuentes a admitir la necesidad de tan elevado tribunal. Desde que la integración con profesores del Derecho era condición insalvable, incluso por disposición constitucional, el argumento no dejaba de ser muy fuerte.

Pero no fue la única razón.

b) **Dificultades de orden institucional.** Se comprende que la ausencia de la Alta Corte creaba una brecha importante en el principio tan defendido siempre de la independencia, y de la equivalencia y equilibrio de los poderes del Estado. Para que ello fuera efectivo, se requería -y requiere- naturalmente, que cada uno de esos poderes tenga una cabeza o figura que lo representara y asumiera su dirección.

En épocas de grandes pasiones políticas y de tendencias al autoritarismo, se entendía a veces que otro de los poderes, el Ejecutivo, disimulaba no muy claramente, con el pretexto de las dificultades económicas -que sí las hubo, también,como siempre-, la conservación de su predominio, dificultando la instalación de la Corte. Ya vimos algo de esto cuando, en la Segunda Parte, relatamos conflictos de esta clase.

Al efecto, es interesante transcribir la opinión que el diario de Batlle, *"El Día"*, expresaba en su editorial del domingo 13 de octubre de 1907, cuando se replanteaba, ya a punto de solucionarse, el problema de la instalación del máximo Tribunal.

" *LA ALTA CORTE: En la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, quedará probablemente aprobado el proyecto de ley que crea la Alta Corte de Justicia. Hace 77 años que esa suprema autoridad judicial se halla establecida en nuestra Carta fundamental, y desde entonces hasta hoy no se ha dictado la ley que debe organizar y autorizar su funcionamiento en la República. Será un timbre de honor para el gobierno del doctor Williman el haber llevado a la práctica el proyecto soñado por tantas generaciones, y* ***también podrá decirse que ha sido necesaria toda la energía de un Presidente bien intencionado para llevar adelante una iniciativa que, a fuerza de haberse discutido, sólo era posible mover a costa de grandes esfuerzos.*** *La creación de la Alta Corte no pudo ser bien mirada por los gobiernos despóticos que deseaban mantener a su disposición a jueces y a tribunales y a los cuales se amenazaba con la creación de la Alta Corte. Ahora las cosas han cambiado. La*

autoridad judicial no es incómoda para los que honradamente proceden. Siendo así, será un auxiliar más de la gestión moralizadora de la actual administración. No basta, sin embargo, la creación de la Alta Corte. Conviene preocuparse de su constitución. A este respecto, el país puede confiar en el buen criterio de los encargados de la elección. Es indispensable, pues, preocuparse seriamente de los nombramientos a efectuarse. En este caso, como en los demás análogos, el mayor peligro se halla en los compromisos particulares. Creemos que ahora no los hay ni los habrá. Así se completará, como se debe, la obra magna de creación de la Alta Corte."

¡Cuántos de estos conceptos pueden ser de provechosa consideración, todavía!

SECCIÓN SEGUNDA: HACIA LA CONSAGRACIÓN LEGISLATIVA.

CAPÍTULO PRIMERO. LOS PRIMEROS PROYECTOS.

89. El camino hacia la plena consagración no fue sencillo: abundaron los proyectos de diferentes naturaleza y alcance, hasta 1907.

Fueron varios, siete en total, y comenzaron a presentarse ya a partir de 1880.

Haremos una breve relación de cada uno de ellos, destacando sus aspectos más importantes, particularmente los que prevalecieron.

Cabe tener presente que la nueva legislación no tenía por qué establecer la creación misma de la Alta Corte ni la condición de sus Ministros, pues todo ello estaba ya previsto en la Constitución; sino completar su ordenamiento, sus competencias específicas y sus normas de procedimento..

a) **El proyecto más antiguo.** José Cándido BUSTAMANTE, representante por el departamento de Salto, presentó en la IIIa. sesión ordinaria de su Cámara, con fecha 24 de mayo de 1880, el primero de los proyectos.

En apenas diez artículos, se prevé la creación de la Alta Corte,

integrada por cinco miembros designados por la Asamblea General; cesando los Tribunales de 2º y de 3º Turnos (y, por tanto, el Tribunal "Pleno") en sus anteriores funciones. No se preveía, como en posteriores proyectos, la designación de un Fiscal de Corte, sino que continuarían interviniendo en su *parquet* los fiscales que ya integraban el Ministerio Público y Fiscal. Designarían un Secretario,eligiéndolo entre los que habían tenido los Tribunales.

En la exposición formulada por el proponente en la Cámara de Representantes, éste destacó la urgencia que había en establecer un órgano judicial con facultades superiores de la mayor importancia,para el cumplimento de servicios esenciales para el país.

Este proyecto (por el momento, anteproyecto) pasó a conocimiento de la Comisión de Legislación de la Cámara, la que se expidió en la sesión del 30 de julio de 1880 y que, con su informe, presentó un proyecto sustitutivo. (17)

La Cámara en pleno trató en discusión particular el proyecto de la Comisión, recién un mes más tarde. Como detalle interesante, puede agregarse que, en la sesión del 10 de septiembre, llegó a cuestionarse la facultad del Parlamento para establecer una comisión de abogados que estudiase un anteproyecto de ley de procedimientos para la Corte, como se había propuesto, entendiendo que se omitía el derecho de iniciativa del Ejecutivo.

Ese proyecto de la Comisión fue finalmente aprobado en la sesión del 4 de octubre, y pasó a consideración del Senado.

En dicho Cuerpo se le discutió durante varios meses y se lo sancionó con fecha 2 de mayo de 1881, en que, a su vez, pasó al Ejecutivo, que lo promulgó el día siguiente.

Quedaba, pues, vigente la **ley de 3 de mayo de 1881,** cuyo texto es el siguiente:

Artículo 1º. *- La Alta Corte de Justicia será nombrada por la Asamblea General, luego de sancionar las leyes que deba aplicar en los casos de su jurisdicción privativa y aquellos que deban regular sus procedimientos y los de los Tribunales de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia.*

Art.2º.*-El Poder Ejecutivo nombrará una Comisión de cinco abogados, que proyectará las leyes de que habla el artículo ante-*

rior, elevando al Poder Legislativo el proyecto o proyectos que preparen.

.rt.3º.- La referida Comisión se atendrá a lo preceptuado en el art.137 de la Constitución.

***.rt. 4º.-** Comuníquese, etc.*

Poco tiempo después, el Ejecutivo cumplió lo dispuesto en la ley referida, y designó la Comisión de Juristas referida en ella, nombrando para integrarla a los Dres. *Manuel Herrera y Obes* (Presidente), *Carlos de Castro, Cristóbal Salvañach, Ángel Floro Costa* y *Adolfo Pedralbes.*

La Comisión quedó instalada el 28 de mayo de 1881. En sus primeras sesiones, delegó en los Dres. De Castro y Costa la redacción del proyecto de código procesal que se le cometiera, el que fue preparado por el segundo de los letrados mencionados. Este proyecto,con un informe adjunto, fue elevado al Ejecutivo el 15 de septiembre de 1881, con ejemplar celeridad. Sin embargo, el ejecutivo no fue tan expeditivo para pasarlo al Parlamento. Ángel Floro Costa (de cuyas memorias tomamos lo ya expuesto, como se trasluce del lucido y principal papel que se cuida de destacar) comenta así lo ocurrido:"Por razones fáciles de comprender en una época en que el país se hallaba bajo la dominación de un gobierno personalista, el Ejecutivo no cumplió con el mandato del legislador, el cual le prescribía que una vez terminados los mandatos de la Comisión lo elevase al Poder Legislativo, y aun puede asegurarse que esquivó, en lo posible, darle una amplia publicidad para buscar, como debiera, el concurso y la sanción de la opinión pública".(18) Es bueno recordar que desde 1882 gobernaba dictatorialmente el Gral. Máximo Santos, quien ya lo había hecho indirectamente por medio del sumiso presidente Dr.Francisco A. Vidal, desde 1881; dictadura que, como la de Latorre, mereciera la tenaz oposición del Dr. A.F. Costa.

b) **Un segundo proyecto.** El anteproyecto redactado por la Comisión Especial de Juristas del que hicimos alusión en el literal anterior, fue, por fin, remitido por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes, el 10 de mayo de 1882. La Comisión de Legislación se

abocó a su estudio, que lo encontró muy extenso y poco práctico.

Al cabo de un mes, el 26 de junio, en la 48ª. sesión ordinaria de la Cámara, presidida por el diputado Rücker, la Comisión de Legislación presentó su informe acompañándolo de un proyecto sustitutivo, en el que recogía los aspectos fundamentales del original y todo lo que no había motivado controversias ni significara mayores gastos del erario nacional.

Este proyecto volvió a la Comisión, por decisión de la Cámara en sesión del 14 de agosto de 1882, en la que habría quedado encarpetado.

c) **El tercer proyecto.** Durante la presidendencia del teniente general Máximo Tajes, su Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, doctor Duvimioso Terra, sin recordar la existencia de la ley del 3 de mayo de 1881 ni el proyecto de la Comisión Especial de Juristas, envió a la Cámara de Representantes, con fecha 28 de mayo de 1887, un Mensaje y Proyecto de Ley, "constituyendo la Alta Corte de Justicia creada por el art. 91 de la Constitución". Este proyecto pasó a estudio de la Comisión de Legislación de la Cámara, donde no tuvo mejor suerte que los anteriores. "Tal vez -explicaba Ángel Floro Costa- una de las razones que han tenido las honorables Cámaras para no tomar en consideración ese Proyecto, es la vigencia de la ley de 3 de mayo de 1881, a que he hecho referencia, y el conocimiento de que existía un proyecto más completo, trabajado por mandato oficial por una Comisión de Jurisconsultos que el Ministerio del Dr. Terra, involuntariamente quizá, dejó preterido". (19) Pero esta explicación, inspirada probablemente más por el despecho que por la realidad, es menos aceptable que la de la siempre presente inercia parlamentaria.

d) **El cuarto proyecto.** Hubo de transcurrir cierto tiempo, antes de que se reiniciaran las iniciativas en esta materia.

Ya bajo la presidencia del Dr. Julio Herrera y Obes [de *son vraie nom* Julián Basilio Herrera Martínez (20)], el 2 de marzo de 1892, el Ejecutivo remite a la Asamblea General un nuevo mensaje y proyecto de ley relativo a la Alta Corte. En el primero, se expresa que "el Poder Ejecutivo, cumpliendo la promesa hecha en su Mensaje del 15 de febrero pasado, eleva a V.H. un Proyecto de Organiza-

ción de la Alta Corte de Justicia, que constituye el resumen de largos trabajos emprendidos a raíz de la Ley de 2 de mayo de 1881 y concluidos en junio de 1891. Como antecedentes necesarios, ilustrativos, se acompañan al Proyecto un ejemplar impreso de lo actuado por la primera Comisión de Juristas que entendió en el asunto, un proyecto del Dr. Ángel Floro Costa y el definitivo de la Comisión Revisora que está calcado sobre aquél". La Comisión Revisora a que se alude en el Mensaje era la establecida por el decreto del Ejecutivo del 26 de junio de 1890, que, luego de algunas renuncias sobre la composición inicial, quedó integrada por los doctores *Joaquín Requena* (Presidente), *José María Muñoz, Carlos de Castro* (entonces Ministro del Tribunal de Justicia), *Rosendo Otero* (también camarista) y *Antonio E. Vigil.* Posteriormente, se les sumó el Dr. *Ruperto Pérez Martínez* y se nombró Secretario al Dr. *Jacinto D. Durán.*

La nueva iniciativa, originada, como queda dicho, en el proyecto del Dr. Ángel Floro Costa, pasó a la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes el 5 de marzo de 1892. En apoyo de ella, el 4 de octubre de ese año, el entonces Presidente Juan Idiarte Borda hacía llegar a la Cámara una exposición suscrita por la mayoría de los abogados inscriptos en la Matrícula, por la que se solicitaba la reforma de la Administración de Justicia.

Entresacamos algunos párrafos de esa exposición:

"...Que es de vital importancia organizar debidamente la Administración de Justicia, no sólo para ajustarse de una vez al precepto constitucional que delega la soberanía de la Nación en tres altos poderes y en la forma precisa que los establece, sino también para cumplir las exigencias más exitosas de nuestra economía social.

Hasta el presente, permanece incompleta la autoridad pública nacional, con arreglo a nuestra Carta Política, hallándose el Poder Judicial fuera de las condiciones constitucionales, sin Alta Corte de Justicia; siendo esta rama de la administración general la que ha quedado más rezagada en la marcha progresiva de nuestras instituciones públicas.

Con muy pequeñas variantes, la organización judicial de la actualidad es la misma de medio siglo atrás, si bien las condi-

ciones del país y sus grandes intereses han cambiado casi por completo, con el aumento de población y las nuevas necesidades de la sociabilidad moderna." [.....] *"Los proyectos provenientes de la iniciativa oficial y privada no han escaseado entre nosotros y esto acusa uniformidad de miras y un profundo interés en mejorar el servicio de la Justicia; y si esos proyectos no se han convertido en realidad, es debido a que la acción oficial mejor ha consagrado su esfuerzo a obras políticas de orden transitorio, que a la permanentes y fundamentales de carácter nacional".*

Recién el 20 de diciembre de 1894, la Comisión de Legislación informó sobre este cuarto proyecto, relacionándolo con los anteriores de 1882 y 1888, que también tenía a estudio, así como con la citada Exposición de los abogados.

Finalmente, la Cámara se limitó a disponer que se confeccionara un "repartido" con este informe.

e) **El quinto proyecto.** En la sesión realizada por la Cámara de Representantes el 28 de mayo de 1895, el diputado por Cerro Largo Alberto Palomeque presentó un nuevo proyecto sobre la materia que venimos tratando, con el propósito especial de descentralizar la Administración de Justicia. Como era de práctica, la iniciativa pasó a consideración de la Comisión de Legislación el mismo día de su presentación. La Comisión ya tenía a estudio nada menos que cuatro proyectos sobre establecimiento de la Alta Corte de Justicia. El último de esos proyectos, el quinto, consta de diecinueve artículos , de los cuales el 13° establece: "En el Departamento Judicial de la Capital sólo habrá un Tribunal de Apelaciones en lo Civil y otro en lo Criminal".

A tal altura, el número de tentativas para establecer la Alta Corte, la reiteración en proponer el tema, la inquietud del foro: todo indicaba que se aproximaba la hora de concretar esta diferida aspiración de la República.

f) **El sexto proyecto.** Normalizada la República, luego del golpe de estado de Juan Lindolfo Cuestas, el 2 de octubre de 1899 la presidencia de la Asamblea General hizo llegar al Senado un nuevo Mensaje del Poder Ejecutivo, presentado por éste el 2 de septiem-

bre; convocando al mismo tiempo a sesión extraordinaria, a fin de tratar, entre otros, un proyecto de ley de creación de la Alta Corte.

La Presidencia del Senado giró el proyecto, ese mismo día, a la Comisión de Legislación y el 9 de octubre decidió hacerlo conocer por la prensa. El Plenario del Cuerpo, luego de tratar el proyecto en las sesiones de los días 28 de mayo y 2 de junio de 1902, tras de una breve discusión, lo aprobó.

El 27 de febrero de 1902, la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes -que, como se recordará, había reunido las iniciativas anteriores sobre el mismo asunto-, en conocimiento de este nuevo proyecto solicitó al Senado su remisión, a fin de poder "ocuparse de él conjuntamente con el que está a su consideración desde el 2 de marzo de 1892, fecha con la que fue remitido por el Poder Ejecutivo"(se refiere al proyecto de Ángel F. Costa).

Ante esta solicitud, la Comisión de Legislación del Senado sugirió que se contestase con la siguiente minuta, la que la Corporación hizo suya el 9 de abril de 1902: "...que habiendo sido sustituido el Proyecto del Poder Ejecutivo sobre la Alta Corte de Justicia, a que se hace referencia, por otro que que el mismo Poder ha presentado con fecha 29 de septiembre de 1899 y que ha sido estudiado e informado por la Comisión de Legislación del H. Senado, éste, en uso de la facultad que le acuerda el art.59 de la Carta Fundamental, lamenta no poder acceder a la indicación formulada por la Cámara en su nota de fecha 27 de febrero último."(Sala de Comisiones del Senado. Montevideo, abril 8 de 1902: *Vázquez Acevedo, Massera, Ramela).*

El proyecto aprobado por el Senado fue remitido a la Cámara de Representantes el 3 de junio de 1902, la que dispuso su pasaje a la Comisión de Legislación respectiva, que así vio aumentado su abundante material sobre el mismo asunto. Esa Comisión produjo su informe el 17 de junio de 1902, volviendo el proyecto nuevamente a Sala el 18 de diciembre del mismo año. Puesto a discusión, volvió a Comisión ese mismo día, evidenciándose en la Sala -por manifestación del Ministro de Gobierno, Dr. Juan Campisteguy- que el Poder Ejecutivo tenía a estudio un nuevo proyecto sobre la Corte.

g) **El séptimo proyecto.** El 10 de mayo de 1905 circula en la Cámara

de Representantes el repartido número 49, el que incluye un nuevo proyecto, suscrito por *Ángel Floro Costa, Aureliano Rodríguez Larreta, Vicente Ponce de León, Adolfo H. Pérez Olave, Juan Paullier* (discorde en general), *José Pedro Massera*(discorde) y *Álvaro Guillot* (discorde en parte). Lleva por título "*Proyecto de Ley sobre Organización Constitucional del Poder Judicial*" y sigue las líneas generales del Proyecto de Código que redactara el Dr. Ángel F. Costa, oportunamente aprobado por la Comisión Revisora de los Dres. Requena, Muñoz, de Castro, Otero y Vigil, a que ya nos referimos.

Por este proyecto, se establece la Corte (art.1°); ésta se integra con cinco Ministros letrados y un Fiscal de Corte también letrado - que será, al mismo tiempo, Procurador General de la Nación (art.2); se adjudica al Cuerpo un Secretario Letrado, un Subsecretario Letrado, un Ujier "y los demás empleados necesarios"; todos designados por la propia Corte (art.3). El alto tribunal se daría su reglamento interno (art.12), resolvería por mayoría de votos, motivando las sentencias definitvas (art.14) e intervendría en última instancia (art.16). Velaría por la defensa del respeto y de las inmunidades del Poder Judicial; sería su representante; conocería en materia de Derecho de gentes y en las causas de naturaleza diplomática; en las de almirantazgo; de las controversias relativas a los contratos de Derecho público; de las contiendas de competencia entre los tribunales. Le correspondería la superintendencia del servicio; llevaría los registros públicos; designaría a los demás magistrados (los Ministros de los Tribunales con la venia del Senado o de la Comisión Permanente, en su caso) y a los funcionarios de la Administración de Justicia, pudiendo también removerlos; llevaría la Matrícula de los Abogados y de los Escribanos; practicaría la visita de las cárceles y dispondría el *exequatur* de las sentencias extranjeras (art.20). Entendería, además, de los recursos contra las resoluciones del Poder Ejecutivo (art. 21); del recurso de casación en materia de delitos de imprenta y del recurso extraordinario de nulidad notoria (art.22).

De la interesante Exposición de Motivos que acompañó el proyecto, sintetizamos algunos aspectos: i) que ya estaba superado el

impedimento previsto por el art. 117 de la Constitución de la época, pues se contaba ahora con cerca de doscientos abogados matriculados, y el país tenía más de un millón de habitantes y una renta de dieciséis millones anuales de pesos; ii) que cada vez se hacía más necesaria la instalación de la Alta Corte, puesto que ya surgían asuntos de su competencia exclusiva (durante el gobierno de Santos varias embarcaciones vinieron a vender en nuesto país pieles de lobos marinos cazados en islas argentinas, y el gobierno de ese país hizo reclamaciones ante el nuestro; en el mismo sentido, durante la revolución de 1897, un buque oriental desembarcó tropas en Puerto Pacheco, de la Argentina, lo que motivó otra vez las protestas de ese estado). Una de las frases de dicha Exposición de Motivos resume bien la situación: "*...los pueblos, Honorable Cámara, pueden soportar largo tiempo malas administraciones, malas legislaturas, largas crisis económicas y guerras sangrientas; pero lo que no pueden soportar sin comprometer su existencia o retardar su progreso y su crédito, es una mala o deficiente Administración de Justicia*".

La delicada situación política del momento, con la animosidad entre los partidos y las elecciones legislativas en trámite, impidieron que se concretara esta iniciativa, que había seguido la inspiración del Dr. Ángel Floro Costa.

h) **El proyecto final, que habría de culminar en ley.** -Cuando la Cámara de Representantes inauguraba su XXII legislatura, en febrero de 1907, ya había tres textos con proyectos para constituir la Alta Corte de Justicia, a consideración del Plenario.

Se recordará que el Senado había aprobado el suyo en 1902, pero que no era considerado satisfactorio. El Poder Ejecutivo, por Mensaje del 6 de octubre de 1906, había enviado otro, más completo y con importantes innovaciones. Por ejemplo: el Fiscal de Corte, que en anteriores proyectos sería designado por la Alta Corte, en el que comentamos lo sería por el Ejecutivo.

Dicho proyecto era el segundo a considerar,además del aprobado por el Senado, de los tres. Había sido elaborado por los Dres. Pablo de María y Eugenio Lagarmilla, durante la primera presidencia de Batlle, siendo Ministro de Gobierno el Dr. Claudio Williman.

Había, además, un tercero, redactado por la Comisión de Legislación de la Cámara, integrada por los representantes Adolfo Pérez Olave, Aureliano Rodríguez Larreta, Álvaro Guillot, Ramón Saldaña, Vicente Ponce de León y José Pedro Massera, que lo presentaron el 30 de enero; seguía casi a la letra el proyecto del Poder Ejecutivo, "con ciertas modificaciones que no alteran fundamentalmente la economía del mismo", según la Exposición que lo acompañaba.

La discusión legislativa fue larga y farragosa. Motivó un amplio debate sobre cuál habría de ser el proyecto a tomar de base para su estudio por el Plenario: esta situación de coincidencia de tres proyectos atendibles se presentaba por primera vez y no había previsiones concretas que la contemplaran en el Reglamento Interno de la Cámara. Otro problema -que hubo de ventilarse durante varias sesiones- fue el de si los Ministros de la Corte debían ser cinco o más, problema que todavía inquieta en la práctica.

Finalmente, y con muy pocas variantes, el proyecto de la Comisión de Legislación -que, como vimos seguía en líneas generales al del Ejecutivo de 1906- resultó sancionado el 11 de junio de 1907; y pasó al Senado, que lo aprobó, sin modificaciones, el 14 de octubre del mismo año. (21) El 28 de ese mes fue promulgado por el doctor Claudio Williman, Presidente de la República, con la firma de su Ministro del Interior, Dr. Álvaro Guillot, dos de las personas que con más entusiasmo apoyaran la iniciativa.

Se ponía fin a una dilatada odisea para una aspiración tan popular como dificultada.

El texto de la ley será objeto de examen en páginas próximas.

CAPÍTULO II
PECULIARIDADES Y COINCIDENCIAS DE ALGUNOS PROYECTOS.

90. Como balance general del estudio precedente, puede afirmarse que, en su casi totalidad, los proyectos prevén una Corte integrada por cinco miembros. Empero, el proyecto del Ejecutivo de 1888 se caracterizaba porque preveía siete integrantes, de los cuales cinco serían letrados, uno comerciante y el restante militar con grado de general (estos últimos eran, en realidad, conjueces, lo que, en el fondo, mantiene también en cinco sus Ministros naturales). Además, todos los proyectos repiten -tal vez innecesariamente- las previsiones que ya estaban contenidas en la Constitución de 1830, sobre las facultades de la Corte o, con mejor criterio, se remitían a ellas. La mayoría de los proyectos anteriores al del Ejecutivo de 1906, proponían que el Fiscal de Corte sería designado por la propia Alta Corte.

En el proyecto presentado por el ejecutivo en 1899 se establece con precisión la vestimenta que debían usar los Ministros y el Fiscal de Corte: los primeros, en sus sesiones y en todo acto público debían vestir "traje negro de rigorosa etiqueta, más una banda lisa de seda, cruzada de izquierda a derecha bajo el frac y sobre el chaleco, indicando por el color de ella su respectiva antigüedad". En cuanto al Fiscal, habría de usar, en las mismas oportunidades, "traje negro de frac y rigorosa etiqueta, llevando una banda pendiente de los hombros y cuello, sobre el chaleco y unida en sus extremos". Más sobriamente, el Reglamento Interno de la Alta Corte, del 24 de noviembre de 1908 establecería, más adelante, que "los Ministros de la Corte concurrirán a las audiencias [....] en traje negro de levita" (art.8). (22)

A partir del proyecto del Poder Ejecutivo de 1906, el cargo de Presidente de la Alta Corte duraría, como en el que será luego texto legal, un año, sin perjuicio de la posibilidad de ser reelecto. En los proyectos del Senado de 1902; del Ejecutivo de 1899; del Dr. Ángel F. Costa de 1890 y de la Comisión Revisora de 1892, el período presidencial se extendía por dos años. Por su parte, el Dr. Laudelino Vázquez se inclinaba porque el cargo de Presidente fuera permanente, argumentando que da mayor prestigio a la investidura y que Marshall fue durante treinta y cinco años presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. (23)

En el Poder Judicial, teniendo presente que la Constitución establece que

los sueldos de los Ministros se fijan directamente por la Asamblea General, independientemente del que corresponde a los demás magistrados, se ha planteado muchas veces la conveniencia de establecer que los segundos perciban una proporción de lo que se les fija a los primeros. En 1985, cuando se proyectaba una diferencia de retribuciones muy importantes entre unos y otros, la Suprema Corte de la época (la primera de formación democrática luego del período de facto anteriormente vigente) y por iniciativa del Sr. Ministro Dr. Nelson García Otero, obtuvo que entre los diferentes grados de la Magistratura, a partir del sueldo correspondiente a los Ministros de la Corte, sólo hubiera un diez por ciento de diferencia, lo que se concretó en el art. 85 de la Ley Orgánica de la Judicatura, núm. 15.750, del 24 de junio de 1985. Pues bien, como antecedente de esta justiciera solución, puede mencionarse que en el art.9 del proyecto presentado por el Dr. Bustamente en mayo de 1880, se expresa que:"Los miembros de la Alta Corte de Justicia gozarán, cada uno,del sueldo que disfruten los Ministros Secretarios de Estado, y *los del Tribunal de Apelaciones, cada uno de ellos, cien pesos menos del mismo sueldo".*

El texto de la ley núm.3.346 de 28 de octubre de 1907 y su comentario.

CAPÍTULO ÚNICO.

91. Por fin, ya tenemos establecida la Alta Corte de Justicia, el tribunal superior, el jerarca y representante del Poder Judicial, uno de los tres Poderes que dirigen la Nación; aunque pocas veces se haya comprendido esto, no ya tan sólo por los otros organismos públicos, sino incluso por el que es su igual en importancia, el Poder Legislativo, y hasta por el propio constituyente, que lo ha desmerecido en cuanto a las facultades presupuestales. Algo tan inherente a la autonomía e independencia de su función que,cuando con mayor criterio republicano, las Provincias Unidas del Río de la Plata formulaban sus primeras leyes, se edictó que los jueces debían estar exentos de obligación impositiva, pues, de lo contrario, los restantes poderes podrían ejercitar esa imposición para influir sobre la independencia de los fallos; lo que entre nosotros, por fortuna, jamás ha ocurrido.(24)

Acompañamos el articulado con un somero comentario, en el que indicaremos, entre otras cosas, sus antecedentes y su situación de vigencia al momento de escribirse este trabajo.

TÍTULO I

Artículo 1°.- *Créase la Alta Corte de Justicia que establece el artículo 91 de la Constitución de la República.*

Esta disposición inicial, con escasas variantes, encabeza la mayor parte de los proyectos anteriores. Reproduce a la letra el texto propuesto por primera vez en el sancionado por la Cámara de Senadores el 2 de junio de 1902. Su redacción debió ser exactamente la contraria: porque se trataba de establecer -, darle existencia real- a una Corte ya creada por la Constitución de 1830. Tal vez se ha querido darle estatuto de persona jurídica de Derecho público (como se hace cuando se da nacimiento a un organismo público común, formando su carta orgánica), sin advertir que, tratándose del Estado mismo, ese *diktat* no era necesario, como ya lo había reconocido el art.21 del Código Civil, en 1867. Más exacta, sin embargo, parece la redacción del art. 1° del proyecto Poder Ejecutivo,comunicado a la Asamblea General por Mensaje del 28 de mayo de 1888: "*Constitúyese la Alta Corte de Justicia creada por el artículo 91 de la Constitución del Estado*".

En la actualidad, la Corte está prevista por los arts. 234 y siguientes de la Constitución en vigencia,habiendo mudado su nombre de"Alta Corte" por el de"Suprema Corte" desde la promulgación de la Constitución de 1934. El nombre de "Corte", en lugar del más correcto de "Tribunal", se debe a la influencia del Derecho anglosajón sobre los redactores de la Carta de 1830. El adjetivo "Alta" (o "Suprema") no es, como parecería un título honorífico (como: "Honorable Cámara", "Excelentísimo Señor Embajador",etc.)sino que procura significar la que tiene mayor jerarquía entre las diferentes "cortes"(o sea tribunales) del Poder Judicial, en su conjunto: la más "alta".

Art. 2°. - *La Alta Corte de Justicia tendrá su residencia en Montevideo y se compondrá de cinco ministros elegidos en la forma que prescribe el artículo 95 de la Constitución.*

Este artículo tiene su fuente en el también artículo segundo del proyecto del Poder Ejecutivo, comunicado por Mensaje de 6 de octubre de 1906. Era la primera vez que se indicaba la sede o asiento del máximo tribunal. Teniendo la Corte jurisdicción en todo el territorio nacional, pudo establecerse su sede en cualquier otro lugar del país, que siempre sería "el lugar de cumplimento de su fun ción". Pero, evidentemente, siendo Montevideo la capital del Estado y hallándose aquí todas las demás autoridades, parece lógica la solución adoptada.

El número de los Ministros-cinco-, que dio motivo a una extensa y acalorada discusión en la Cámara de Representantes, se encuentra en la gran mayoría de los proyectos, a partir del primero, el del Dr. Bustamante de 1880 (véase la Sección anterior). Solamente la propuesta del Poder Ejecutivo, de 1888, preveía la composición de la Corte con siete miembros, cinco de ellos letrados, uno comerciante y otro militar como ya indicamos (art.2º).

En la Constitución actual, esta previsión corresponde a lo dispuesto en su art.234.

Art. 3º.- *Será presidida por uno de sus miembros, designado por ella misma a pluralidad de votos el día de la apertura de los tribunales, después del feriado. El Presidente durará un año en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelecto. Si dentro del año la Presidencia quedase vacante por cualquier causa, se llenará en la misma forma por el tiempo que faltase al Presidente para completar el período de duración normal. Fuera del caso de vacancia, la falta del Presidente será suplida por el Ministro más antiguo, y, si todos tuviesen la misma antigüedad, por el de más años.*

Los Ministros precederán entre sí en este mismo orden.

Este texto corresponde exactamente al del proyecto de 1906 del Ejecutivo, que,a su vez, fue reproducido por el de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, del 30 de enero de 1907. Se siguió la propuesta más común en los anteriores proyectos, de hacer rotativa la Presidencia, contrariamente a quienes, como el Dr. Laudelino Vázquez, entendían preferible el precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde el cargo es permanente. En el proyecto de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes de 12 de junio de 1882, la solución era otra, en lo relativo al Presidente lo designaba la Asamblea General.

La única variante a tener en consideración actualmente es la de que, ha-

biendo dos ferias judiciales al año, el Cuerpo designa su Presidente al terminar la llamada feria mayor, o sea el primer día hábil de febrero.

Art. 4º.- *La Alta Corte de Justicia se compondrá de dos miembros letrados que reúnan todos los requisitos fijados por el artículo 93 de la Carta Fundamental y de otros tres miembros letrados de notoria competencia jurídica que reúnan las condiciones precisas para ser Senador.*

Otra previsión que mereció grandes discusiones, fue la relativa a los requisitos necesarios para ser Ministro de la Alta Corte. La fórmula adoptada difiere de la propuesta por el Poder Ejecutivo en 1906 y la proyectada por la Comisión de Legislación, y no coincide con las de ninguno de los proyectos anteriores, como no sea parcialmente. Se sigue, en líneas generales, la disposición del art. 93 de la Constitución de 1830, que confiaba a la ley el número de integrantes de la Corte;preveía que podría estar compuesta por miembros letrados(con diez años de ejercicio de la abogacía o cuatro de la magistra tura) y miembros no letrados, debiendo todos ellos tener cuarenta años cumplidos de edad y las demás condiciones exigidas para ser Senador de la República.

Las Constituciones posteriores modificaron la integración de la Corte y los requisitos para ser Ministro. Actualmente, rigen los arts. 234 y 235,según los cuales la Suprema Corte de Justicia se compone de cinco miembros, todos ellos letrados, con diez años de ejercicio de la abogacía u ocho de la magistratura,debiendo además tener ciudanía natural o legal (en el último caso, con diez años de ejercicio y veinticinco de residencia, y cuarenta años cumplidos de edad).

Art. 5º. *- Rigen, respecto de los Ministros de la Alta Corte, las disposiciones contenidas en el título I, capítulo II, secciones 1ª y 2ª del Código de Procedimiento Civil, en cuanto fueren pertinentes.*

Esta disposición colocaba a los Ministros, en lo pertinente,en las normas que, sobre facultades, deberes y cualidades generales, estaban previstas en el antiguo Código de Procedimiento Civil para los demás jueces, lo que era entonces muy natural. Actualmente, esas disposiciones se encuentran previstas en la ley Orgánica de la Administración de Justicia, ley 15.750, de 24 de junio de 1985, que comentaremos oportunamente.

El artículo modifica ligeramente (citando el título, el capítulo y las secciones pertinentes, en lugar de los artículos del código, como sus precedentes y es todavía común) los proyectos del Ejecutivo y de la Comisión de Legislación de la Cámara, que coincidían.

Art. 6°.- *La Alta Corte de Justicia, así como cada uno de sus Ministros, tendrán tratamiento de Excelencia en el ejercicio de sus funciones.*

Se otorgaba al órgano jerárquico del Poder Judicial el mismo tratamiento de que ya gozaban los representantes de los otros dos Poderes. En el segundo proyecto, el de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, de 1882, encontramos una disposición similar (art.2°), que, con leves variantes, se reiterará en los posteriores.

Esta norma, como todas las demás que conferían títulos honoríficos a las autoridades públicas, fue derogada legalmente en 1933.

Art.7°.- *La Alta Corte tendrá un Secretario y un Prosecretario letrados, que desempeñarán las funciones de Actuarios, y los demás empleados que la Ley determine. Los respectivos nombramientos serán hechos por ella, y tanto el Secretario y el Prosecretario como los demás empleados, serán amovibles.*

Esta previsión sigue textualmente (con el solo agregado de la frase: *"desempeñarán las funciones de Actuarios")* lo proyectado por el Poder Ejecutivo en 1906. Como fuente mediata, puede citarse el art.4° del muy completo proyecto del Dr. Ángel F. Costa sobre Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la actualidad, están en vigencia los arts. 54 de la Ley Orgánica 15.750 de 24 de junio de 1985, que faculta a la Suprema Corte de Justicia a designar a sus Secretarios entre los Secretarios de los Tribunales de Apelaciones y los jueces letrados y 117 y siguientes de la misma, que se refieren a sus funciones. El cargo de Prosecretario Letrado de la Corte -que había sido suprimido por disposición anterior- fue recreado por el art.53 de la ley de Rendición de Cuentas núm 16.134 de 14 de septiembre de 1990, transformando a esos efectos en tal cargo, uno de juez letrado de primera instancia del interior.

Art.8º.- *Los miembros de la Alta Corte deben, antes de entrar a desempeñar sus cargos, prestar juramento ante la Asamblea General.*

Este artículo, con ligeras variantes, corresponde al art. 2º del proyecto sancionado por el Senado en 1902, que, también en forma aproximada fue seguido por el del Ejecutivo de 1906 y el de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes.Ni la Constitución de 1830, ni las posteriores, ni las leyes de la materia como el Código de Organización de Tribunales, ni la Ley Orgánica de 1985, se refieren a este juramento que, no obstante, se ha cumplido tradicionalmente. Cabe considerar, en realidad, que las diferentes Cartas Fundamentales lo han entendido así tácitamente, desde que, por ejemplo, en los artículos 85 inc.18º y 236, se dice que el nombramiento se hará por la Asamblea General convocada especialmente -vale decir, en acto público- y porque, además, es de precepto la aceptación jurada en todo caso de designación pública de tareas.

Art. 9º.- *La Alta Corte, en el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros Poderes del Estado.*

Es la lógica consecuencia de que la Corte sea la cabeza o el jerarca de un Poder del mismo Estado. El texto, tal como ha sido recogido en la ley, proviene del proyecto aprobado por el Senado en 1902, y que se repite en los del Ejecutivo de 1906 y de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes.

La disposición ha sido ratificada y perfeccionada por el art.240 de la Consitución vigente.

TÍTULO II

Art. 10. *- Habrá un Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación que ejercerá ante la Alta Corte de Justicia y ante el Poder Ejecutivo las funciones que establece el art.11.*

Será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado o, en receso de éste, de la Comisión Permanente: durará en su cargo todo el tiempo de su buena comportación, y deberá ser abogado, con seis años

por lo menos en el ejercicio de la profesión o de la magistratura y tener cuarenta años cumplidos de edad.

La presente redacción proviene del art.9º del proyecto del Ejecutivo -que se reitera 10º de la Comisión de Legislación- pero con una ligera variante: en lugar de "las funciones que establece el art.11", decía: "las funciones del Ministerio Público en todas las materias y del Ministerio Fiscal".

Como modificación fundamental, los últimos proyectos (el del Ejecutivo de 1906 y el de la Comisión de Legislación de 1907) cambian la posición de todos los proyectos an- teriores, que confiaban la designación del Fiscal de Corte a la propia Corte. Por su alta jerarquía, que lo coloca en posición equidistante a la de los Ministros de la Corporación, lo razonable parece que hubiera sido que, como a éstos, lo designara también la Asamblea General, pero a iniciativa -se ha dicho- del presidente Williman, se consideró que era algo así como un representante gobierno y se estableció el régimen de elección consagrado en el texto legal.

En la Constitución vigente, entre las atribuciones del presidente de la República, se incluye la designación del Fiscal de Corte y de los demás fiscales letrados (salvo el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que no necesita la venia que se indica a continuación) con la venia del Senado o de la comisión Permanente en su defecto (art.168, inc.13º),

***Art. 11.**- Deberá ser oído en todas las causas de jurisdicción originaria de la Alta Corte: en las que se comprometan leyes o principios constitucionales o de orden público, en las que versen sobre jurisdicción nacional privativa o conflictos de jurisdicción entre alguna autoridad y los Tribunales de la Nación y, en general, en todos aquellos casos que afecten los intereses generales dela sociedad o del Estado o del Fisco.*

En los asuntos de carácter contencioso que vengan a la Alta Corte por recursos deducidos de las sentencias de los Tribunales de Apelaciones continuarán interviniendo los fiscales que hayan conocido de las instancias anteriores. (25)

Repite, casi a la letra, la previsión del art.28 del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, propuesta por el Dr. Ángel Floro Costa. En forma prácticamente igual, fue adoptado por el proyecto del Ejecutivo, de 1906, y por el de

la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, agregándose en Sala el inciso final relativo a que las causas venidas en apelación conservarían la intervención de los fiscales que ya habían prevenido.

En la actualidad, corresponde tener presente lo dispuesto por el Código General del Proceso (arts.27 y ss.); por el Código del Proceso Penal (arts.67,68 y concordantes) y por la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

***Art. 12.** - El Fiscal de Corte tendrá para su despacho el número de empleados que señale la ley y cuyo nombramiento propondrá a la aprobación del Poder Ejecutivo.*

El proyecto de la Comisión de Legislación, siguiendo a la letra al del Ejecutivo de 1906, se refería a "un secretario letrado", además de los restantes funcionarios, siguiendo las propuestas de Ángel F. Costa y de la Comisión Revisora de 1892, que hablaban de "dos auxiliares letrados". Estas referencia fueron eliminadas en el texto legal.

Hoy las designaciones las hace el poder Ejecutivo, al que la Fiscalía de Corte está jeráquicamente subordinada, a través del Ministerio de Educación y Cultura, y los demás aspectos dependen de la legislación presupuestal.

***Art. 13.**- Rige, respecto del Fiscal de Corte, lo dispuesto para los demás Fiscales en cuanto a la obligación de expedirse dentro de los términos comunes.*

La disposición, de naturaleza procesal, es obvia. Tiene su origen en el proyecto del Ejeccutivo. El de Ángel Floro Costa contenía una casuística inútil y muy complicada; pero fue el primero que se ocupó del tema. Se comprende que hoy también acanzan al Fiscal de Corte, como a los demás fiscales, las normas procesales (art. 30 del Código General del Proceso).

TÍTULO III

***Art.14.**- A la Alta Corte de Justicia corresponde:*

1°) Velar por el respeto de las atribuciones e inmunidades del Poder Judicial, asumiendo su representación y sosteniéndolo den-

tro de las prescripciones de las leyes fundamentales de la República.

2°) *Conocer de las cuestiones a que se refiere el art.96 de la Constitución de la República. Los juicios de que habla el primer período del art.96 de la Constitución son los determinados en el art.26 de la misma.*

3°) *Abrir dictamen al Poder Ejecutivo sobre admisión o retención de las bulas y brevés pontificios (art.98 de la Constitución).*

4°) *Conocer de las recusaciones e impedimentos de sus miembros.*

5°) *Conocer de las causas de responsabilidad contra alguno de los Tribunales de Apelaciones o alguno de los miembros de los mismos.*

6°) *Conocer de las contiendas de competencia entre Tribunales y Jueces Letrados.*

7°) *Conocer en consulta en los casos de los arts. 192 y 378 del Código de Instrucción Criminal, al solo efecto de la intendencia correccional.*

8°) *Practicar anualmente y, además, cuando lo crea necesario, la visita de cárceles y ejercer, tratándose de procesos pendientes, las facultades que le acuerda el art. 370 del Código de Instrucción Criminal.*

9°) *Ejercer todas las demás funciones que por las leyes se atribuyen a los Tribunales de Apelaciones reunidos o al Tribunal Pleno.*

Por su evidente importancia,el tema relativo a las facultades de la Corte fue de los que provocaron más la atención de los redactores de los diversos proyectos.El texto legal recoge, con pequeños ajustes de redacción, los proyectados por el Ejecutivo y la Comisión de Legislación. Se adopta la útil innovación de no repetir inútilmente lo ya expresado en la Constitución de 1830, sino de remitirse directamente a sus previsiones.

En la actualidad, este artículo tiene, en general, vigencia, si bien, como era previsible, debe ajustarse a las nuevas normas.

Las citas relativas al Código de Instrucción Criminal corresponderían al vigente Código del Proceso Penal, aunque conviene aclarar que, en los momenos de redactarse estas líneas, ese Código ha sufrido importantes modificaciones,

que hoy tienen solamente una sanción parcial del Legislativo. Y, desde luego, las citas constitucionales son otras.

Así, los arts.96 y 26 de la Constitución de 1830, corresponden hoy a los arts.93 y 239 de la Constitución vigente.

Desde que se produjo, por la Constitución de 1918, la separación entre la Iglesia y el Estado, ya no tiene jurisdicción la Corte para intervenir en materia de bulas y breves (o brevés) eclesiásticos.

Los arts, 192 y 378 del ex-Código de Instrucción Criminal, si bien hoy no responden a ese origen legal, se cumplen en condiciones similares, regulados por Acordadas especiales, debiendo tenerse presente, como se ha dicho, la posibilidad de modificaciones en el nuevo código procesal penal, en elaboración. Se refieren, como ya se habrá advertido, al instituto de la *consulta.* (26)

Tal como se ha dicho antes, la Corte recuperó sus funciones naturales, que, por razones de necesidad, habían ido puestas provisionalmente a cargo de los Tribunales de Apelaciones, fueran el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Pleno.

***Art.15.**- Conocerá también la Corte:*

1º) De la tercera instancia cuando las sentencias de segunda instancia pronunciadas por uno de los Tribunales de Apelaciones fueran revocatorias en todo o en parte de las de primera, debiendo en tal caso observarse las prescripciones del Código de Instrucción Criminal.

Contra la sentencia que la Alta Corte dicte en este caso, no se dará recurso, ni aun el extraordinario

2º) Del recurso extraordinario de nulidad notoria, en los casos en que la sentencia hubiere sido dictada por el Juez Letrado o por uno de los Tribunales.

El inciso primero, referido al procedimiento penal, ya no incluye la tercera instancia, que fue suprimida por la ley núm. 3.439, del 5 de abril de 1909, sustituyéndola por los recursos de casación y de revisión.

Tampoco corresponde el segundo, relativo a la materia civil, pues la tercera instancia en esa jurisdicción fue suprimida por el art. 13 del decreto-ley 14.861,de 8 de enero de 1979, regulado como ley en 1985, y actualmente el art.258 del Código General del Proceso limita las instancias a dos, cuando dice que, contra la sentenicia de apelación, sólo corresponden los recursos de

aclaración, ampliación, casación y revisión; en tanto los arts. 268 y siguientes del mismo código reorganizan el de casación.

***Art.16.** - Corresponde a la Alta Corte el nombramiento de los ciudadanos que han de componer los Tribunales de Apelaciones, previo acuerdo del Senado y, en su receso, de la Comisión Permanente; y, sin ese requisito, el de los Jueces Letrados, los Defensores de Oficio permanentes, los Jueces de Paz y los Tenientes Alcaldes, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales.*

El Poder Ejecutivo nombrará las personas que deben desempeñar el cargo de Fiscales de lo Civil, Menores, Ausentes e Incapaces; del Crimen y Departamentales.

El art. 100 de la Constitución de 1830, ya confería a la Corte la facultad de designar a los miembros de los Tribunales de Apelaciones, con la venia del Senado o la de la Comisión Permanente, en caso de receso. Las otras magistraturas habían quedado libradas al modo de elección previsto por las leyes ordinarias, que establecieron el sufragio para el nombramiento de los Alcaldes, de los Jueces de Paz y de los Tenientes Alcaldes durante ciertas épocas, habiendo quedado librado al Tribunal Superior de Justicia el de los Jueces Letrados. Había sido también tradición legislativa la designación de los Fiscales por el Poder Ejecutivo.

La norma que comentamos es una transcripción literal del Proyecto del Poder Ejecutivo de 1906, repetido en el de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes.

En la actualidad, disposiciones similares se encuentran en la Constitución vigente.El inc.4º del art. 239 le acuerda, a la Suprema Corte Justicia, la facultad de nombrar a los integrantes de los Tribunales de Apelaciones, con aprobación de la Cámara de Senadores o, en su receso, la de la Comisión Permanente (requiriéndose un mínimo de tres votos conforme si el candidato ya es magistrado, y cuatro cuando no lo es). El inciso 5º del mismo artículo le acuerda la de designar a los jueces letrados, y el 6º la de hacerlo con los Defensores de Oficio y los Jueces de Paz, habiéndose eliminado el cargo de Jueces de Distrito (antes llamados Tenientes Alcaldes). La elección de los Fiscales por el Ejecutivo- ya mencionada anteriormente -, pero con venia del Senado o de la Comisión Permanente (con excepción del Procurador del Estado en lo Con-

tencioso Administrativo y de los Fiscales de Gobierno y Hacienda) está prevista en el inciso 13º del artìculo 168 de la Carta.

Por acuerdo entre el Poder Judicial, el Ministerio de Educación y Cultura y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en los últimos tiempos se ha establecido el CEJU (Centro de Estudios Judiciales) en que se imparte cursos para la formación y perfeccionamiento de los jueces y de los aspirantes a jueces, que si bien no son obligatorios ni obligan a la Corporación ni al Ejecutivo, sus más destacados estudiantes son tomados en consideración para el ingreso y los ascensos en la magistratura judicial y en la del Ministerio Público. Además, una Comisión Asesora -sin facultades vinculantes-, integrada por representantes de la Corte, de la Asociación de Magistrados, del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la Universidad oficial, creada por la Corporación recientemente, establece anualmente una lista con los nombres de los diez jueces que considera más destacados, para ser considerados al criterio de ella, a efectos de la carrera judicial.

Art. 17. *- Corresponde a la Alta Corte, en virtud del art.99 de la Constitución, ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre todos los Tribunales y Juzgados de la Nación, pudiendo dictar, para el efecto, las acordadas necesarias.*

En razón de esta atribución, puede también la Alta Corte, siempre que notare que algún Juez o funcionario del orden judicial ha cometido un delito o abuso que no ha merecido la corrección o el castigo que corresponda según la ley, reconvenir al Tribunal o autoridad que haya dejado impune el hecho, a fin de que aplique el castigo o corrección debidos.

Puede asimismo amonestar a los Tribunales de Apelaciones y jueces, o censurar su conducta, cuando ejercieran de un modo abusivo las facultades discrecionales que la ley les confiere, o cuando faltaren a cualquiera de los deberes anejos a su ministerio, sin perjuicio de formar el correspondiente proceso a los jueces o funcionarios delincuentes, si la naturaleza del juicio lo exigiere.

Sin embargo, ni la Alta Corte ni ningún Tribunal podrá avocarse al conocimiento de las causas o negocios pendientes de otro Tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad.

Este artículo reviste la mayor importancia, pues es algo así como el resu-

men de la teoría de la organización general del Poder Judicial de la República.En su primera parte,determina que la Corte, como jerarca del servicio, tiene su dirección admimistrativa (la supeintendencia) lo que garantiza el principio general de la separación de poderes- aunque con el defecto, a que ya nos referimos, que, en lo económico, no se le haya otorgado, como a los otros Poderes, autonomía financiera-; en la segunda, se reconoce, incluso para los juzgados de menor categoría (ya que todos tienen el derecho de juzgar con autonomía dentro de los límites de la competencia que les otorga la ley) la independencia de sus funciones: ni la propia Corte puede desconocer esa independencia, sin perjuicio de las responsabiidades posteriores en caso de abuso o arbitrariedad, como es natural.

En algunas partes de este artículo, y de otros, parece distinguirse entre Tribunales y jueces. En realidad, la palabra "tribunal" se emplea para todo caso de órgano judicial, por lo cual, cuando se redacta de este modo, cabe entender que, por "Tribunales" se ha querido mencionar específicamente a los Tribunales de Apelaciones.

La ley recoge el texto del proyecto del Poder Ejecutivo, de 1906, y su remisión al art. 99 de la Constitución de 1830, debe considerarse, actualmente, referida al inc.2º del art.239 de la Carta vigente.

La Corte se expide mediante Acordadas (o sea decisiones tomadas por el acuerdo de todos o de la mayoría de sus miembros) con alcance general:es su expresión normativa, de carácter general, obligatoria incluso para terceros relacionados con el tema que encara, para los que tienen un alcance similar al de las leyes. Lo hace también por Autos Acordados con un alcance menor, atendiendo generalmente asuntos de orden interno; y dicta Resoluciones para decidir de los expedientes que forma en diversas materias,con una naturaleza muy parecida a la de las sentencias de los jueces inferiores y a las decisiones de la autoridades de los otros Poderes. También se llama Resoluciones a las de carácter general que dicta, delegada legalmente a esos efectos, y para hacer efectivas las Acordadas, la Dirección General de los Servicios Administrativos, de la Corte.

La responsabilidad de los jueces y de los funcionarios se efectiviza siguiendo las garantías y los procedimientos, previstos en los respectivos Reglamentos que ha dictado la Corporación; respecto de los magistrados, las sanciones aplicables se encuentran previstas en el art.114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (15.750,de 24 de junio de 1985). Se practica inicialmente una infor-

mación sumaria, para establecer si existe mérito para un sumario formal, y habiéndolo, este sumario, llamado proceso disciplinario, con intervención del Sr. Fiscal de Corte, que, obviamente, culminará con la decisión sancionatoria o la declaración de no responsabilidad del acusado. En caso de delito, no lo decide la Corte, sino que lo remite para su consideración al juez penal competente. Algunas sanciones menores pueden ser impuestas por los jerarcas de las respectivas oficinas, con recurso ante la Corte. (27)

Art. 18. *- La Alta Corte no podrá funcionar con menos de tres miembros, pero deberán concurrir todos para dictar sentencia definitiva.*

Para dictar sentencia definitiva se necesitan cuatro votos conformes, integrándose la Corte en caso de discordia.

Para resolver el recurso extraordinario interpuesto por contra sentencias dictadas por los Tribunales de Apelaciones, se integrará la Corte con dos de los Jueces que concurrieron a dictar la sentencia recurrida, elegidos por sorteo.

Para dictar sentencia interlocutoria, bastará la presencia de tres miembros con voto unánime y de dos miembros para los decretos de substanciación.

Este artículo se halla parcialmente vigente aún. Como garantía del múltiple examen propio de todos los tribunales colegiados, y de su representatividad, siguiendo la tradición española, se indica el número de Ministros presentes- y, en su caso,concordantes-que es necesario para que la Corte quede constituida y para dictar sentencia definiva o interlocutoria y decretos de mero trámite.

Ya hemos dicho antes que el recurso extraordinario de nulidad notoria no está actualmente vigente.

En los casos de discordia, se integra la Corte mediante sorteo entre los Ministros de los Tribunales de Apelaciones. Cuando las sentencias se relacionan con asuntos de naturaleza militar, intervienen los dos conjueces militares con grado superior, que designa el Poder Ejecutivo al comienzo de sus funciones. (28)

Art.19. *- En caso de discordia, o de resultar impedido o recusado algún miembro de la Corte, se integrará ésta por sorteo, preferentemente con miembros del Tribunal de Apelaciones que hubiera intervenido en el*

asunto; y si esto no fuera posible, con letrados de una lista de veinte formada por la Asamblea General. Para ser incluido en esta lista, se requiere las mismas condiciones que la Constitución exige para ser nombrado miembro de la Alta Corte, excepto la de magistratura.

La Comisión de Legislatura de la Cámara de Representantes había modificado levemente la fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo: en ambas, la subrogación se hacía sorteando directamente de una lista de veinte letrados formulada por la Asamblea General. En sala se adoptó el texto recogido por la ley.

Actualmente, el inciso final del art. 236 de la Constitución comete a ley ordinaria la integración de oficio de la Corte en los casos de vacancia, recusación, excusación e impedimento. Ya el art. 124 del Código de Organización de Tribunales había vuelto a la solución propuesta por el Ejecutivo en 1906, disponiendo que la integración se efectuara mediante un sorteo entre una lista de letrados formulada por la Asamblea General, los que deberían reunir los mismos requisitos exigibles para ser Ministro de la Corte, excepto la de la magistratura.

Hoy rige el art.57 de la Ley Orgánica 15.750,de 24de junio de 1985, modificado por el art. 345 de la ley de Rendición de Cuentas núm. 16.226, de 29 de octubre de 1991. El primero, expresa:*"En caso de resultar necesario,la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio y por sorteo entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones de la materia a la que pertenece el asunto que da mérito a la integración. // Si ello no fuere posible por impedimento de todos los miembros de los Tribunales de Apelaciones de esa materia, se seguirá el orden establecido en el artículo 62* (se refiere a los Tribunales de otras materias, comos del Trabajo y los de Penal, por su orden, para integrar los de lo Civil; los de lo Civil y de lo Penal para integrar los del Trabajo, y los de lo Civil y del Trabajo para integrar los de lo Penal). */ / En las causas civiles, si el impedimento fuera por causa de licencia por plazo superior a treinta días, la integración se efectuará a pedido de parte. En las penales y laborales, en todo caso de oficio.El nuevo miembro continuará conociendo del asunto hasta dictar la sentencia que motiva la integración"*. Por su parte, el art.345 de la ley de 1991, cambió el inciso tercero del artículo anteriormente transcripto, por el siguiente: *"Si el impedimento fuere por causa de licencia por plazo superior a quince días o por*

vacancia, la integración se efectuará de oficio en todo asunto, cualquiera sea su materia. El nuevo miembro continuará conociendo en el mismo hasta que se dicte la sentencia que motiva la integración".

***Art. 20.**- La Alta Corte nombrará por sí sola, cada dos años, treinta abogados para integrar los Tribunales de Apelaciones en los casos que corresponda legalmente.*

Dichos abogados deben reunir las condiciones que se exige a los miembros de los Tribunales.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior y en el presente, regirá la ley de 23 de junio de 1905 en todo lo que pueda ser aplicable.

Esta norma fue sugerida por el proyecto del Ejecutivo de 1906, que la tomó del propuesto por la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes.

Se explicaba en una época en que los Tribunales de Apelaciones sólo eran dos o tres solamente. Pero, aumentado ese número, y ya desde la ley 9.501, de 14 de septiembre de 1935, la integración de los Tibunales se hace por sorteo entre los demás. El orden en el cual se efectúan las subrogaciones respectivas actualmente, ha sido explicado ya, en el comentario al artículo anterior. (Cabe estar a lo dispuesto por el art.63de la ley Orgánica 15.750, modificada por el art. 346 de la ley de Rendición de Cuentas 16.226, que sigue, en general el orden allí indicado).

TÍTULO IV

***Art. 21.** - En los casos de que trata el artículo 96 de la Constitución y en los demás en que las leyes otorguen a la Alta Corte jurisdicción originaria, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos siguientes.*

En este título, el legislador de 1906 ha establecido un pequeño código procesal, de carácter muy especial.

Se ha discutido,incluso en el seno de la propia Suprema Corte de Justicia, si esas disposiciones subsisten en los procedimientos exclusivos de la corpora-

ción, como en el proceso por violación a la Constitución o en causas de almirantazgo, etc., o si han sido derogadas por la legislación procesal posterior de carácter posterior. Esta última, que ha sido finalmente la solución adoptada, se apoya en que, el Código General del Proceso, que es norma posterior y especial, no incluye entre sus excepciones (arts.545 y siguientes) previsiones específicas para la Corte, y, por tanto, debe estarse a su artículo 544.1, de acuerdo con el cual se deroga *"todas las disposiciones legales que establecen procedimientos diversos de los previstos en este Código"*. Con la condición, como dice el inc.1° del art. 239 de la Constitución actual, de que tales juicios sean públicos y su sentencia fundamentada, extremos, todos, ya contemplados por el Código General del Proc. Por lo cual, nos limitaremos a reproducir los restantes artículos relativos a este aspecto, sin hacer su comentario.

Cabe decir, finalmente, que el texto fue propuesto por el P. Ejecutivo y seguido por la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes; así como que al art.96 de la Constitución de 1830, corresponde actualmente el inciso 1°. del art. 239 de la Carta en vigencia.

Art.22. *- Deducida la acción, se dará traslado al demandado, quien deberá contestar dentro de los quince días, prorrogables por diez más. Si se hubiera ofrecido pruebas, se abrirá para recibirlas un término, de acuerdo a lo establecido por el Código de Procedimiento para el juicio ordinario, vencido el cual la Corte llamará autos.*

Una vez estudiada la causa por todos los miembros, se fijará día para la audiencia, en la cual las partes podrán alegar verbalmente, pudiendo usar por dos veces la palabra.

Esta audiencia debe fijarse con diez días de anticipación, por lo menos.

Terminada la audiencia, que será pública, la Alta Corte debe dictar sentencia dentro de tres días perentorios.

Art. 23.- *El Ministerio Público debe asistir a la audiencia y hablará en último término, salvo el caso en que sea parte litigante actora.*

Art, 24. *- Para dictar sentencia, se reunirá la Alta Corte en sesión pública y cada miembro, empezando por el más joven, emitirá su voto fundando cada una de las cuestiones propuestas y sometidas a la decisión de la Corte.*

Art. 25.- *Terminado el acuerdo, será asentado por el Secretario en el "Libro especial de Acuerdos y Sentencias".*

La sentencia debe ser motivada por a aplicacion expresa de la ley a los hechos y firmada por todos los que la dictaron, aun por los discordes, sin perjuicio de que éstos dejen constancia de sus votos en el libro respectivo.

Art. 26.- *Las apelaciones y el recurso extraordinario de nulidad notoria se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en todo lo que no pugne contra la presente ley.*

Art.27.- *De los fallos de la Alta Corte en asuntos de jurisdicción originaria no habrá más recurso que el de revisión.*

Tratándose de sentencias definitivas, dicho recurso sólo procederá en los casos siguientes:

1º) *Cuando la sentencia hubiere recaído sobre cosas no pedidas por las partes.*
2º) *Cuando en ella se omitiere proveer sobre alguno de los casos de la demanda, o de la reconvención, si la hubiere.*
3º) *Cuando, después de pronunciada, la parte perjudicada hallare o recobrare documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado.*
4º) *Cuando se hubiera pronunciado en virtud de documentos reconocidos o declarados falsos, ignorándolo el recurrente, o cuya falsedad se reconociere o declarase después.*
5º) *Cuando habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial o de posiciones, alguno de los testigos o la parte absolvente fueran condenados como falsarios en sus declaraciones.*

Art.28.- *El recurso de revisión, en los casos previstos por el artículo anterior, deberá interponerse dentro de diez días. En los casos a que se refieren los incisos 1º y 2º, se contará dicho plazo desde el día siguiente a la notificación.*

En los casos comprendidos en el inciso 3º, el término para la interposición empezará a correr desde el día en que los nuevos documentos se descubrieren o recobraren.

En los casos de los incisos 4° y 5°, desde el día en que se tuvo noticia del fraude o desde aquel en que se reconoció o declaró la falsedad.

Art.29.- *En la substanciación de este recurso, se observará el procedimiento establecido en el presente Título.*

Art.30.- *La sentencia que en este grado pronunciase la Alta Corte, sea confirmatoria o revocatoria, hará cosa juzgada.*

Art.31.- *No se interpondrá ningún recurso de una sentencia por oscuridad o ambigüedad en sus cláusulas, por error material respecto de los nombres, calidades y pretensiones de las partes, o por simple error de cálculo en su parte dispositiva; pero se podrá pedir en estos casos, dentro de tercero día, contado desde el día siguiente al de la notificación, aclaración de la duda o rectificación del error.*

La Alta Corte resolverá, dentro de cinco días lo que corresponda respecto de esta petición sin substanciarla, y de su resolución sobre este punto no se admitirá recurso alguno.

Sin perjuicio de reiterar cuanto hemos dicho sobre la actual inaplicabilidad de estos artículos del presente título, a los efectos históricos -que son los que se pretende con este trabajo- es interesante ver cómo, a principios de siglo, ya se conocía un tema tan debatido en los últimos tiempos como el del error material de la sentencia. Se diría que lo referido en el último inciso es en puridad un recurso de reposición, aunque al parecer se haya querido obviar todo recurso. Creemos ver aquí una reaparición del viejo remedio de la *súplica*, que se diferenciaba del recurso pues en éste la parte se *agravia* y, por eso,se *alza* contra el tribunal; en tanto la súplica es un pedido con previa sumisión, al arbitrio del juzgador (por eso, se decide sin sustanciar).

Art.32.- *Los Jueces y los Fiscales a que se refiere esta ley serán inamovibles.*

Los Jueces de Paz y Tenientes Alcaldes podrán ser removidos por la Alta Corte en cualquier tiempo, sin expresión de causa, siempre que así convenga a los fines del mejor servicio público.

Como es bien comprensible, el principio de la inamovilidad judicial (salvo el caso de faltas graves reconocidas así en procesos de responsabilidad y por la autoridad del jerarca del propio Poder) es una importante garantía de la independencia del juez, que puede decidir con independencia y tranquilidad, según su leal saber y entender. Hemos visto los importantes males que supone para la sociedad la falta de este principio en nuestra visita a naciones menos felices del Continente, e incluso aquí en los elegantemente llamados "períodos de facto".

La inamovilidad, es cierto, no se extendió a la Justicia Menor, atendidas las menores razones de confianza que daban estos magistrados tan ligados al pueblo llano -que habría de ser quien más los sufriera en caso de defecto- pero sin las seguridades que podía esperarse, moral e intelectualmente, de los universitarios. Pero la facultad de removerlos nunca se ejerció abusivamente -en épocas normales- entre nosotros, pues ha predominado el criterio de que lo facultativo no supone lo arbitrario. La propia ley aclaraba que la remoción podía hacerse "siempre que así convenga a los fines del mejor servicio".

El art.243 de la Constitución vigente edicta que "los miembros de los Tribunales de Apelaciones durarán en sus cargos por todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite dispuesto por el art.250 (el cumplimiento de los setenta años de edad) y lo mismo prevé para los jueces letrados el art.246. Por su parte, según el art.249, "los Jueces de Paz durarán cuatro años en el cargo y podrán ser removidos en cualquier tiempo, si así conviene a los fines del mejor servicio público". La novedad, respecto de la Carta de 1830, es el plazo cuatrienal, el que procura una fácil solución en el caso de falta de eficacia de estos funcionarios, pero siempre atendiendo a la conveniencia del servicio. Esta limitación fue establecida por primera vez en el art.225 de la Constitución de 1934 y mantenida en todas las reformas posteriores.

Art. 33.- *Por razones de buen servicio, podrá la Alta Corte trasladar a los jueces, siempre que el nuevo cargo sea de igual grado y remuneración que el anterior.*

Si el traslado se verifica sin haberlo pedido el interesado o sin promoción, éste tendrá derecho a una suma prudencial que fijará la Alta Corte, como indemnización de los gastos que le ocasione.

Antes de decretar la traslación de un Juez, debe oírse al interesado y al Fiscal de Corte.

La garantía de la inamovilidad de los jueces no se limita a la circunstancia de no poder ser destituido arbitrariamente sino a la de no poder ser trasladado sin razón a otro cargo. Desde luego que ello no es posible cuando el nuevo cargo suponga una rebaja de categoría o de remuneración, salvo que ello se realice como sanción de una falta grave o de la incapacidad ténica del interesado. Precisamente,dentro del elenco de sanciones que prevé el art.114 de la Ley Orgánica 15.750, se encuentran la de "traslado a un cargo no conceptuado como de ascenso" (inc.4°) y la de "descenso a la categoría inmediata inferior"(inc.6°), pero, como antes se ha explicado, estas sanciones deben ser la consecuencia de un proceso de responsabilidad en que, con las debidas garantías, se ha comprobado acciones u omisiones de carácter grave en el cumplimiento de los cometidos del sancionado, sanciones que, en caso ineptitud, omisión o delito, pueden llegar, más allá del traslado, a la destitución (inc.7°). Pero estas son circunstancias extremas.

El inciso 5° del art.239 de la Constitución vigente preceptúa que los nombramientos de los jueces letrados tendrán carácter definitivo cuando recaigan sobre ciudadanos que ya tuvieran dos años de antigüedad en la judicatura o en el Ministerio Público o, en la Justicia de Paz, en destinos que deban ser ocupados por abogados; de no tener esa condición,serán considerados jueces letrados interinos durante dos años,durante cuyo período, la Corte, por mayoría, puede removerlos del cargo en cualquier momento;vencido ese plazo, adquieren la confirmación de su nombramiento, de pleno Derecho.

Por su parte, el art.246 de la misma Carta, en su segundo inciso, dice que la Corte, por razones de mejor servicio, puede trasladar a los jueces letrados de cargo o lugar o de ambas cosas, luego de oído el Fiscal de Corte, necesitándose tres votos conformes de la Corporación, si ese traslado no significa disminución de grado o de remuneración, o cuatro si ocurre lo contrario. Lo que recuerda bastante el artículo de la ley de 1906, que comentamos.

El art.99 de la ley 15,750 repite esta disposición de la Constitución en vigencia; pero agrega, como lo hacía ya la ley comentada, que "en caso de traslado o ascenso, el Estado sufragará los gastos que se ocasionaren, salvo que el traslado tuviere carácter sancionatorio".

***Art. 34.**- Inmediatamente de instalada, la Alta Corte de Justicia procederá a nombrar a las personas que deben desempeñar las funciones de miembros de los Tribunales de Apelaciones, Jueces Letrados y Defensores*

de Oficio permanentes. En el Poder Ejecutivo, el Fiscal de Corte, de acuerdo con el art. 10: el de lo Civil, el de Menores, ausentes e incapaces, y los del Crimen.

Cada autoridad designaba a sus magistrados menores: la Corte, Tribunales de Apelaciones y Jueces (según el art. 16). El Ejecutivo, el Fiscal de Corte y los demás representantes del Ministerio Público (art.10). Eso debía hacerse de inmediato, pues era urgente llenar las vacantes de Ministros de los Tibunales y de los jueces letrados, que desempeñarían su función por largo lapso, en carácter de inamovilidad;no sucedía igual respecto de los jueces de paz y de los tenientes alcaldes, pues podían ser nombrados en cualquier momento. Aumentaba la importancia de estos actos, desde que el Ejecutivo era un nuevo órgano elector y en la Administración de Justicia aparecían nuevas magistraturas, todavía no existentes de hecho, pero sí con servicios que debían prestarse desde ya.

Este artículo, que lo recogió textualmente la Comisión de Legislación de Representantes del proyecto de 1906 del Ejecutivo, tuvo existencia efímera por tratarse de una disposición transitoria, sin vigencia en lo sucesivo. (Lo permanente, desde luego, estaba en los artículos 10 y 16 de la ley).

Art.35.- *Los magistrados que forman parte de la actual Administración de Justicia y que no fueran nombrados por la Alta Corte para desempeñar cargos judiciales, así como los Fiscales que no lo fueran por el Poder Ejecutivo, tendrán derecho, según los casos, al retiro y pensión que establecen las leyes de 5 de mayo de 1838 y 28 de marzo de 1853: los que hubieren ingresado posteriormente, a tantas avas partes del sueldo de que gocen, cuantos sean los años de servicios prestados, cualquiera que sea el número de éstos.*

A este retiro será aplicable lo dispuesto por el art.7 de la ley de 5 de mayo de 1838 y por el párrafo tercero del art.18 de la de 14 de octubre de 1904, y se pagará por Rentas Generales desde el día del cese, no pudiendo en ningún caso exceder del sueldo íntegro.

Se trataba, como es obvio, de establecer una reparación a modo de retiro o jubilación, para aquellos jueces o fiscales que,con la nueva organización, no resultaren reelectos, contrariándose de lo contrario,el principio de inamovilidad

judiclal. Se acudía, por analogía,a las leyes de 1838(sobre premio a los militares retirados) y de 1853 (sobre pensiones a las viudas de militares), pagadas por Rentas Generales.

El artículo fue elaborado por la Comisión de Legislación de la Cámara, que se apartó con él del proyecto del Ejecutivo. Por su confusa redacción, fue impugnado por el presidente Williman, motivando que fuera modificado por la ley 3.254 de 25 de noviembre de 1907.

Actualmente, y luego de algunas disposiciones con tratamiento especial para los magistrados, en leyes como las de 5 de enero de 1948, 27 de marzo de 1953, 4 de agosto de 1960, etc.,las jubilaciones de los jueces se rigen por las normas generales de la materia.

Es también una disposición transitoria, como se comprende.

Art. 36.- *Los Ministros de la Alta Corte y demás miembros del Poder Judicial, así como los Fiscales, al llegar a la edad de setenta años, cesarán en el ejercicio del cargo y serán jubilados con arreglo a las leyes vigentes.*

En la constitución de la primera Alta Corte de Justicia no regirá lo dispuesto en el inciso anterior.

Por primera vez se imponía una limitación por motivo de edad máxima -a los setenta años-hoy generalizada por la Constitución de la República(art.250) para todos los miembros del Poder Judicial, y por ley común para los demás funcionarios públicos (salvo excepciones, como en el caso de los militares u otros, en los que el límite suele ser menor). Cabe recordar que existen países en que se impone el retiro a edades más tempranas, como en la Argentina, y otros en que la judicatura se ejerce de por vida (como en Estados Unidos,Paraguay, etc.). Se ha discutido su razón, teniendo en cuenta la existencia de quienes conservan plenas facultades para el cargo superada incluso esa edad; pero la limitación ha sido aceptada generalmente como razonable, por ser cierto que luego de la septentena aspectos psicofísicos decaen en la generalidad de los hombres (como la memoria, la agilidad de desplazamiento, la paciencia,etc.), a lo que cabe agregar que el no poner límites favorece un conservadorismo contrario al progreso de las instituciones, así como que, obstaculizando la carrera de los jóvenes valiosos, puede desestimularse a quienes tienen méritos útiles para la función.

El artículo exime de esa limitación a quienes ya desempeñaban cargos en

los Tribunales de Apelaciones a la fecha de la ley, por dos razones: al haber sido designados con anterioridad a la misma, habían tenido un derecho adquirido a sus cargos, que no podía ser desconocido por norma retroactiva, derecho extensible a su legítima expectativa de integrar algún día el alto Cuerpo previsto en la Constitución; y, además, porque debiéndose reclutar preferentemente a los nuevos Ministros entre los camaristas, en su mayoría éstos tenían ya una edad provecta, a lo que se había llegado, entre otras causas, por la excesiva demora en la instalación de la Corte.

El Sr. ex-Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Hamlet Reyes nos ha informado sobre las únicas excepciones a este artículo de la ley 3.24 que se autorizaron antes de la vigencia de la Constitución vigente. En efecto, la ley 8.784 de 31 de octubre de 1931, suspendió por dos años la limitación, en beneficio de dos magistrados: el Ministro de la Alta Corte Dr. Miguel V. Martínez y el Juez Letrado Departamental de Maldonado Dr.Francisco H. López. Ello fue posible, por hallarse la limitación establecida por una ley común, que podía ser modificada por otra de su categoría; hoy no sería posible, por encontrarse prevista por la Constitución, en una forma imperativa, que no admite excepciones: "*Todo miembro del Poder Judicial cesará en su cargo al cumplir setenta años de edad*"(art.250). Por "miembro del Poder Judicial", se ha entendido a los magistrados o funcionarios similares, como los defensores de oficio, Secretarios, Directores, pero no a los empleados de Poder, que se asimilan a los restantes empleados públicos y, por ello han obtenido, a veces, como estos últimos, extensiones de plazo, generalmente por un año y en escasas oportunidades. Se ha planteado el problema de si la limitación alcanza al Fiscal de Corte, sobre la base de que no es miembro del Poder Judicial, sino del Ejecutivo. De todos modos, estaría comprendido por la ley de 1906. La realidad es que, por lo menos dese 1934, no se conoce casos de Fiscales de Corte que hayan ejercido su cargo luego de haber cumplido los setenta años de edad.

Art.37. *- La Alta Corte dictará su reglamento interno y el de todas las reparticiones del orden judicial.*

Dentro de los cuatro meses de instalada, la Corte formulará y elevará a la aprobación un arancel de costas judiciales, comprensivo de las remuneraciones de Actuarios, de Alguaciles, Tenientes Alcaldes,Jueces de Paz, Tasadores y Rematadores, procurando especialmente disminuir los gastos que pesen sobre los asuntos de menor cuantía.

También propondrá la mejor forma de regular los honorarios de abogados, contadores, procuradores y peritos.

La facultad de dictar el reglamento interno, es la consecuencia de que la Corte sea el jerarca de uno de los tres altos poderes del Estado. La Corte ha cumplido este deber.

Casi inmediatamente después de haberse instalado, dictó el "*Reglamento interno de la Alta Corte de Justicia*", aprobado el 24 de febrero de 1908, que estuvo en vigencia durante muchos años y en el que aparece la interesante figura del "*Ministro semanero*": designado semanamente para rubricar los protocolos de los escribanos y de inspeccionar Tribunales y juzgados (art.7°), los Ministros debían concurrir a las Audiencias" en traje negro de levita" (art.8°). Este Reglamento, con importantes modificaciones, está todavía vigente en lo esencial.

También se ha dictado estableciéndose numerosas innovaciones en el tiempo, el Reglamento General de Oficinas Judiciales. El primer gran documento realizado al efecto -sin perjuicio del dictado de muchas acordadas que se fueron dictando para regular el servicio- es el "*Reglamento de las Oficinas Judiciales y Estatuto de los Funcionarios Judiciales*", aprobado por la Corporación el 21 de julio de 1953, siguiendo un proyecto del Actuario de la Corte, escribano Mattos Ramos. Suspendido en general durante el llamado "régimen de facto", al restablecerse la normalidad institucional fue confirmado por la acordada 6.805, de 27 de junio de 1985 (ya había sido actualizado en 1974) con el agregado de muchas acordadas complementarias. Este Reglamento se coplementa, además, con otros reglamentos relativos a variados servicios de la Administración de Justicia, como el Reglamento de la Dirección General Administrativa, de 20 de agosto de 1986; el Reglamento de Concursos y Sorteos,de 12 de febrero de 1990; el Reglamento de Licencias, de 15 de junio de 1990; el Reglamento de a Oficina Central de Notificaciones, de 30 de marzo de 1966, y muchas otras disposiciones relativas, que no citamos por no extender excesivamente esta nota.

Como demostración de la pobreza constante de la Justicia Nacional, todavía mayor en los primeros días de la Corte, corresponde recordar que al comienzo, sólo los Ministros de la Corporación y de los Tribunales de Apelaciones, sus respectivos Secretarios y ordenanzas tenían sueldos, por cierto tan modestos como los escasos dineros para instalación, alquileres y útiles de ofi-

cina. Hasta 1926, las Actuarías de los Juzgados Letrados se licitaban, debiendo autofinanciarse, como también debían hacerlo hasta 1947, los Juzgados de Paz y los Tribunales de Distrito (o Tenientes Alcaldes). El magistrado no sólo no tenía sueldo, sino que debía encargarse de todos los gastos de la oficina, incluyendo la compra del mobiliario, el pago del alquiler del local y el sueldo de sus empleados. Para afrontar esta situación se recurría al régimen de costas, que consistía en las sumas que se cobraba por cada actuación, para lo cual se realizaba una cuenta en el expediente siguiendo un arancel, que era prácticamente el mismo que, a principios del siglo XVIII, había dispuesto el virrey del Perú, que lo era en la época el marqués de Loreto. Como entonces el arancel se mantenía en lo general y la moneda variaba muy poco, ya se conocía el "precio" de ciertos procedimientos: así, por ejemplo las costas por un juicio por faltas, era generalmente de $4.20, más o menos lo que costaba un casamiento, y era notorio que los ebrios crónicos y los quinieleros clandestinos, guardaban esa suma en el bolsillo de su chaleco, para afrontar la pena y obtener la libertad, por si acaso... No menos pintoresco era que, cuando un juez de paz tenía noticia de que un vecino de su sección se había inscripto para casarse en otra, le enviara una nota afeándolo por ello: y llegamos a ver carteles que se fijaba en las paredes, advirtiendo de esta irregularidad a la respectiva vecindad.

Como se ha visto, en los tiempos iniciales de la Corte, debían fijar los honorarios de los abogados, de los peritos, de los rematadores y otros profesionales. Los honorarios de los abogados se cometían a un Regulador de Honorarios, que era un magistrado,equiparado a juez letrado, con sede en Montevideo, pero con recurso para ante el juzgado. Por la ley de 9 de agosto de 1918, se había creado el cargo de regulador oficial de honorarios "para abogados, procuradores,árbitros, defensores y curiales en general".Estos Reguladores cesaron en su actividad por la ley 12.802 de 30 de noviembre de 1960, que estableció el procedimiento judicial de regulación de los honorarios de los abogados (modificado actualmente por el art.144 de la ley 15.750), el art.40 de la ley 13.355 de 17 de agosto de 1965 se ocupó de los honorarios de los peritos en trámite similar al de los abogados y el art.119 de la ley 12.802, ya mencionada, extendió sus previsiones a los escribanos. Hoy sólo existe un regulador, que se designa anualmente, para los honorarios de los contadores. Y la Corte sólo interviene para fijar el porcentaje de los honorarios de los rematadores en los procesos judiciales.

***Art. 38.**- Las costas que se devenguen ante la Alta Corte de Justicia pertenecerán al Estado.*

Se trata de las llamadas costas de oficio (o "del oficio", como se decía más exactamente antes, para indicar que esas costas corresponden a la autoridad oficial, o sea al Estado): no son costas para los órganos judiciales ni para el tribunal en especial.

Se dice así en todos los casos en que no se cobra costas (como en los casos de auxiliatora de pobreza o cuando la responsabilidad es de la autoridad y no del litigante): es como decir: "los gastos son de cuenta del Estado".

En el caso de este artículo, la realidad es que ha querido significarse que, lo que se perciba con carácter de costas en procesos seguidos ante la Corte, no se destinará a remunerar a los funcionarios, como en el caso de los jueces de paz y de distrito y de los actuarios de los juzgados letrados, sino que se vertirían -como sucede hoy en general- a rentas generales.

El texto no figura en los antecedentes de la ley, sino que tuvo su origen en el plenario de la Cámara de Representantes.

***Art. 39.**- En caso de recusación, impedimento o licencia del Fiscal de Corte, el Poder Ejecutivo designará directamente al Fiscal que debe subrogarlo.*

Proviene del proyecto del Poder Ejecutivo, y es una lógica consecuencia de la facultad jerárquica de ese Poder, que alcanza a la de designar a todos los integrantes del Ministerio Público y Fiscal. No debiera figurar en esta norma, dedicada a organizar la Administración de Justicia: se siguió el hábito de tratar en conjunto ambas administraciones, como, incluso, se había intentado hacer con carácter general en algunos proyectos no aprobados.

Esas mismas razones hicieron que se derogara luego por el art.3° de la ley de 16 de octubre de 1918, que se remitió al art. 126 del Código de Procedimiento Civil, el que preveía la subrogación de todos los fiscales en orden a su antigüedad en el cargo.

Actualmente, debe tomarse en consideración las previsiones similares de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal.

Art. 40.- *Inmediatamente de promulgada por el Poder Ejecutivo la presente ley, convocará el Presidente del Senado a la Asamblea General en sesión extraordinaria para que, de conformidad con la prescripción del artículo 95 de la Constitución de la República y el artículo 4 de la presente ley de organización judiciaria, proceda a nombrar los cinco Ministros que han de componer la primera Alta Corte de Justicia de la República, fijando un día inmediato para que, con arreglo a lo que prescribe el artículo 8 de esta ley, presten el correspondiente juramento.*

A diferencia de lo que ocurre con el Presidente de la República, no hay ni ha habido disposición constitucional que prescriba el juramento de los Ministros de la Alta y luego Suprema Corte de Justicia, en oportunidad de su designación por la Asamblea General, como, sin embargo se realiza habitualmente en la práctica. (Véase nuestro comentario al art.8° de la presente ley).

Art.41. - *Nombrada la Alta Corte, se comunicará por el Presidente del Senado al Presidente de la República, para que éste designe el día de la solemne instalación.*

En las Secciones siguientes se hará la relación de las interesantes ceremonias a que dieron mérito la designación, el juramento, la convocatoria y los homenajes relativos a la instalación de la Alta Corte de Justicia.

Art. 42.- *Mientras no se sancione el Presupuesto General de Gastos, regirá para la Alta Corte de Justicia el siguiente presupuesto:*
(omissis).

Hemos considerado innecesario reproducir aquí la planilla presupuestal prevista en la ley que estudiamos, puesto que, naturalmente, era una disposición transitoria que fue prontamente modificada de acuerdo con los cambios presupuestales.

No obsante, como detalle anecdótico, cabe recordar que el sueldo mensual de cada Ministro de la Corte era ochocientos pesos mensuales. Si tenemos presente que entonces el peso nacional tenía un valor superior al del dólar estadounidense, y que éste tiene hoy un valor adquisito bastante inferior al de aquella época, se apreciará que ese sueldo no era despreciable, y seguramente superior al que se paga en el día.

Art. 43. *- Comuníquese, etc.*

SECCIÓN TERCERA
INTEGRACIÓN DE LA PRIMERA ALTA CORTE DE JUSTICIA.

CAPÍTULO I
INTENSO INTERÉS POPULAR.

92. Finalmente, luego de tantas demoras y dificultades, hubo Corte.

El lunes 14 de octubre de 1907, el Senado aprobó definitivamente el proyecto ya sancionado por la Cámara de Representantes, que recibió el "*cúmplase*" del Poder Ejecutivo el día 28 del mismo mes y año. La corta demora en la promulgación obedeció a la circunstancia de que el Ejecutivo había pedido la modificación del art.35, relativo a la jubilación de los magistrados (véase la Sección anterior). La ley adicional que atendió esta observación, lleva la fecha del 25 de noviembre de 1907.

Pero ya el ambiente social y periodístico reflejaba las inquietudes de tan novedosa etapa. El diario "*El Bien*", de fecha 17 de octubre de 1917, que se editaba en Montevideo decía: "*...se habla en las esferas oficiales de las personas que irán a ocupar esos puestos en la Corte. Los informes más serios dan como candidatos seguros a los Dres. Laudelino Vázquez, Domingo González, Luis Piera, Pablo de María y Ezequiel Garzón*".

En el Ateneo de Montevideo se había constituido una asociación jurídica con el objeto de "*cambiar ideas sobre la mejor forma de influir en el sentido de que los miembros del Poder Judicial que deban nombrarse, sean los más aptos como lo reclaman los intereses generales del país*". Era transparente el temor de que los intereses políticos pudieran ser los que en definitiva prosperaran. A pesar de ello, en otro lugar más adelantado del mismo ejemplar, se lee: "*La reunión de los miembros del foro que debía celebrarse en el Ateneo en favor de la candidatura del Dr. De María para miembro de la Alta Corte, fue suspendida por haber pedido el Dr. De María que cesaran los trabajos que se hacía en su favor*"(edición del 15 de noviembre de 1907 del diario "*El Bien*").

Y no era el único nombre de que se hacía pronósticos. El diario "*El Día*" del sábado 26 de octubre de 1907 comentaba, bajo el título "*Candidatura del Dr. Cuñarro*": "*....El doctor Pablo de María ha manifestado que no acep-*

ta el cargo de miembro de la Alta Corte de Justicia que le había sido ofrecido. La resolución del Dr. De María ha sido muy lamentada. A consecuencia de esta negativa se han iniciado, bajo buenos auspicios, trabajos en favor de la candidatura del senador por la Colonia doctor Benito Cuñarro y se cree que contará con el número de sufragios necesarios para ser electo, pues goza de grandes simpatías en la Asamblea General".

Como puede verse, no era la previa carrera judicial ni los grandes valores jurídicos lo único que se consideraba. Y así, no era raro que quien antes tuviera una notable actuación política (en el caso de legislador) fuera el candidato con "mayores simpatías" para integrar un alto tribunal. Por el contrario, en aquel ambiente pequeño y muy politizado, lo frecuente es que se alternara una función judicial con otra administrativa o legislativa, o meramente partidaria.

Uno de los autores de este trabajo ha podido informarse, por medio de familiares del doctor Laudelino Vázquez, que una de las causas que finalmente dilataron la efectiva instalación de la Corte fue la situación del Dr. Laudelino Vázquez, nominado para integrarla, que se hallaba gravemente enfermo y que, mientras se aguardaba su recuperación -de remotas posibilidades- falleció el 10 de noviembre de 1907. Cuatro días después, según el diario *"El Día"*, se propuso al Dr. Fein.

CAPÍTULO II
LOS PRIMEROS MINISTROS.

93. La Asamblea General del Poder Legislativo, en la sesión del lunes 9 de diciembre de 1907, procedió a la elección de los miembros que habrían de integrar la Alta Corte de Justicia. Por moción del legislador Dr. Blengio Roca, se resolvió que *"la votación fuera por lista y por medio de balotas firmadas"*. Y habiéndose procedido de ese modo, y pasado un cuarto intermedio, se dio cuenta al Plenario del siguiente resultado del escrutinio:

Por el Dr. *Ezequiel Garzón* ..... *67* *votos;*
por el Dr. *Luis Piera* ..... *66* " ;
por el Dr. *Domingo González* ..... *65* " ;
por el Dr. *Carlos A. Fein* ..... *62* " ;
por el Dr. *Benito M. Cuñarro* ..... 50 " ;
por el Dr. *A. Vázquez Acevedo* ..... 10 " ;

por el Dr. *Martín Berinduague* ..... 5 " ;
por el Dr. *Saturnino Álvarez* ..... 4 " ;
por el Dr. *José Pedro Massera* ..... 3 " ;
por el Dr. *Aureliano Rodríguez Larreta* ..... 1 " ;
por el Dr. *Carlos Eduardo Lenzi* ..... 1 " ;
por el Dr. *Carlos Romeu Burgues* ..... 1 " .

En consecuencia, la mesa de la Asamblea General proclamó electos a los cinco ciudadanos nombrados en los primeros lugares y, de inmediato, levantó esa histórica sesión.

CAPÍTULO III
BREVES PERFILES BIOGRÁFICOS

94. A modo de sencilla presentación de los cinco primeros Ministros que integraron la Alta Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, daremos unas breves reseñas de sus datos personales y de sus antecedentes.



a) El doctor **Ezequiel Garzón** nació en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 12 de abril de 1851. Era hijo de don Juan Antonio Garzón Míguez y de doña Marquesa Piñeiro y del Castillo.

Ya a los dieciocho años de edad era profesor de latín en el colegio secundario de Santa Fe, habiendo de ser, con el tiempo, uno de los más eminentes latinistas del Río de la Plata, consultor obligado en las cátedras de esa materia en la Universidad de Montevideo. Próximo a cumplir los veinte años, se trasladó a nuestro país, en el que cursó estudios superiores de Derecho, graduándose de abogado en 1878.

Al año siguiente se le designó juez letrado de Tacuarembó, pasando más tarde a ejercer esa magistratura en el departamento de Soriano. En 1885 fue nombrado Fiscal de Hacienda, cargo que ocupó hasta 1907, cuando fue electo para integrar la Alta Corte de Justicia, cuya presidencia desempeñó ese año y en varias oportunidades posteriores, hasta su jubilación en 1925.

Vivió siempre austeramente, dedicado a su familia y a su profesión. Era un gran lector, especialmente de los clásicos latinos. Falleció en Montevideo el 3 de julio de 1945, cuando contaba la avanzada edad de noventitrés años.

Publicó una antología de poesías y máximas morales y, en 1941, al cumplir los noventa años de edad, un delicioso librito que tituló "*Postrimerías*", en el que recogió recuerdos de su vida, fragmentos literarios y aforismos latinos.



b) El doctor **Luis A. Piera** nació en Montevideo el 30 de enero de 1855. Finalizados sus estudios primarios, cursó los secundarios en el Colegio Nacional que dirigía el profesor don Carlos de la Vega, e ingresó a la Universidad en 1868, graduándose de doctor en jurisprudencia en 1876.

Mientras realizaba sus estudios trabajó como empleado en la Contaduría General de la Nación. Más tarde se dedicó a la carrera diplomática, desempeñándose como secretario de la embajada uruguaya en Brasil. En su madurez, llegó a ser Ministro plenipotenciario en Francia, Alemania y Rusia.

Obtenido su título de abogado cumplió la práctica, entonces obligtoria, en el acreditado estudio del Dr. Ildefonso García Lagos, famoso internacionalista que seguramente debe haber influido en su vocación por la diplomacia.

En la actividad judicial se inició, con el cargo de juez letrado de Paysandú en 1833. Pero ya en 1881 se le había ofrecido el de juez letrado de Cerro Largo que no aceptó, pasando entonces a trabajar como asesor letrado del Municipio de Montevideo e integrando la Comisión Revisora del Código de Minería. Del juzgado de Paysandú, fue ascendido a Juez en lo Correccional de la Capital poco después. Desde 1885 hasta 1887 fue Fiscal de lo Civil, y el segundo año se le nombró Ministro del Tribunal de Apelaciones de Segundo turno. En 1907 pasó a integrar la Alta Corte de Justicia hasta 1910 en que se retiró, siendo sustituido por el Dr. Pablo De-María.



c) El doctor **Domingo González** nació en Montevideo el 2 de julio de 1837. A los veinte años se graduó de bachiller y en 1861, de doctor en jurisprudencia. Ingresó luego en la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, de la que egresó en mayo de 1864, inscribiéndose en la matrícula. Su estudio llegó a ser uno de los más acreditados de la República durante los quince años en los que profesó la abogacía.

Fue Juez Letrado en lo Civil desde marzo de 1879 hasta abril de 1894, cuando la Asamblea General lo designó Ministro del Tribunal de Apelaciones. Y de la Alta Corte en 1907.

Debió retirarse en 1908 al alcanzar el límite de setenta años de edad que, como vimos en la Sección anterior, había establecido la ley de 1906. (29)



d) El doctor **Carlos Alberto Fein** nació en nuestro país (casi seguramente en Montevideo) en 1858. Se recibió de abogado a los veinte años y fue nombrado juez letrado de San José, pasando luego a ser Juez del Crimen en Montevideo. Ante los graves sucesos de la época, provocado por la dictadura militar del Gral. Santos, renunció en forma violenta, lo que le valió ser desterrado a Buenos Aires el 3 de julio de 1881. Regresó al año siguiente, y desempeñó la abogacía -instalando su estudio en la ciudad de Mercedes- hasta 1887, cuando fue repuesto en su cargo de Juez del Crimen.

Contrajo enlace con doña María Adelina Lerena, y tuvo con ella un hijo, de nombre Jorge.

Posteriormente fue Fiscal de lo Civil. En enero de 1894, era Mnistro del Tribunal de Apelaciones y de allí pasó en 1907 a integrar la Corte, jubilándose también por haber alcanzado el límite legal de edad, el 3 de agosto de 1908. Falleció el 15 de mayo de 1919, en su casa del entonces camino y hoy avenida Suárez, donde actualmente se encuentra la residencia presidencial.



e) El doctor **Benito Cuñarro** nació en el departamento de Florida el 7 de mayo de 1855. Inició sus estudios en Montevideo pero concluyó su bachillerato en la República Argentina, y se graduó de abogado en 1881 en la Facultad de Derecho de Buenos Aires.

En nuestra magistratura, se inició como juez letrado de Río Negro. En 1885, integraba la Cámara de Diputados como representante por ese mismo departamento, en cuya oportunidad actuó en abierta oposición contra el gobierno de Santos, que lo desterró a Buenos Aires por dirigir un periódico fuertemente contrario; desde dicha ciudad continuaba trabajando por la destitución del dictador.

Al regresar, gobernando ahora el general Tajes, fundó el periódico "*La Defensa*" con Ángel Floro Costa y Román Mendoza. Desde 1888 desplegó una intensa actividad política: fue jefe político de Soriano, representante por Flores, por Rivera y por Florida. Cuando se desempeñaba como senador por Colonia, se le eligió para integrar la Alta Corte, desde la que se jubiló en 1928. En 1935 llegó a integrar el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Falleció el 20 de febrero de 1940, a los 85 años.

(Las informaciones precedentes fueron tomadas de periódicos de la época, de entrevistas con descendientes de los magistrados que se menciona, de obras y artículos de carácter histórico y enciclopédico).

SECCIÓN CUARTA: SOLEMNIDADES Y FESTEJOS.

CAPÍTULO I
LA INSTALACIÓN DE LA ALTA CORTE Y LOS ACTOS PROGRAMADOS.

95. Hasta mediados de diciembre de 1907 la Administración de Justicia, en sus órganos superiores, se había venido ejerciendo por los dos Tribunales de Apelaciones reunidos (en función de Tribunal Pleno o Tribunal Superior);

completaban esa Administración, en aquella fecha, cuatro Defensores de Pobres en lo Civil y lo Criminal; dos Fiscalías de lo Civil, y de Menores, Ausentes e Incapaces; tres Juzgados Letrados en lo Civil; dos Juzgados Letrados de Comercio; un Juzgado Letrado Nacional de Hacienda; un Juzgado Letrado Departamental de la Capital; dos Fiscalías y dos Juzgados Letrados del Crimen; dos Juzgados Letrados de Instrucción; dieciocho Juzgados Letrados Departamentales del interior y dieciocho Agentes Letrados Departamentales; Jueces de Paz y de Distrito distribuidos en las diferentes secciones judiciales de la totalidad de la República y, en el orden administrativo, un Depósito Judicial de Bienes Muebles. Cuando, cuarenta años más tarde, los autores de este trabajo ingresaron a sus tareas en el Poder judicial, este cuadro se había modificado muy poco.

Los Tribunales de Apelaciones estaban,entonces, integrados de la siguiente manera:

a) El de Primer turno, por los doctores *Laudelino Vázquez* (presidente), *Cristóbal Salvañach y Carlos A. Fein* (ministros); escribanos *Adrián Castro* (secretario) y*José Boragno,hijo* (secretario adjunto).
b) El de Segundo Turno, por los doctores *Luis Piera* (presidente); *Saturnino Álvarez* y *Domingo González* (ministros); escribanos *Augusto Dupont* (secretario) y *José Evia* (secretario adjunto).

96. Con fecha 14 de diciembre de 1907, el Poder Ejecutivo remitía a la Asamblea General del Poder Legislativo el siguiente Mensaje y Proyecto de Ley:

"*...Llevo a vuestro conocimiento que el Poder Ejecutivo, cumpliendo lo dispuesto en el art. 37 de la ley de 28 de octubre de 1907, ha designado el día 19 del corriente para la solemne instalación de la Alta Corte de Justicia. // Este acontecimiento merece realmente celebrarse con la mayor solemnidad por el alto significado que tiene la definitiva organización del Poder Judicial y, para concurrir a ese fin, el Poder Ejecutivo solicita de Vuestra Honorabilidad, os dignéis declarar feriado el mencionado día. // El proyecto de ley que se os somete con tal objeto, comprende también una autorización para tomar de rentas generales los fondos necesarios para los gastos que demanden la ceremonia y la propia instalación de la Corte y que no fueron previstos en el presupuesto incluido en la ley de*

creación. // El Poder Ejecutivo declara incluido el adjunto proyecto de ley entre los que motivaron la convocatoria a sesiones extraordinarias y os saluda con la mayor consideración. ***Claudio WILLIMAN.. Álvaro Guillot."***

*"**PROYECTO DE LEY**: El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,* **DECRETAN** : *-**Artículo 1°**. Declárase feriado el día 19 del corriente, designado para la solemne instalación de la Alta Corte de Justicia. -**Art. 2°**. Las obligaciones civiles y comerciales que venzan ese día serán exigibles el día inmediato siguiente. -**Art. 3°**. Autorízase al Poder Ejecutivo para tomar de rentas generales los fondos necesarios para los gastos que demande la instalación de la Alta Corte. -**Art.4°**. Comuníquese, etc.".*

Este proyecto fue aprobado en sesión del 17 de diciembre de 1907, y en la misma fecha reibió el "cúmplase" del Poder Ejecutivo.

Simultáneamente, se daba a conocer el siguiente decreto. emitido por el Gobierno:

"**MINISTERIO DEL INTERIOR.** *Montevideo, 16 de diciembre de 1907. // El Presidente de la República cumpliendo lo dispuesto en el art.41 de la ley de 28 de octubre de 1907, que crea la Alta Corte de Justicia, y habiendo recibido del presidente de la Honorable Asamblea General la comunicación del nombramiento de los miembros que habrán de componerla,* **Decreta: - *Artículo 1°:*** *Señálase el día 19 del corriente a las cinco y media de la tarde para la instalación de la Alta Corte. -**Art. 2°:** La ceremonia se efectuará en acto público en el Palacio de Gobierno. - **Art.3°:** Por el Ministerio de Guerra y Marina se impartirá las órdenes oportunas, a fin de que se rinda a la Alta Corte, en ese día, los honores que le corresponden, de acuerdo con el art.558 del Código Militar. -**Art.4°:** Comuníquese, insértese en el L.C. y publíquese.* ***WILLIMAN. Álvaro Guillot.***"

CAPÍTULO II
LA ALTA CORTE DE JUSTICIA ENTRA EN LA HISTORIA

97. Con la mano sobre los Evangelios- todavía no se había producido la separación entre la Iglesia y el Estado- cada uno de los flamantes Ministros de la Alta Corte pronunció en alta voz, ante la Asamblea General, el juramento

prescripto por el art.76 dela Constitución de 1830 para el Presidente de la República, que se entendió debía ser similar en el caso del preceptuado por la ley de 1907 para los integrantes del máximo tribunal:

"*Yo, ..., juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios que desempeñaré debidamente el cargo de (Ministro de la Alta Corte de Justicia) que se me confía, que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad y la independencia de la República, observaré y haré observar fielmente la Constitución de la República*".

Este juramento se pronunció en el entonces recinto legislativo, que era el viejo edificio del Cabildo de que hablamos en la Parte Primera del presente trabajo.

98. El diario "*El Día*", en su edición del viernes 20 de diciembre de 1907, relata de esta manera tan solemne ceremonia y los festejos que la acompañaron, todo ello realizado el día anterior:

"*A las cuatro y treinta de la tarde, reunida la Asamblea General bajo la presidencia de don Feliciano Viera - la barra era numerosa -, entró la Corte; y puesta de pie la H. Asamblea, les tomó el juramento de ley. Los Ministros ocuparon los sillones azules destinados a los Secretarios de Estado, dándose en seguida por terminado el acto. En las antesalas se sirvió una copa de champagne a los asistentes, quienes se dirigieron luego al Palacio de Gobierno* [Palacio Esteves, en la Plaza Independencia, actualmente destinado a las recepciones oficiales de importancia]. *El trayecto se hizo a pie mientras las bandas militares hacían oír el himno nacional. Llegaron y se colocaron frente al Poder Ejecutivo; fue entonces que les dirigió la palabra el Presidente Dr. Williman, contestando el Ministro de la Corte Dr. Piera. Luego pasaron a los balcones del Palacio para presenciar el desfile, que se hizo en este orden: Academia Militar, Batallones 1°, 2° y 3°, Regimiento de Artillería y Batallones 5° y 6° de Infantería; la línea era mandada por el jefe del estado Mayor, coronel Segundo Bazzano. El desfile fue correctísimo. Terminado el mismo, se retiraron los Ministros de la Alta Corte, acompañados del Presidente del Senado, doctor Feliciano Viera, y algunos legisladores. La escolta presidencial siguió los carruajes hasta el local de los Tribunales de Justicia, en la calle Sarandí, donde provisionalmente tendrá su sede la Alta Corte* [se refiere al edificio de

la calle Sarandí, casi Alzáibar, que fue demolido, y que tenía entrada por ambas calles]. (30) *Al aparecer los miembros de la Corte en los balcones, la escolta les rindió honores, presentando armas y volviendo luego a formar frente al Palacio de Gobierno. Por la noche, el banquete en el teatro Urquiza fue brillante y suntuoso: la gran sala estaba iluminada y adornada con variedad de plantas. Contra el escenario, la cabecera de la mesa, con el Presidente de la Republica, y en el escenario la orquesta del maestro Aquiles Gubitosi y una fuente de agua iluminada".* Y nos sigue informando el articulista del *menu* servido esa noche por la confitería *"Del Telégrafo"* y del programa musical que interpretó la orquesta. Informa también que, a eso de las diez de la noche, concurrieron a los palcos las damas, esposas de los comensales. (31) En este acto, pronunciaron sendas oraciones el Ministro del Interior, Dr. Álvaro Guillot, y el Dr. Carlos Alberto Fein, en nombre de la Alta Corte de Justicia. Los cuatro discursos de ese día: el del Presidente Williman; el del Ministro de la Corte Dr. Piera; el del Ministro del Interior, Dr. Guillot, y el del Ministro Dr. Fein por la Alta Corte, son bellas piezas oratorias (con el barroquismo propio de la época) que se encuentran guardados en el primer Libro de Acuerdos de la Corporación (págs. 29 a 44).

"El Día" del 19 de diciembre de 1907 da cuenta del recibo de las primeras plaquillas conmemorativas de la instalación de la Alta Corte de Justicia, que habían sido confeccionadas en número de 700 por la casa Horta y Compañía, de Buenos Aires, y fundidas en oro, plata oxidada y cobre plateado sobre la maqueta o modelo de que fue autor un notable escultor español de apellido Tasso. Esas plaquillas, que ostentan la figura de la Justicia sentada, sosteniendo el escudo nacional y una espada, sobre la leyenda *"Instalación de la Alta Corte de Justicia XIX - XII - MCMVII",* todavía hasta hace algunos años, eran obsequiadas por la Corte a los visitantes destacados

CAPÍTULO III
EL ACTA CONSTITUTIVA Y OTRAS RELIQUIAS HISTÓRICAS.

99. Luego del juramento ante la Asamblea General, se trasladó la Corte, como ya vimos, hacia el Palacio Esteves y allí, sentados ante la gran mesa de

sesiones del Poder Ejecutivo. Los flamantes integrantes de la primera Alta Corte de Justicia del Uruguay, suscribieron la siguiente acta, que divulgaron los periódicos de la época:

*"En la ciudad de Montevideo, a diez y nueve de diciembre de mil novecientos siete, hallándose en su despacho del Palacio de Gobierno el Excelentísimo Presidente de la República doctor don Claudio Williman acompañado por los señores Ministros Secretarios de Estado en las carteras de Gobierno, Relaciones Exteriores, Hacienda, Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, Obras Públicas y Guerra y Marina; presentes los doctores don Domingo González, don Carlos Fein, don Luis Piera, don Ezeqiel Garzón y don Benito Cuñarro, nombrados por la Honorable Asamblea Legislativa Ministros de la Alta Corte de Justicia de la República, y habiendo prestado ante ella el juramento de estilo: Su Excelencia declaró constituida solemnemente la Alta Corte de Justicia de la República, disponiendo que se extienda la presente en el Libro de Actas Oficiales, que firman por ante mí de que doy fe.-**Claudio WILLIMAN, Domingo González, Carlos A. Fein, Luis Piera, Ezequiel Garzón, Benito Cuñarro, Álvaro Guillot, Blas Vidal(hijo), Antonio Bachini, Antonio Cabral, Juan P. Lamolle, Eduardo Vázquez, Mariano Soler (arzobispo de Montevideo).-Francisco Sáez (Escribano de Gobierno y hacienda)".***

Firmada el acta precedente y luego de presenciado el desfile militar -de lo que también informamos- los miembros de la flamante Alta Corte de Justicia y su comitiva se trasladaron en carruajes hasta el edificio donde funcionaban los Tribunales de Apelaciones, para realizar allí su primera sesión formal.

Instalados en el salón donde se reunía el Tribunal Pleno y en la tarde del día siguiente, viernes 20 de diciembre de 1907, aproximadamente a la hora dieciocho, se realizaron los tres primeros Acuerdos, que pasamos a transcribir:

*"**Núm.1.**- En Montevideo, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos siete, reunidos en el local de los Tribunales de Apelaciones los Sres. Ministros doctores don Domingo González, don Ezequiel Garzón, don Carlos A. Fein, don Luis Piera y don Benito Cuñarro, nombrados por la Honorable Asamblea General para componer la Alta Corte de Justicia, por ante los infrascriptos dijeron:*

Que la declaraban instalada y que se comunique y publique. Acto continuo, se procedió a la elección de Presidente de la Corte, que recayó en el Ministro doctor don Ezequiel Garzón, quien tomó inmediatamente posesión del cargo. Y lo firman S.S.E.E., de que certificamos. ***GONZÁLEZ, FEIN, GARZÓN, PIERA, CUÑARRO. Adrián Castro. José V. Evia."***

*"**Núm.2.**- En Montevideo, a veinte de diciembre de mil novecientos siete, reunida la Alta Corte integada por los doctores don Ezequiel Garzón, presidente, etc. etc., DIJO: que nombraba Secretario de la misma al Dr. Justo Cubiló, quien previo juramento que prestó en esta audiencia, quedó en posesión del cargo. Y lo firman, etc. etc."*

*"**Núm. 3.** En Montevideo* [igual fecha e integración, ahora por ante el Secretario Justo Cubiló] *DIJO: Que procedía a designar a los membros de los Tribunales que serán propuestos a la H. Comisión Permanente, de acuerdo a lo dispuesto por el art.16 de la ley de 14 de octubre de 1907: Para el de Primer turno, a los Dres. don Romeo Burgues, don Miguel v. Martínez y don Julio Bastos; y para el de Segundo Turno, a los doctores don Victoriano Martínez. don R. Montero Paullier y don Teófilo Piñeiro. Y lo firman,etc. etc.".*

(En estas transcripciones se ha abreviado aquellas partes comunes a las tres actas y de fácil reproducción por el lector, para evitar repeticiones inútiles).

CAPÍTULO IV
LA ALTA CORTE EN ACTIVIDAD.

100. En los Acuerdos celebrados en días posteriores a los indicados en el capítulo anterior, la Corte procedió a dictar normas de carácter adminstrativo interno.

En el Acuerdo número 9 se dispone el cierre temporal de los tribunales, con moivo de la feria judicial. En efecto, la legislación vigente disponía que que esa feria se iniciara el 24 de diciembre y terminara el 25 de enero del año siguiente, de manera aroximada a la que hoy es la feria judicial mayor.

Posteriormente, la ley sobre licencias y vacaciones en el Poder Judicial, de

1° de julio de 1915, establecería que le feria mayor judicial debía iniciarse el 25 de diciembre y terminal el 25 de enero siguiente, y la feria menor, correría desde el 10 al 31 de julio.

101. El 27 de enero de 1908, al iniciarse un nuevo año, se designa Presidente de la Corte al Dr. Ezequiel Garzón, y presidentes respectivamente de los Tribunales de Apelaciones de 1° y de 2° Turnos a los Dres. Luis Romeu Burgues y Ramón Montero Paullier.

102. En el Acuerdo núm.19, del 28 de enero de 1908, se da cuenta del nombamiento de los primeros funcionarios administrativos del Cuerpo: escribano de Corte, don Julián Laguna; escribientes, Sres. Alberto Dupont Aguiar y Alberto Herrera y Thode; notificador, don Demetrio Martínez; encargado de copias, don Eduardo Rodríguez Larreta; conserje, don Francisco Ortiz de Zárate, ordenanza, don José Costas.

103. En el Acuerdo núm. 29, del 24 de febrero de 1908, se integró la Corte con los camaristas Dres. Romeu Burgues y Bastos, por los ministros Dres. González y Fein.

104. Como se ha visto al estudiar la ley de 1907, la Presidencia era un cargo rotativo, que cambiaba anualmente. Ya vimos que el primer Presidente fue el Dr. Garzón, que ejerció su cargo hasta diciembre de 1908. En el Acuerdo núm.76 de 26 de enero de 1909, se designó para ese cargo al Dr. Piera, en el Acuerdo 129, del 26 de enero de 1910, al Dr. Cuñarro, en el 179, de del 26 de enero de 1911, al Dr. Romeu Burgues.

105. Se recordará que el insigne jurista Dr. Pablo De-María (como gustaba firmar) había renunciado a integrar la primera Corte, con gran disgusto general. Pero el 4 de febrero de 1911, al jubilarse el Dr. Piera,pasó a ocupar su sillón en el alto tribunal. (Acta 182, de esa fecha).

106. En el Acuerdo núm. 46, del 10 de septiembre de 1908, la Corte designó como empleado del Cuerpo al Sr. Armando Rivas, con el que pudimos hablar en oporunidad del cincuentenario de la Corte, en 1957, y del que nos ocupamos en la nota 30 de esta Parte.

SECCIÓN QUINTA
LA CORTE EN LA CONSTITUCIÓN DE 1918.

CAPÍTULO I
LA CARTA DE 1918.

107. Aunque la segunda Constitución que tuvo el país fue sancionada, luego de un tramite complicado, el 25 de noviembre de 1917, es conocida por Constitución de 1918, por ser ése el año en que fue sometida a ratificación popular y promulgada, el 3 de enero.

Fruto de una época de audaces progresos, fue considerada, conjuntamente con la Constitución mexicana de 1912 y la soviética de 1917, por el constitucionalista francés HAURIOU, como una de las tres más originales de esos primeros años del siglo XX. Cabría mencionar, a grandes rasgos, la posibilidad del sufragio femenino (que recién se haría efectiva en 1938), la separación de la Iglesia y del Estado, una autonomía departamental muy alta, y un ejecutivo parcialmente colegiado, en un doble sistema de gobierno único en el mundo.

108. En el orden judicial, sin embargo, los cambios no son tan notables.

a) En su Sección XII (*Derechos y Garantías*) cabe destacar, por su relación con nuestra materia, la prohibición absoluta de la pena de muerte -ya establecida por ley común en 1907- así como el humanitario y científico criterio de que "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados"(art.163); la posibilidad de la libertad provisional bajo fianza (art.164); la limitación del derecho de propiedad en caso de necesidad y utilidad pública (hasta entonces lo había sido sólo en caso de necesidad) y el derecho de petición para ante cualquier autoridad (arts.167 y 169). El art. 173 agregaba que la enumeración de dicha Sección no excluía los demás derechos y garantías inherentes a la personalidad humana y la forma republicana de gobierno. Principios, todos estos, reiterados en la Carta vigente. En lo demás (forma de juicio legal, *hábeas corpus,* abolición del juramento de los acusados y del juicio en rebeldía; inviola-

bilidad del hogar,etc.) se estaba a lo ya establecido por la primera Constitución.

b) Los arts.115 a 126, relativos al *Poder Judicial,* repiten lo establecido para esa materia en los arts.91 a 101 de la Constitución de 1830, con algunas salvedades. Las condiciones para ser miembro de la Alta Corte de Justicia - que fueran las de haber ejercido la abogacía durante seis años o cuatro la magistratura, cuarenta años de edad y demás exigidas para ser senador- pasan a ser ahora las de haber ejercido la profesión de abogado durante diez años por lo menos, u ocho la de magistrado, también con las demás exigidas a los senadores. Se deroga la previsión sobre la intervención de la Corte para decidir del recurso de fuerza, ya inexistente en la legislación común, por lo menos en lo relativo a la intervención de la Justicia del Estado en asutos de jurisdicción eclesiástica, como era lógico por la separación de la Iglesia y del Estado, previstas con carácter general.

Tratando de los Tribunales de Apelaciones, la nueva Constitución exige el previo ejercicio de la abogacía por ocho años o el de la magistratura por seis, en lugar de los cuatro que preveía la Carta anterior (art.124). Se mantiene en dos años la condición de haber ejercido antes la abogacía, para los jueces letrados de primera instancia (art.128). El art. 127, en previsión novedosa, otorga la jurisdicción civil y penal a los jueces letrados departamentales. En lo demás, se mantienen las viejas previsiones.

SECCIÓN SEXTA
LA LEGISLACIÓN POSTERIOR

CAPÍTULO ÚNICO

109. Como se comprenderá, el número de leyes dictadas entre el año de estabecimiento de la Alta Corte (1907) y el de su cambio de nombre por Suprema Corte de Justicia (1934) es muy numeroso.

Por esta razón, deberemos limitarnos a la sintética mención de las más importantes de aquellas que tienen relación con el asunto que venimos tratando.

1) La ley del 5 de abril de 1909 estableció, para la materia penal, los recursos de casación y de revisión, que recién setenta años después habrían de extenerse a la civil.

2) Por la ley del 12 de julio de se creó el Registro de Reincidencias, dependiente entonces del Consejo Penitenciario, encargado de brindar datos a la justicia para individualizar a los procesados y penados (dactiloscopia, *bertillonage,* retrato hablado,etc.). Ha sido la semilla del actual Instituto Técnico Forense, hoy organismo importantísimo de la Administración de Justicia, altamente tecnificado.

3) El 25 de febrero de 1915 se promulgó una ley que introdujo importantes modificaciones al Código de Procedimiento Civil, vigente en la época.

4) La ley del 1° de julio de 1915 dispuso las ferias judiciales mayor y menor de que ya hablamos en otra Sección de esta Parte.

5) Por la ley del 31 de agosto de 1915 se suprimió el Juzgado Letrado Departamental de 2° Turno de Salto y, por primera vez, se dio a ese departamento una justicia especializada, creando en su lugar el Juzgado Letrado de lo Civil, Comercial y Correccional, así como la Fiscalía de lo Civil, Ausentes e Incapaces de Salto, que también intervendría en materia penal. Se estableció un régimen de subrogaciones y licencias para aquellas autoridades.

6) El 25 de enero de 1916 se promulgó una ley sobre el régimen de suspensión condicional de la pena, que sería modificada por la ley de 8 de julio de 1921. El procesado quedaba sometido a la vigilancia de la autoridad

7) Por la ley de 12 de septiembre de 1916, se suprimió la posibilidad de ejercitar la acción privada para la iniciación de algunos procesos criminales. En adelante, ese causas deberían iniciarse de oficio o a consecuencia de denuncia de parte, en los casos que contemplaba la ley (generalmente vinculados a delitos leves contra la persona física y el honor)

8) La ley del 27 de abril de 1917 manda que las oficinas judiciales devuelvan los escritos conteniendo cuentas particionarias, inventarios sucesorios, liquidación de impuestos,etc., que no llevaran firma de contador, de perito, de abogado o escribano.

9) Al igual que antes en Salto, que acabamos de ver, la ley de 11 de enero de 1918 estableció en Paysandú un Juzgado Letrado de Primera instancia, con jurisdicción Civil, Comercial y Correccional, modificando la planilla de Fiscales competentes y regímenes de vacaciones y subrogaciones.

10) El 25 de enero de 1918 se dispuso por ley la creación de médicos forenses: uno por cada Juzgado de Instrucción Criminal, en Montevideo. Dependerían de esos jueces, pero serían designados por el Poder Ejecutivo.

11) El 19 de julio de 1918 la ley sustituye al art.146 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la regulación de los honorarios de los abogados. Esta ley sería luego modificada por la del 17 de diciembre de 1920.

12) La suspensión condicional de la pena fue regulada por la ley de 8 de junio de 1921; este beneficio se extendía a las penas por multas.

13) La ley de 1° de noviembre de 1922, fijó la jurisdicción por cuantía de los jueces de paz, la que no debía exceder de doscientos pesos. Intervendrían también en los desalojos urbanos y suburbanos cuando en el lugar no hubiera jueces letrados.

14) La ley 7.869 de 27 de julio de 1925 (ya comienza a numerarse las leyes) fijó el nuevo arancel de costas, largo tiempo vinculado con el que en el siglo XVIII indicara el virrey del Perú, marqués de Loreto.

15) En la ley del del 15 de octubre de 1925, se estableció cuáles serían las causas que debían seguirse ante jurados y cuáles no. El jurado debía integrarse por ocho miembros -incluyendo al Tribunal- los jurados se debían ocupar sólo de los aspectos de hecho, quedando a cargo del Tribunal la aplicación del Derecho y la determinación de la pena.

16) Ley del 1° de noviembre de 1926: dispone la expropiación de las Actuarías que, hasta entonces fueron propiedad de los actuarios, que las adquirían en licitación, y se cobraban, ellos y sus funcionarios, con las costas que recaudaban. Los empleados serían nombrados por la Corte a propuesta de los actuarios, y presupuestados (en los juzgados letrados).

17) 1927, 16 de diciembre: se promulga la ley 8.153, que será la "ley madre" de una larga cadena sobre normas relativas a los

arrendamientos y a los desalojos, que en parte subsiste todavía hoy. No era, ciertamente, la primera y, a pesar del derecho que otorgaba el Código Civil al arrendador para pedir la devolución de la finca alquilada, fue necesario establecer plazos, cada vez más extensos, con disgusto explicable de los propietarios, pero por razones explicables de carácter social. A medida que las ciudades (especialmente Montevideo) fueron el foco de atracción para los habitantes de la campaña (unido a épocas de gran inmigración) se hizo sentir la escasez de viviendas en arrendamiento y el alza consiguiente de las rentas. La primera ley ya tuvo su origen en 1853, al terminar la Guerra Grande, y se vería con claridad luego de las dos guerras mundiales y con motivo de las crisis económicas de la Nación. Esta ley de 1927 estableció principios generales que, en lo sustancial, persistieron por lo menos hasta 1974.

18) El 27 de junio de 1928, dentro de un plan general de edificios para los Poderes del Estado, se dispone la construcción del Palacio de Justicia, todavía no terminado. Habría de levantarse en el predio de la avenida 18 de Julio entre las calles Minas, Guayabo y Magallanes, donde actualmente se encuentra la sucursal 18 de Julio del Banco de la República Oriental del Uruguay, canjeado al Banco Hipotecario, que se hiciera cargo de una deuda del Poder Judicial, por los terrenos de los cuales se le ha entregado a la Corte el que hoy ocupa en la Plaza Independencia, en 1985, sin que se haya obtenido todo el dinero necesario para levantar el bello proyecto que ganara ese año la licitación.

19) El 24 de septiembre de 1928 se promulgó la ley que regula el contrato de prenda industrial que, con el de prenda agraria de 21 de marzo de 1918, darían gran impulso al trabajo creador, permitiéndoles un fácil acceso, generalmente con el apoyo del Banco de la República, al crédito financiero, a industriales y agricultores. A la Justicia le correspondería la garantía efectiva de esos créditos, mediante un procedimiento sencillo de ejecución en caso de morosidad.

20) El cargo de Jueces Suplentes, bajo la supervisión directa de la

Alta Corte de Justicia, se estableció por la ley del 11 de diciembre de 1929.

21) Un decreto del Poder Ejecutivo, representado pr el Presidente Dr. Baltasar Brum, reglamentando la ley de 25 de julio de 1927, dispone la impresión de timbres para financiar el futuro Palacio de Justicia.

22) El 12 de junio de 1931, se establece legalmente que la Alta Corte de Justicia está facultada para fijar el horario de sus oficinas.

23) El 17 de junio de 1931 se promulgó la importantísima ley 8.153, que establece el régimen especial para regular el régimen de enajenación de inmuebles a plazos. Hasta entonces, la mera promesa de compraventa de inmuebles -que suele preceder a todo contrato de venta de bienes raíces cuando el precio no se paga al contado- sólo daba derecho, en caso de incumplimiento del vendedor, a la reclamación por los daños y perjuicios. Por esta ley, la inscripción de la promesa en el Registro de Enajenación de Inmuebles a Plazo, lo da a que el vendedor deba respetar el convenio, y a exigir, abonado todo el precio o parte del mismo, la enajenación de oficio, en caso de imposibilidad o resistencia del prometiente vendedor. Posteriormente, estos beneficios se extendieron incluso a la venta en la que el precio no se abona en cuotas sino en fecha diferida, entre otras variantes en el tiempo que no afectan lo esencial.

24) 17 de julio de 1931, ley 8.742, que reglamenta el régimen de desalojos de predios rurales, materia que en primera instancia queda a cargo de los jueces de paz del lugar del inmueble.

25) 1932, noviembre 22: decreto del Ejecutivo disponiendo que se distribuya formularios para el control del timbre "Derecho de Archivo", que permitiría obtener fondos para la construcción del Palacio de Justicia.

26) El Código de Organización de Tribunales, que durante muchos años regularía el orden de los tribunales civiles y de hacienda, fue aprobado por la ley 9.164, del 19 de diciembre de 1933. Promulgado en la fecha expresada, ese Código entró en vigencia el 1° de febrero de 1934, de acuerdo con la ley 9.172. Se inspiró fundamentalmente en un proyecto del Dr. ABADIE-SANTOS, redactado en

1933 y que conocía antecedentes como el proyecto del Dr. Ángel Floro Costa, al que nos referimos ya, y otros de fecha posterior al de este último. El nuevo Código estableció tenientes alcaldes (o jueces de distrito),jueces de paz, jueces letrados de primera instancia en lo civil y de los contencioso administrativo, tribunales de apelaciones y una Alta Corte de Justicia, con asiento en Montevideo, aunque algunos de ellos tuvieran jurisdicción en todo el territorio de la República; y tenientes alcaldes, jueces de paz y jueces letrados de primera instancia, en el interior. Naturalmente que, a todos ellos, debía sumarse los juzgados y tribunales de las materias penal y militar, ya existentes. En Salto y Paysandú desapareció la anterior distinción entre los jueces de lo civil y del crimen, y en la Capital la diferencia entre los jueces de lo civil, de comercio y departamentales.

El Código prevé además normas sobre jurisdicción y competencia, subrogación, incompatibilidades,etc.

La ley 9.172 sustituyó algunos artículos y lo complementó la ley 9.222, de 25 de enero de 1934, que estableció, entre otras cosas, que los turnos de los juzgados tenían naturaleza de orden púbico, para evitar los abusos de los litigantes en la elección de quien habría de juzgarlos.

27) La ley 9.189, de 4 de enero de 1934, relativo a la Contribución Inmobiliaria, prevé la intervención de los jueces de paz y de los de hacienda en los juicios a que dé lugar su percepción.

28) El 6 de abril de 1934, por la ley número 9.342, se promulgó el Código del Niño. A pesar de los defectos de que se le ha acusado, y a haberse redactado en parte por médicos y no abogados, ese Código ha funcionado bastante bien hasta la fecha, habiéndose anticipado a muchos países, algunos de los cuales lo copiaron o adaptaron. Como el concepto de "niño" es biológico y no jurídico -pues la niñez depende del desarrollo de cada individuo y su fecha no puede precisarse, lo que quita certeza a sus actos jurídicos- en oportunidad de integrar uno de los redactores de este trabajo una comisión oficial para la adaptación del Código, propusimos que se sustituyera ese término por "menor" (menor de determinada edad) lo que es jurídicamente más preciso; ello fue aceptado hace pocos

años para llamar Instituto del Menor (INAME) al anterior Consejo del Niño.

Precisamente, entre otras innovaciones de esa ley, corresponde mencionar el establecimiento del Consejo del Niño y la creación de los juzgados (entonces "el Juzgado") de Menores.

29) El 18 de octubre de 1934 se promulgó la ley 9.435, integrando comisiones para la reforma del código Penal, en las que tomarían parte representantes de la Suprema Corte de Justicia.

SECCIÓN SÉPTIMA: LA UBICACIÓN DE LA CORTE

CAPÍTULO ÚNICO

110. Durante casi cincuenta años, desde diciembre de 1907, a poco tiempo de su establecimiento, hasta 1956, la antes Alta y luego Suprema Corte de Justicia, ocupó el caserón que fuera de la familia Jackson en el número 616 de la calle 25 de Mayo.

Es para muchos de nosotros inolvidable esa casa, donde todos eran amablemente recibidos (lo corriente era que se convidara con café y agua mineral a los visitantes) y en la que prestamos nuestro juramento de abogado e hicimos la carrera que fuera nuestra vocación- lo que incluye a uno de los autores de este trabajo, que una dignidad asimilable a la de magistrado, fuera Inspector de juzgados de paz- e integrante de muchas de las principales comisiones organizadas en la Corte, como secretario ejecutivo.

Los juramentos y actos solemnes en general, se realizaban en el suntuoso ambiente que fuera la capilla de la familia Jackson, y que daba un emotivo margen a esas ceremonias, que nunca olvidaremos.

111. Desde enero de 1956, la ya Suprema Corte de Justicia pasó a ocupar el elegante palacete que construyera el infatigable Piria, frente a la plaza de Cagancha, popularmente mal llamada Libertad, por confundir como de la Libertad la bella estatua que Livi dedicara a la Paz de Abril. Pero esa es otra historia que ya vamos a narrar.

B) LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SECCIÓN PRIMERA: LA CONSTITUCIÓN DE 1934

CAPÍTULO I
UNA NUEVA CARTA

112. No obstante sus indiscutibles valores, la Constitución de 1918 no pudo conservarse largo tiempo.

La crisis económica que azotó a todo el mundo -y a la cual no podía sustraerse un pequeño país dependiente para sus propias necesidades de la buena o mala suerte de las potencias extranjeras- se unió la falta de medidas rápidas que resultaban de su insólito Poder Ejecutivo, en parte presidencial y en parte colegiado: dos cabezas a las que separaban las discrepancias políticas y los celos recíprocos, una de las cuales, para colmo, era por esencia deliberativa. Modelo tal vez ideal de democracia, no había caído en campo propicio; pues todavía estaban bien vivas las pasiones que anteriormente nos habían costado casi un siglo de guerras internacionales y civiles.

Sobre una realidad que se presentaba con favorables augurios: una sociedad en franco progreso, modelo para todo el mundo con sus progresos sociales y educativos; una fuerte economía apoyada en las ganancias obtenidas por la primera Gran Guerra (en la que la moneda nacional se cotizaba por encima de dólar de la primera potencia de ese y de este tiempo); materias primas muy codiciadas y abundantes; un poderoso apoyo de la inmigración de países europeos y asiáticos especialmente laboriosos; una enseñanza que servía de modelo en el Continente; famosos intelectuales y hasta increíbles campeones deportivos: la gran depresión internacional y las dificultades de una Constitución excesivamente audaz arrojaron sobre todo eso el tamporal que, de una democracia casi perfecta, nos hicieron sentir, en pocos días, la hiel de los regímenes autoritarios.

113. Pero, en medio de la ominosa tiniebla, no todo era malo ni dejó de ser rescatable. La solución que se consideró acertada fue la de pro-

mulgar una tercera constitución, que, si bien mantenía algunos de los beneficios de la anterior, introducía las modificaciones radicalmente contrarias que se entendieron necesarias: se pasó a un Ejecutivo autoritario, con la seguridad de un Senado elegido de modo que respondiera a la política triunfadora; se recortó la autonomía municipal hubo limitaciones a la libertad de expresión y se recortaron beneficios sociales: pero si todo esto era cierto- en gran parte inspirado por los gobiernos fuertes y más que fuertes que se venían destacando en Europa- sorpresivamente se recogieron principios muy avanzados en materia social, muchos de ellos recogidos de constituciones tan liberales como la de Weimar.

El Presidente Terra -que diera el golpe de Estado que dio iniciación a esta etapa- era abogado y político entrenado en los buenos tiempos pasados, y supo rodearse de juristas y economistas tan destacados como los doctores Demichelli, Ghigliani, Irureta Goyena,Chiarino, etc., cuya huella todavía está presente en realizaciones que mantuvieron los posteriores regresos a la Democracia.

114. Promulgada en 1934 esta Constitución, tuvo diversas modificaciones en los años 1942, 1952, 1967,1989, 1994 y 1997 que no afectaron a su estructura general y menos todavía a sus disposiciones relativas al Poder Judicial.

115. Como detalle anecdótico, nos parece interesante recordar algo que nos dijera el eminente profesor Dr. Eugenio PETIT MUÑOZ, quien fuera Secretario de la Corte y que presentó renuncia con motivo del golpe de estado. Decía que, producida la situación de hecho, y luego de haberse constituido las autoridades policiales en el Palacio legislativo y ante el Consejo Nacional de Administración, para proceder a la disolución de dichas corporaciones y clausura de sus locales Terra, que había sido íntimo amigo del Presidente de la Corte Dr. Julio Guani -ambos habían sido en su juventud jueces de paz en el barrio montevideano de la Unión- concurrió personalmente al edificio judicial de la calle 25 de Mayo, para proceder a su cierre esperando hallar buena acogida de Guani. Éste, que lo aguardaba a la entrada del local, le negó el paso y le dijo a la manera de los antiguos héroes que *sólo entraría allí pasando sobre su cadáver.* Ante cuya actitud Terra optó por no insistir y dio marcha atrás.

CAPÍTULO II
LA JUSTICIA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1934.

116. Las principales innovaciones de la Constitución de 1934, sobre la anterior de 1918, pueden resumirse diciendo que se da a la antigua Alta Corte de Justicia el nombre de "Suprema" Corte de Justicia, entendiendo por *suprema* no un elogio o título honorífico sino la calidad de tribunal superior o de mayor competencia; que se confiere a la Corte la defensa de inconstitucionalidad (suele hablarse de *recurso de inconstitucionalidad*, pero se la puede establecer, no sólo como recurso, sino también como excepción, por lo cual entendemos preferible llamarla *defensa);* la consagración del límite de los setenta años para los cargos de la magistratura y las previsones sobre gratuidad y justicia militar. Pero, para mayor claridad, veremos con mayor detalle los artículos relativos.

117. El art. 209 (actual 233) de la Constitución de 1934 hace, como las anteriores, un catálogo de los órganos que componen la Justicia, pero limitándose a decir que "el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y juzgados, en la forma que establece la ley". Si bien cabe criticar la distinción entre tribunales y juzgados, que son palabras sinónimas, puede interpretarse que cuando dice "Tribunales" ha querido referirse a los Tribunales de Apelaciones. En cambio, es más comprensivo referirse a los juzgados en general, en lugar de "Tribunales de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia", como hacía la Constitución de 1830, o "Tribunales y Juzgados de Instancia", como en la de 1918.

118. Según el art. 210 (hoy 234) se establece taxativamente que los Ministros de la Corte serán cinco, en lugar "del número de miembros que la ley designe", como decían las Cartas anteriores. En realidad, el texto anterior era mejor, pues daba la oportunidad de acompasar el número de integrantes a las necesidades de la época por la vía más fácil de la ley, en lugar de las dificultades propias de una reforma constitucional. Hoy es general plantearse la conveniencia de aumentar ese número, como ocurre en la generalidad de los países, pudiendo integrar salas especializadas en una instancia tan alta. Hemos conocido Cortes (supremas, de casación, constitucionales) de otros países, incluso americanos, en las que los integrantes no bajan de veinte y llegan, como en Bélgica, nada menos que a cuarenta, con sus respectivas oficinas.

119. A las condiciones exigidas para ser Ministro por la Constitución de 1918, que ya nos referimos (diez años de ejercicio de la abogacía u ocho de la magistratura; cuarenta años de edad y los demás requisitos para ser senador) el art.211 de la de 1934 agregó el de la ciudadaníal natural en ejercicio. La reforma de 1952, en su art.235, que es igual al 235 actual, agregó la de la ciudadanía natural o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años de residencia en el país, amplitud que se explica porque, con la figura del Vicepresidente, no existe el riesgo -conocido en otros tiempos- de que el Presidente de la Corte pueda llegar a ser Presidente de la República sin ser ciudadano natural.

120. El art.236 de la reforma de 1967, a la elección de los miembros de la Corte por mayoría especial de la Asamblea General agregó una manera indirecta de elección, inspirada posiblemente por una disposición similar de la Corte Constitucional francesa: si en el plazo de noventa días no se llenara regularmente una vacante de Ministro, quedará automáticamente designado el miembro de Tribunal de Apelaciones más antiguo. Esta innovación, que probablemente se debió a los extensos lapsos en que la corporación quedaba desintegraba por falta de acuerdo de los legisladores de la Asamblea General, tiene una virtud accesoria: la posibilidad de que lleguen a la Corte magistrados sin compromisos políticos, asegurando su plena objetividad.

121. En cuanto al tiempo de duración en el cargo, la Constitución de 1830 se refería a "todo el tiempo de su buen comportamiento" y la de 1918 no establecía un límite. La de 1934, en su art. 213, lo limitó a diez años, pudiendo ser reelecto el Ministro que excediera ese plazo si mediaran cinco años entre el cese y la reeleción,disposición que se ha reiterado, correspondiendo al actual art.237. Parece una disposición oportuna -por lo demás, no hay que olvidar que las magistraturas cesan de pleno Derecho al cumplirse los setenta años de edad- pues permite la renovación del Cuerpo con la posibilidad de recibir conceptos jurídicos novedosos y es un estímulo para la carrera de los jueces.

122. La dotación de los Ministros, como en los textos anteriores, según el art.214 de la Constitución de 1934 (actual 238) la fija el Poder Legislativo, sin necesidad de iniciativa presidencial y fuera de la ley de presupuesto.

123. El art. 215 de la Constitución de 1934 (hoy, sería el 239) hace una larga enumeración de las facultades de la Corte, que nos ha parecido excesivamente extenso comentar, máxime cuando se reiteran aproximadamente los mismos incisos en ellas. relativos a la jurisdicción exclusiva en asuntos de importancia internacional y diplomática, al derecho de nombramiento de sus subordinados (en el caso de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, con la venia del senado o de la Comisión Permanente en subsidio) y a su superintendencia directiva, correctiva y consultiva. De las Cartas anteriores se ha suprimido algunas previsiones de carácter procesal que, con acierto, han quedado libradas a la ley común. En materia económica, le corresponde preparar anualmente el proyecto de presupuesto del Poder, que envía al Parlamento con las observaciones que le merezca al Ejecutivo. Injustamente, como ya se ha dicho, es el único de los tres Poderes del Estado sin autonomía presupuestal y, por tanto, el más pobre.

124. Una innovación del art.216 de la Constitución de 1934 (hoy 240), ciertamente muy acertada, es la facultad de comunicarse directamente con los otros Poderes, y de asistir a las sesiones de las comisiones parlamentarias, para dar su opinión ("con voz y sin voto") cuando se trate en ella asuntos que interesen a la Administración de Justicia, o para promover allí reformas a los códigos procesales. Por lo demás, su opinión es solicitada con frecuencia por las Cámaras cuando se tratan materias de carácter jurídico.

125. Los arts. 217 y 218 de la Constitución de 1934 (actuales 241 y 242) se refieren a los Tribunales de Apelaciones. Estas previsiones, las Cartas de 1830 y 1918 las delegaban en las leyes. Desde las nuevas previsiones, queda aclarado que -como ha sido tradicional- los camaristas sean tres, y deban tener por lo menos treinta y cinco años de edad, ser ciudadanos naturales o legales con siete años de ejercicio y haber profesado la abogacía durante ocho años o la judicatura o el Ministerio público o Fiscal por seis años. La duración, decía el art. 219 que ahora es el 243, siguiendo a las disposiciones que le antecedieron desde 1830, es la de su buen comportamiento, con la actual limitación general de los setenta años cumplidos de edad.

126. Los restantes artículos 220 a 222 (ahora 244 a 246) tratan de los jueces letrados, cuyo número, lugares y facultades se cometen a la ley común.

Se exige la edad mínima de veintiocho años, la ciudadanía natural o legal con cuato años de ejercicio, la antigüedad de cuatro años en la abogacía o dos en la magistrarura judicial o del Ministerio Público o Fiscal y la inamovilidad por el tiempo de su buena comportación. Similares disposiciones se prevén para los jueces de paz, pero con la exigencia de veinticinco años cumplidos de edad, ciudadanía legal o natural con dos años de ejercicio y la calidad de abogado para desempeñar el cargo en Montevideo, abogado o escribano en las capitales y ciudades de los demás departamentos y en otras poblaciones que así lo requieran, a juicio de la Corte(art.243,actual 247). En los últimos tiempos, ha sido política inteligente de la Corporación el ir reduciendo el número de juzgados rurales (con escasa o ninguna tarea, atento a la actual reducción de la población de la campaña y la circunstancia de que las comunicaciones modernas facilitan el desplazamiento a las ciudades) y el nombramiento de abogados para esas capitales y ciudades, atendiendo a la mejor preparación de los profesionales y el número creciente de vocaciones judiciales entre ellos.

El art. 224 (hoy 228) indica que el territorio de los departamentos debe dividirse en secciones judiciales. No se ha hecho así en Montevideo, atendiendo a la realidad de que la firma letrada obligatoria hace que los vecinos de los barrios alejados deban recurrir a los abogados que suelen concentrarse en las zonas céntricas; en decisión legal de más que dudosa inconstitucionalidad. Por lo demás, los actuales Centros Pilotos de Mediación, establecidos por la Corte para el arreglo convencional de los asuntos menores, atiende las necesidades de esos barrios suburbanos.

127. El art. 225 de la Constitución de 1934, introdujo el principio de la reelección trienal de los jueces de paz y de distrito, que favorece a la Corte disponer de estos cargos, en general desempeñados por personas sin título profesional (salvo en Montevideo, capitales departamentales, ciudades,etc.), sin tramitación especial (lo que no quiere decir que se haga -ni se haya hecho- en forma arbitraria). La reforma constitucional vigente desde 1952 (sancionada y promulgada en 1951), facultó al legislador a suprimir los juzgados de distrito, que ya carecían de importancia en la realidad. Esta autorización se hizo efectiva en la ley 12.270, de 11 de enero de 1956, la que sumó a los jueces de paz la competencia que había correspondido a los de distrito (o, como antes se decía,tenientes alcaldes). Por esta razón, el texto vigente desde 1952 (hoy art.249) suprimió la referencia a esa magistratura.

128. Otra novedad de la Constitución de 1934, fue la de su art.226, de acuerdo con el cual "todo miembro del Poder Judicial cesará en el cargo al cumplir setenta años de edad". Por "todo miembro" se ha entendido a aquellos que ejercen el Poder, vale decir a los jueces y técnicos que siguen la misma carrera por asimilación, como los Secretarios de la Corte. Esta limitación existía ya en la legislación común para los empleados públicos en general, en cargos no electivos, pero eso permitía que el legislador introdujera -como introdujo- excepciones, imposibles ante el mandato imperativo y fijo de la Carta. No se comprende en ella a los meros empleados judiciales, y se duda si es extensible al Fiscal de Corte y otros miembros del Ministerio Público y Fiscal.

Su utilidad parece evidente, para evitar la excesiva vejez de quienes ejercen tan delicada función, que exige el buen estado de todas sus facultades físicas y mentales, y porque estimula la carrera judicial de los colegas más jóvenes, como hemos dicho anteriormente. Hemos conocido un juez de una Corte de otro país del Continente, que continuaba en su cargo ¡a los noventa años!, motivando un lamentable espectáculo para sus judicandos.

129. No menos interesante es el art.227 (actual art.251) que hace incompatibles los cargos de la judicatura con toda otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la enseñanza pública superior,o en otras funciones públicas honorarias permanentes no conexas con la judicial. Su evidente propósito es que el juez dedique su esfuerzo a la ya compleja y agotadora tarea que le corresponde y que, por otra parte, evite compromisos no adecuados a su independencia y ecuanimidad.

Las excepciones se explican: el profesorado univesitario en materia jurídica, para aprovechar el caudal de su experiencia y conocimientos en una actividad socialmente útil, como es la de la preparación de abogados y escribanos; la de actividades honorarias vinculadas a su tarea, para que pueda integrar comisiones honorarias parlamentarias o departamentales de naturaleza social. Cuando en la República existía una única universidad, la oficial, en cuanto a la primera excepción no se planteaba problema alguno, pero sí se ha generado la duda, con la creación de universidades privadas que imparten cursos de Derecho, si las mismas están comprendidas en la primera excepción; y se ha resuelto en el sentido de que, por "enseñanza pública" no debe considerarse sólo la estatal, sino a aquella que se imparte con carácter de abierta al público en general.

Desde luego que, tratándose de una tarea de tiempo completo, lo que los sajones llaman *full time,* también es absolutamente incompatible con cualquier otro trabajo público o privado, de carácter retribuido u honorario; comprendida, en primer lugar la abogacía, como lo prevé expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

130. El art. 238 (hoy252) está vinculado con el anterior, particularmente en lo que se refiere a los jueces. Pero se extiende a todo el personal de la Corte, Tribunales de Apelaciones y juzgados, en cuanto a prohibirles cualquier intervención, fuera de su obligación funcional, en los asuntos que se ventilan en sus oficinas, bajo pena de destitución inmediata; a menos que se trate de asuntos personales o de sus familiares más directos; se entiende que previa excusación y autorización.

131. El que fuera art.229 en la constitución de 1934, y hoy 253, procura determinar los límites de la justicia militar con la común. No admitiendo la doctrina democrática la existencia de fueros especiales,contrarios al principio de igualdad, se establece fuera de toda duda que esa justicia militar se aplica solamente a los militares, no a los civiles, y que se puede juzgar por sus pares a aquéllos por delitos comunes solamente en caso de estado de guerra, o por delitos o faltas de expresa naturaleza militar, como la deserción, la indisciplina,etc., en caso de paz.

Así lo ha entendido siempre la jurisprudencia, incluso la de la Alta y Suprema Corte de Justicia.

132. De acuerdo con el art.230 (hoy 254), también innovación de 1934, la justicia deberá ser gratuita para aquellos declarados pobres conforme a la ley. Es lo que en Derecho procesal se conoce como "auxiliatoria de pobreza". Se sostiene que, a sentido contrario, todo otro servicio judicial debe ser pagado. No compartimos esa idea, y creemos que la norma constitucional se ha limitado a dar el ejemplo de la gratuidad más corriente, la que interesa a los particulares en general, pero que eso no impide otros casos de gratuidad, incluso la gratuidad como principio -como se intentó durante el régimen de facto-: de lo contrario, las disposiciones que disponen la gratuidad del Estado y sus dependencias serían inconstitucionales, ya que en esos casos no puede hablarse de "declarados pobres con arreglo a la ley".

Lamentablemente, en razón de su falta de recursos y de autonomía financiera, constantemente es preciso buscar medios económicos para la Justicia, a pesar de tratarse de un servicio tanto o más esencial que los de la policía o la enseñanza ("el Estado, juez y gendarme, por lo menos"). Choca que las gentes deban pagar para que se les acuerde nada menos que el acceso a la Justicia,el que debería ser totalmente llano.

133. El principio de la tentativa de conciliación previa ante la Justicia de Paz en la materia civil, del art.231, tiene una vieja tradición. La Constitución de 1830, la exigía además antes de deducir denuncias por injurias, lo que entonces debía responder a la iniciativa privada, y que se derogó en 1934. La disposición admite excepciones por ley, lo que se ha hecho cada vez en mayores situaciones, abriéndose camino cada día más la preferencia por las conciliaciones intraprocesales: se entiende que es mayor la persuación y conocimiento de los conflictos que corresponden al juez que conoce por sí mismo de una causa.

134. Los arts.232 a 235 organizan el muy importante instituto de la *declaración de inconstitucionalidad de las leyes.*

Apoyado en el criterio de que la Constitución es la "ley de las leyes" que tiene una jerarquía mayor que las leyes comunes y que determina los programas o líneas generales que la ley corriente debe reglamentar, a modo similar que ocurre entre las leyes y los decretos reglamentarios es lógico concluir que cuando la ley contradice los mandatos constitucionales, esa ley carece de validez por exceder de sus fines.

Planteado el problema de si el juez debe cumplir las leyes que, a su juicio, vulneran los principios constitucionales, el miembro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica MARSHALL, estableció el criterio de la preeminencia de la Constitución sobre las leyes comunes, en el famoso caso *Merbury versus Madison,* en que se aplicó, a principios del siglo XIX, la facultad de los jueces de revisar una ley del Congreso.(32) En nuestro país se discutió durante mucho tiempo, antes de las previsiones que estudiamos si, siendo la Constitución una ley, todo juez debía cumplirla directamente, obviando la ley que consideraba inconstitucional -como lo hace desechando el decreto ilegal- o, en atención a que la ley común emana del Legislativo legítimo, debía cumplirla a pesar de todo, en respeto al principio de separación de

Poderes. La situación era más sencilla en los Estados Unidos, porque, siendo allí la jurisprudencia fuente formal de Derecho, a nadie escandaliza el que el juez pueda convertirse en legislador o colegislador. Por esta razón, una declaración de inconstitucionalidad tiene allí carácter general, y la ley declarada inconstitucional es generalmente inaplicable. Pero no es lo mismo entre nosotros, en que las funciones de los tres Poderes del Estado son independientes y en que los jueces deben considerar con mucho respeto las normas legales, por ser la emanación de los representantes legítimos del pueblo; sería del todo inconcebible que un magistrado judicial pueda legislar o susituirse a los legisladores.

Ese es el motivo por el cual la Constitución de 1934 pone este instituto a cargo de su máximo tribunal, la Suprema Corte (art.234); su decisión sólo tiene alcance para el caso concreto (art. 234, inc. 2o, ahora art. 259), comunicándose a la Asamblea General por si ese Poder considera conveniente modificar la norma considerada inconstitucional (art. 19 de la ley reglamentaria 13.747, de 15 de julio de 1969).

Por lo demás, no toda ley o norma con el aspecto formal de ley es susceptible de esta defensa. Las facultades de los Poderes del Estado no siempre son nítidas: el Ejecutivo dicta normas generales cuando emite decretos y el judicial lo hace cuando dicta acordadas, el Ejecutivo actúa en instancias administrativas a modo de juez y el judicial decide sus asuntos internos en vía administrativa. Del mismo modo, el Legislativo realiza función administrativa cuando formula nombramientos o decide ascensos o sanciones de sus empleados, o cuando formula y aprueba su presupuesto. También se constituye en juez en sus juicios políticos y cuando dicta normas de amnistía. Las leyes objeto del instituto de la declaración de inconstitucionalidad son las leyes en sentido estricto: las que contienen previsiones de carácter abstracto, impersonal, con alcance general, una ley que concede una pensión graciable sólo es ley porque tiene esa forma, porque es la manera de expedirse o manifestarse el Parlamento, no es una ley en el buen sentido. Y las leyes verdaderas son aquellas de las que la Corte puede decir si son o no contrarias a la Carta, si lo hiciera cuando, como en el nombramiento de un funcionario, el Legislativo interviene como administrador o cuando, pronunciando una amnistía, lo hace como juez, la Corporación, en realidad, estaría violando el principio de separación de poderes. Así lo determinaron la comisión del Senado que redactó la ley Reglamentaria de esta parte de la Constitución (número 13.747, ya citada) y el ilustre constitucionalista Dr. Justino JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, en su obra "*La Constitución Nacional*".

SECCIÓN SEGUNDA
INTEGRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN 1934.

CAPÍTULO ÚNICO.

135. En oportunidad en que, vigente la constitución de 1934- si bien en régimen de facto- la ex-Alta Corte de Justicia pasaba a llamarse Suprema Corte de Justicia, el Cuerpo se hallaba integrado por los siguientes Ministros:

Dr Abel C. PINTO presidente;
Dr. Julio GUANI;
Dr. Juan Antonio. MÉNDEZ DEL MARCO;
Dr. Pedro ALADIO y
Dr. Juan AGUIRRE Y GONZÁLEZ.

El Dr. Pinto era el Ministro más antiguo, pues- ingresado cuando no existían las limitaciones temporales- lo era desde el 17 de agosto de 1914.

El Dr. Méndez del Marco lo seguía en antigüedad, pues había ingresado a la Corporación el 20 de agosto de 1928.

El Dr. Guani, que llegó a conservar su cargo hasta 1944, también por haber sido designado antes de las limitaciones temporales de la nueva Constitución, era Ministro desde 23 enero de 1929.

El Dr. Aladio tuvo ese cargo desde el 4 de diciembre de 1931, hasta el 12 de agosto de 1934.

Y el Dr. Aguirre y González, ingresó a la Corte el 18 de junio de 1934. (34)

* * *

De los restantes sucesos habremos de ocuparnos en la Cuarta y última Parte de este trabajo.

NOTAS DE LA TERCERA PARTE

(La información editorial detalladada puede consultarse en la Sección Bibliografía de esta parte y de las anteriores).

(17) Esta falta de disposiciones concretas sobre los límites de competencia entre los poderes del Estado, motivó numerosos conflictos, de entre los cuales citamos sintéticamente el recogido en el Acuerdo del Tribunal de Justicia, de fecha 30 de julio de 1880.

El Ministro de Gobierno, en nombre del Presidente de la República, había emitido un mensaje al Tribunal,ofreciendo ratificar un Acuerdo de éste sobre el tratamiento de los condenados al egresar de la cárcel, complementación de sus fallos, que el Cuerpo no había solicitado. Los camaristas, apoyándose en el principio de autonomía e independencia recíproca de los Poderes, rechazaron esa comunicación del Ejecutivo y requirieron de esa autoridad que hiciera uso de su facultad de iniciativa, solicitando del Legislativo que fijara por ley especial, "dadas las deficencias de las leyes sobre el particular, que se deslinden definitivamente con claridad y precisión las facultades que al Poder Administrador y al Judicial corresponden sobre los condenados a prisión y a trabajos públicos [se recordará la corriente condena a labrar adoquines, de que hicieron arbitrario uso las dictaduras militares en esa época] haciendo cesar por este medio, frecuentes contiendas de competencia que traban la marcha regular de la Administración con notorio perjuicio de los intereses públicos", así como que "mientras esa sanción legislativa no se pronuncie, el Poder Judicial declina toda responsabilidad relativa a la efectividad de las penas a que sean condenados los procesados, desde que carece de los medios de hacer efectivas las facultades que a su juicio le corresponden, y lo declare expresamente así, para que en ningún tiempo ni en caso alguno se le pueda imputar negligencia en el cumplimiento de sus deberes" [.....] "por el mismo honor y decoro de los Poderes". *(Del Libro de Acuerdos del Tribunal, archivado en la Suprema Corte de Justicia).*

(Además, REYES, H.: Obra citada, págs. 219 a 227).

(18) COSTA, Ángel Floro: Obra, citada pág. 6

(19) COSTA, Ángel Floro: Obra citada, pág.6.

(20) En el Libro de Partidas de Bautismo de la Iglesia de San Francisco, con fecha 8 de noviembre de 1843, y con la firma del cura párroco Zenón de Aspiazú, figura la partida correspondiente a "JULIÁN BASILIO,*hijo de D. Manuel Herrera y de Dña. Bernabela Martínez",* según hemos podido comprobar.

(21) Con fecha 20 de septiembre de 1907,la Comisión de Legislación del Senado decía a ese Cuerpo: "Vuestra Comisión cree deber aconsejar la aceptación lisa y llana de todas las modificaciones y ampliaciones introducidas al Proyecto, evitando así la demora consiguiente a una discusión de la Asamblea General", y firmaban: *Blengio Roca, Areco* y *Espalter.*

(22) Respecto a la vestimenta judicial, es interesante copiar los fundamentos en que se apoyó el Dr. Ángel Floro Costa, para apoyar su iniciativa en ese aspecto, en la Exposición de Motivos con que la acompañaba. El lenguaje es pintoresco y regresivo,incluso para su época. Pero es rescatable todavía el concepto de que el juez debe vestirse en forma austera y decorosa (de traje de calle oscuro,preferentemente negro o azul) en el ejercicio de su magistratura y en los actos sociales, por comprensibles razones de buen tono y de respeto por su jerarquía y por quienes acuden ante él; máxime en el caso de los Ministros de la Corte y de los Tribunales, que siempre lo han entendido así, con toda razón.

"*Antiguamente, los miembros del Poder Judicial, el Presidente de la República, y, si mal no recordamos, los Presidentes de ambas Cámaras, vestían de gala en las audiencias y, en los actos solemnes oficiales, usaban el frac, la corbata blanca, el bastón y el elástico negro con plumas negras en la cimera. // Muchas veces, siendo niños, recorda mos haber visto a don Joaquín Suárez, a don Juan Francisco Giró, a don Bernardo Berro, a los camaristas doctor Araúcho, doctor Vega, doctor Joanicó, Dr. Antuña,doctor Pereira y otros muchos, en los Tedeums o en fiestas cívicas con el traje oficial preindicado,que a los ojos del pueblo representaba la idea de su alta jerarquía constitucional y, cuando menos, servía para hacerle comprender que, a más de las charreteras y de los entorchados de la clase militar,había otros rangos y otras autoridades en la esfera ci-*

vil que están más arriba y deben estarlo siempre en una sociedad bien organizada. // ¿Por qué se ha de mirar como un progreso ante la cultura social, aún considerándolo tras el prisma del libertinaje reinante, que un magistrado se presente en su despacho o en audiencia pública como un figurín o como un paleto cualquiera, alardeando una despreocupación chulesca que rebaja el concepto de la magistratura a los ojos del pueblo? // Cansados estamos de ver con profundo desagrado, a la par de muchas otras prácticas poco decorosas que se han ido entronizando en los eclipses de nuestra civilización, concurrir a jueces y altos magistrados de jaquet de color claro y hasta de saco, a las audiencias, y algunos con guantes color caña,corbata plastón chillona y provocativa, ni más ni menos que la que puede usar un tenor o un tourista, olvidando estos magistrados que así rebajaban el decoro exterior y los respetos de la magistratura y que , en nuestra legislación vigente existen disposiciones que condenan tan despreocupado sansculotismo. // El art..94 del Reglamento de Administración de Justicia (Colección de Leyes, Goyena;pág.1510) que no ha sido aún derogado por ninguna disposición posterior, dispone lo siguiente: "Los jueces del Tribunal de apelación y los letrados de 1ª. instancia en las funciones del oficio, usarán un vestido negro y decente, con sombrero armado y bastón". // No estamos, pues, tan exentos de precedentes,como para que las ideas del proyecto puedan fácilmente ser impugnadas por una crítica frívola, insustancial y pedantesca. // Es fácil ver, por otra parte, que en el fon do de estas incorrecciones sociales y en todas estas inconveniencias de trajes, hay un sentimiento adulador de ese rastacuerismo plebeyo que hasta hace poco se había enseñoreado de nuestra cultura social, haciendo menos ruido con su inteligencia e ilustración que con sus y relumbrones de similor, con los cuales pretendía ponerse arriba de las leyes y del refinamiento estético de nuestras antiguas costumbres sociales. // Se iba haciendo de moda ya, retirar la levita, el jaquet negro, el frac, el sombrero de copa y el guante fino, que tanto chocaba al genizarismo preponderante de otros días [se refiere, obviamente, a la época de las dictaduras militaristas de Latorre y de Santos, que él tanto había combatido] *y se hacía gala de una despreocupación insólita hasta en los más solemnes actos de la*

vida oficial. // No es, sin duda, nada de esto el ideal a que debe aspirar un pueblo culto como el nuestro, mayormente en una época en que la vida civil tiende a ensancharse y a ocupar su verdadero puesto y su rango en el Estado. // Si la sociedad tiene exigencias en sus centros y salones, donde no es permitido ni bien mirado rebelarse en el traje contra la etiqueta; si ninguna persona bien educada osaría presentarse en un baile o una reunión pública de saco, de traje de campo o de calle sin exponerse al desprecio o a la crítica; ¿por qué no ha de ser legítimo que iguales exigencias las tengan el foro, los tribunales y la Alta Corte, que es el tabernáculo donde se distribuirá al pueblo en última instancia la eucaristía del Derecho: esto es, la verdadera hostia moral de las sociedades modernas? [....] *Un juez mismo, un camarista, un miembro de la Alta Corte, ¿no se sentirá acaso más dignificado, más austero, más retemplado en la conciencia de sus deberes, cuando sepa que no es un pasatiempo cómodo asistir al despacho en traje de calle a echar unas cuantas firmar y dictar otras tantas alcaldadas sin abrir un libro,ni meditar sobre los procesos, que cuando, por el contrario, sepa que debe comenzar por asistir a él con el traje apropiado y colocar sobre sus hombros y su pecho las insignias de la ley?* [.....] *Una placa de plata o de oro, colgada, en los actos públicos, sobre el pecho, el traje negro de rigurosa etiqueta y el frac en los actos solemnes para los miembros de la Alta Corte, es todo lo que hemos innovado en las prácticas antiguas.* [....]*Dignificar y prestigiar los pôderes del Estado es trabajar por el orden público y la consolidación de nuestras instituciones republicanas.* (Ángel Floro COSTA: "Proyecto de Código de Administración de Justicia"; Montevideo, Imprenta Migone, 1891; págs.109 a 111).

Podríamos agregar aquí que, aproximadamente hasta 1950, era exigible que los juramentos de los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia se recibieran por la Asamblea General, vistiendo de etiqueta los Ministros y los Legisladores que concurrían al acto solemne de rigor.

(23) Vázquez,Laudelino: Obra citada, págs.26 y 27.

(24) Méndez Calzada, Luis: Obra citada, pág. 156.

(25) Sobre la posibilidad de que el Fiscal de número Corte pueda intervenir en causas propias de los fiscales inferiores, ver en el núm.3, de abril de 1976 de la revista " Judicatura": "*¿Puede el Sr. Fiscal de Corte intervenir fuera de su* parquet*?*".

(26) Para mejor intelección de este artículo, recomendamos la lectura del artículo del Dr. ESPÍNOLA: *"De la consulta en las causas de materia criminal"*, en la Revista de Derecho, Juriprudencia y Administración, tomo 56.

(27) Los Reglamentos que establecen causales de responsabilidad funcional administrativa, sus procedimientos y sanciones aplicables, pueden consultarse en los "Repertorios de Acordadas" preparados bajo la dirección del ex-Inspector de la Corte, Sr. Luis A. Vázquez Praderi, y en los boletines publicados posteriormente por la Dirección de los Servicios Administrativos.

(28) Véase, sobre este tema:CASSINELLI,H.: *" Integración de la Suprema Corte de Justicia en el recurso de nulidad notoria"*, en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 65.

(29) El Dr. Domingo GONZÁLEZ es conocido en los medios literarios por el pseudónimo de "*El Licenciado Peralta*" con el cual escribió un ameno libro de crónicas titulado "*Carnet de un Filósofo de Antaño*", en el que, a la manera del peruano Ricardo Palma, narra episodios de su niñez y adolescencia, en su mayor parte ocurridos durante la Guerra Grande.

(30) En 1957, en oportunidad en que se celebraba el cincuentenario de la instalación de la Alta Corte, uno de los autores de este trabajo tuvo la suerte de entrevistar en su domicilio al Sr. Armando RIVAS, que fuera uno de los primeros empleados que tuvo la Corporación. Recordaba éste, aún, a sus compañeros de tareas, los sueldos que se les pagaba y los locales que ocupó el alto Cuerpo. El edificio se iluminaba a gas en los primeros tiempos, se llegaba a él en carruajes y tranvías de caballito, y nuestro entrevistado alcanzó a usar la primera máquina de escribir que tuvo la Corporación (una "Oliver", adquirida en dos pesos). Entre él y el Sr. Evia-otro funcionario- redactaban el Boletín Judicial que editaba la Corte y que llegó hasta la Unión Panamericana, con sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos.

31) Por más detalles de esta ceremonia, véase: NICOLIELLO,N. y VÁZQUEZ PRADERI,Luis A.:"*Tratado Elemental de Técnica Forense*", citado en Bibliografía de esta Parte, tomo I, pág,181.

32) HARRELL, Mary Ann: Obra citada en la Bibliografía de esta Parte, pág.1. // BRASDSTREET, F.: Obra citada en la Bibliografía de la Segunda Parte.

33) JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA,J.: Obra citada en la Bibliografía de esta Parte, tomo III, pág.68. // ANALES LEGISLATIVOS, citados en la Bibliografía de esta Parte, año 1970, pág.75. // Sentencia múm.224 de 1988, etc., de la Suprema Corte de Justicia.

34) REYES,H.: Obra citada, pág.12.

CUARTA PARTE



Local actual en Gutierrez Ruiz 1310 - (febr. 1956)

"El edificio que sirve de sede a la Suprema Corte de Justicia, en la calle Héctor Gutierrez Ruiz (ex- Ibicuy) 1310, es uno de los monumentos arquitectónicos mas destacados de la ciudad de Montevideo. Mandado levantar por Don Francisco Piria, su estilo responde al lenguaje del eclecticismo historicista y sus planos fueron realizados por el eminente arquitecto francés Camilo Gardelle, ex alumno de la Escuela de Bellas Artes de París".

(Tomado del folleto preparado por el Departamento de Relaciones Publicas y Prensa de la Suprema Corte de Justicia).

PARTE CUARTA

LOS ULTIMOS TIEMPOS

INTRODUCCIÓN.

La época posterior a 1934 -cuando la Corte adquirió su adjetivo de "Suprema"- ha sido también muy rica en importantes acontecimientos.

Nuestra institución ha seguido, como era de esperar, el ritmo de los tiempos, ciertamente muy agitados, que ha vivido el mundo entero de entrambas Guerras Mundiales. Las crisis económicas -propias y ajenas-, las pasiones nacionalistas y políticas, las viejas incomunicaciones y los excesos modernos de comunicación, de algún modo han dejado su huella, en general muy profunda. De situaciones muchas veces delicadas, el Poder Judicial ha sabido salir siempre indemne, en una sociedad que frecuentemente no lo comprende, pero que siempre lo respeta y está íntimamente orgullosa de él; con esa incomprensible timidez del uruguayo, que se sabe dueño de instituciones excelentes, pero entiende que es poco pudoroso reconocerlo públicamente, contra la costumbre universal.

Actualizándose con la penosa dificultad de su constante pobreza, ha pasado, no obstante, a desprenderse de rémoras procesales que heredara de la Colonia y a aceptar con prudencia los nuevos caminos: de la brevedad y de la oralidad; de la pluma de acero y la "tinta negra de buena calidad", a la máquina de escribir y al bolígrafo; del "papel florete" al asombroso milagro de la computación; del papel carbónico a la fotocopiadora; sin duda alguna se ha transitado un nuevo camino que no se limita a esos elementos materiales (escasos por falta de dinero hasta cuando eran generalmente conocidos y empleados por los demás) sino que incluye las adquisiciones más recientes de la doctrina jurídica y el estímulo de la experiencia ajena. Y, particularmente, un alto sentido moral que nadie niega cuando se dice su nombre fuera de casa, y más notable todavía cuando la palabra "corrupción" inquieta a tantos en tantas partes. (35)

SECCIÓN PRIMERA:
LAS NOVEDADES MÁS DESTACABLES.

CAPÍTULO ÚNICO

136. Dicho de modo muy general, podríamos agrupar las novedades más salientes a partir de 1934, de la siguiente manera:

a) La Corte, que en su momento no se distinguiera demasiado de un juzgado común (un caserón antiguo, sin despachos individuales para los Ministros; un sistema de grandes libros, encuadernados y escriturados de la misma manera que los libros de comercio, pero siempre de acuerdo con reglas rígidas previstas en las normas procesales; un corto número de empleados, con las funciones corrientes de actuarios, alguaciles, escribientes y porteros u ordenanzas; máquinas viejas de escribir; formularios impresos y un mimeógrafo como lujo. Pero, fundamentalmente, con muy pocas cosas que disponer y menos dinero para gastar. Tiempos vendrían en que todos los juzgados tendrían que solicitar, con la hoja (papel sellado o no) en la que el postulante redactara su escrito, otra hoja en blanco -irónicamente llamada "de oficio"- para que la oficina escribiese sus actuaciones, y hojas de cartulina -los empleados de la barandilla aconsejaban las cajas de ravioles- para formar con ellas las fichas que, con el tiempo, reemplazaron a las anotaciones en los grandes libros de contabilidad.

b) A propósito de fichas: tendrá que ocurrir una prolongada batalla (primero, contra los legisladores, luego hasta contra los mismos empleados que rechazan esa "diabólica" invención de las tarjetas, en el primer momento) para que ellas sustituyan a los enormes libros -decreteros, de conocimientos,etc., que con esfuerzo el funcionario veterano de la oficina debía levantar, uno por cada año, y depositar sobre un monumental pupitre (eso sí, de roble, que entonces abundaba y no era caro, y además se heredaba desde hacía añales) en tanto una multitud de curiales pedía información a grito pelado, en un discordante coro, sobre el estado de sus asuntos. Y también veremos "transgredir" una antes inflexible prohibición de usar otra tinta que la notarial "negra y de buena calidad", para acep-

tar, no sin cierto escándalo, la escritura impresa y la realizada con tintas en pasta: el popular bolígrafo.

c) Y no nos olvidemos de las fatigosas copias, a mano o a máquina, de extensos testimonios y hasta de expedientes enteros, en tanto tímidamente se iban presentando copias fotográficas, con letras blancas sobre fondo negro, que pronto se borraban y hacían ilegibles. El borrado de los errores con tintas "indelebles" que, con el tiempo, reaparecían en manchas marrones, producto de la oxidación hacían incomprensible lo corregido.

137. Entre los acontecimientos más notables que vivió la Administración de Justicia uruguaya desde 1934 hasta nuestros días, es posible mencionar rápidamente:

a) Su particular actuación durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), transitando entre un comprensible temor de invasión -provocado por los iniciales triunfos del totalitarismo germánico, que llegaron al borde mismo del océano que nos separaba del viejo continente- y una nerviosidad exacerbada por el miedo a formaciones subversivas dentro de nuestro propio país.

Una manifestación de este espíritu aprensivo fue la creación del Juzgado Letrado de Instrucción de Cuarto Turno, por el decreto- ley 10.279 de 19 de noviembre de 1942, con jurisdicción nacional para entender en la aplicación de una entonces profusa normativa sobre actividades antinacionales. Era dudosa la constitucionalidad de este órgano judicial, que tuvo poca vida, pues, en esencia, violentaba la prohibición de los "juicios por comisión" a que se refiere el art.19 de la Constitución, ya entonces en vigencia. Por fortuna, la alta calidad de los magistrados designados para ocupar el nuevo juzgado evitó las malas consecuencias que pudo haber tenido la iniciativa, si bien ésta hay que verla desde la alarma general ocasionada por la grave situación de aquella época.

b) En 1957, la Suprema Corte de Justicia festejó el cincuentenario de su establecimiento, cuando naciera con el nombre de Alta Corte de Justicia, sin que obtuviera ni la modestísima suma que solicitara para dar un marco adecuado a esas festividades. Pudo, no obstante, realizar brillantes actos, en los que se pronunciaron medulares ora-

ciones se oyó a la orquesta sinfónica y al coro del SODRE y se iluminó *a giorno* el edificio del Instituto. Además, uno de nuestros más eminentes escultores, don Luis Zorrilla de San Martín, realizó la valiosa maqueta en yeso para una medalla conmemorativa, que aún no ha sido posible vaciar en metal, se obtuvo medulares artículos jurídicos de los juristas más prestigiosos del país, que publicó una revista especializada (la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 56, vol. 1 y 2); y, entre otras cosas, los autores de este trabajo tuvieron el honor de preparar un "Manual para el Juez de Paz del Interior", que ha sido usado durante muchos años por la justicia menor del país.

Importantes personalidades uruguayas y extranjeras dirigieron elogiosos mensajes alusivos a la fecha, algunos de los cuales se reproducen en la parte final de este trabajo.

La circunstancia de que con esta celebración se tomara fundamentalmente en cuenta a la Corte, no significa que se limitara el acontecimiento a ella, porque esta Corporación representa, como es obvio, a todo el Poder Judicial y sus éxitos no son sino el resultado del esfuerzo y el talento de todos sus integrantes, incluyendo a los más modestos.

c) No todo ha sido favorable para el Poder Judicial en este largo período. El régimen de facto- es cierto que motivado por una demente aventura subversiva ajena al calor popular- que sufrió la República entre 1973 y 1985, le quitó independencia al Poder Judicial (puesto bajo la administración de un inconstitucional Ministerio de Justicia) transformando lo que fuera hasta entonces un Poder del Estado en una simple función (acto "institucional" núm.8) e incluso, cambió su nombre: ni *Alta* ni *Suprema* Corte de Justicia sólo *Corte,* (que, como antes dijimos, no es decir nada pues todo órgano judicial es una "corte"). Suponemos que no fue intención de quienes así lo decidieron la de humillar a la Justicia: es probable que eso se debiera a la idea de dar igual jerarquía a la Suprema Corte que al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si bien es verdad que el principal tribunal militar se siguió llamando "Supremo" Tribunal Militar, lo que era cierto dentro de su propia jurisdicción.

Afortunadamente, hoy sólo hay que ver este triste episodio

como cosa superada, habiendo reconquistado autonomía, facultades y adecuado nombre el Poder, al recobrarse la normalidad institucional.

d) Lo más notable de los años recientes (no quiere decirse que no haya otros de gran interés, sobre los que luego volveremos) es la nueva organización de la Justicia, reglamentada con cuidado y modernidad por la Ley Orgánica 15.750, de 24 de junio de 1985 (con claras indicaciones sobre competencias y jurisdicciones de todos los tribunales; reglamentación de los derechos y obligaciones de los magistrados, sus auxiliares y los curiales; normas sobre regulación de honorarios, etc., sustituyendo con ventajas al Código de Organización de Tribunales) y, con innovaciones que lo han colocado a la cabeza del Continente, en la materia estrictamente procesal con el Código General del Proceso (que introdujo el sistema oral en el proceso civil) a fines de 1989, y el Código del Proceso Penal, cuya reforma estudia en momentos de redactarse este trabajo, el Poder Legislativo.

SECCIÓN SEGUNDA:
LEYES, DECRETOS, ACORDADAS Y RESOLUCIONES.

CAPÍTULO I
LA NUEVA NORMATIVA.

138. Este período (1934-1997), que culmina con los primeros noventa años desde el establecimiento de la Corte, ha sido singularmente rico, no sólo en los acontecimientos que acaba de relacionarse sino en el terreno normativo.

Haremos una breve reseña de las nuevas disposiciones -legales y reglamentarias-, en el bien entendido que, ante su abundancia incompatible con los límites de este trabajo, nos limitaremos a las más importantes.

a) La ley 9.594, de 12 de septiembre de 1936, sobre Abreviación de los juicios estableció, entre otras cosas, plazos máximos para que tribunales de apelaciones y jueces unilaterales dictaran sus senten-

cias definitivas, bajo pena de nulidad, sustitución del sentenciante y anotación en su legajo.

b) Por la ley 9.755, de 7 de enero de 1936, con motivo de una sorpresiva decisión de no culpabilidad expresada por un jurado en relación con un homicidio al parecer claramente probado- dictamen que causó honda perturbación pública-, se abolió, para las causas penales, el juicio por jurados. Los jueces del Crimen y los Tribunales de Apelaciones en la misma materia debían intervenir, en lo sucesivo, como decisores de hecho y de Derecho.

En el mismo año 1936 se promulgó la ley de Psicópatas, núm. 9.581, de 8 de agosto, que da intervención a los jueces en la internación de enfermos mentales.

c) El decreto-ley 10.344, de 8 de febrero de 1943, procuró establecer nuevas reglas para la abreviación de los juicios civiles; pero este decreto-ley fue suspendido, sin que luego se pusiera en práctica, por la ley 10.705 de 1946.

d) La ley 10.850, de 23 de octubre de 1946, incluyó a los jueces de paz y de distrito (que, como se recordará, tenían como retribuciones de emolumentos y gastos de oficina las costas estimadas a la manera del arancel del marqués de Loreto, aunque actualizadas, pagadas por los judicandos) en las planillas presupuestales. En 1947, más de un siglo después de su iniciación, concluía un régimen del que, como único mérito, hoy puede decirse que había permitido la existencia de una justicia menor, sin que ello le exigiera sacrificio alguno al erario público (tanto en lo judicial como en lo relativo al Registro del Estado Civil).

e) La circular núm. 8 de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 6 de junio de 1949, ante una gestión promovida por el Colegio de Abogados del Uruguay, recomendó el fiel cumplimiento de la ley de 15 de julio de 1897, sobre firma letrada obligatoria.

f) El 8 de julio de 1950, la ley 11.460, introdujo importantes innovaciones. Suprimió el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones y, en su lugar, creó los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Canelones de Primero y de Segundo Turnos, la distribución de cuyos asuntos dispuso luego la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el orden alfabético de los apellidos de los demandantes. Refundió además los anteriores Juzgados Letrados de lo Correccional, en los Juzgados Letrados de Instrucción y Correccional del Primero al Sexto Turno, en Montevideo, de cuya apelación intervendrían (además de sus cometidos específicos) los Juzgados Letrados del Crimen. Creó un Tribunal de Apelaciones en lo Penal, que sustrajo de la alzada, en su materia, a los anteriores Tribunales de Apelaciones de Primero a Tercer Turno. El Juzgado Nacional de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo de Tercer Turno, suprimido en 1942, se reinstaló por esta ley. A los dos Juzgados Letrados del Crimen existentes se les sumaron otros dos: de Tercero y Cuarto Turno, que debían compartir las oficinas de los preexistentes. Y se dictó una importante cantidad de normas procesales (subrogación, distribución de causas,etc.).

g) ***La reforma constitucional de 1951*** (sancionada el 26 de octubre y plebiscitada el 16 de diciembre de ese año) dispuso la instalación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (independiente de la Administración de Justicia común) cuyos integrantes debían ser designados por la Asamblea General dentro de los treinta días de la promulgación de esa Carta, con iguales condiciones y mayorías que la Suprema Corte (art.332,inc.J). Y además, autorizó la supresión de los jueces de distrito al término de sus mandatos. La ley 12.270 de 11 de enero de 1956, ordenó que la competencia de estos magistrados pasara a los juzgados de paz.

h) Por la acordada 3.041, de fecha 3 de agosto de 1951, la Corte dispuso que el ingreso a los cargos inferiores del escalafón administrativo del Poder Judicial, debía hacerse mediante concurso, cuyo

trámite reglamentó, y es un régimen ya definitivamente incorporado a los reglamentos del instituto.

La acordada 3.196, de 16 de marzo de 1953, estableció normas para agilitar los procedimientos ante la Justicia de Paz (notificaciones, percepción de tributos, conciliaciones,etc.). Y el 19 de mayo de 1954 se dictaron normas para la reorganización del Depósito Judicial de Bienes muebles.

i) La ley 12.659, de 3 de diciembre de 1959, estableció que las oficinas judiciales no funcionarían los días sábado y dio normas sobre el cómputo de los plazos procesales.

j) El 30 de noviembre de 1960, por la ley 12.802, se dio mayor alcance a la obligación de la firma letrada obligatoria, estableciendo sus excepciones e intervención de escribanos y contadores en algunos procedimientos.

Por la ley 12.803 de la misma fecha, se aumentó a nueve los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, y se creó el primer Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo, así como los Juzgados Letrados de Pando y de Paso de los Toros (el último, tal vez como modesta compensación por los daños que la inundación de 1959 causó en esa ciudad).

k) Por la ley 13.320, de 17 de 28 de diciembre de 1964, se creó un cuarto Tribunal de Apelaciones en lo Civil (obviamente, de 4º Turno) y un segundo Tribunal en lo Penal. Se instituyó un segundo Juzgado Letrado del Trabajo, y se llevó a dieciocho (con nueve oficinas dobles en total) los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo. Se creó, además, el primer Juzgado Letrado de Aduanas. Los Juzgados Letrados del Crimen (ahora llamados "de lo Penal") fueron seis, tomando a su cargo el dictado de todas las sentencias en esa materia, limitándose los cinco Juzgados Letrados de Instrucción y Correccional (que pasaron a llamarse sólo "de Instrucción") a instruir, como su nombre lo indica, los sumarios en Montevideo. Cabe agregar la creación de Juzgados Letrados en Bella Unión y en Rosario.

l) La ley 13.355, de 17 de agosto de 1965, introdujo importantes modificaciones en los procedimientos judiciales; aclaró la competencia de los Juzgados Letrados Nacionales de Hacienda (mediante una solución que demostró ser inconveniente en la práctica y se derogó por el art.76 de la ley de 8 de septiembre de 1967); agregó la facultad de notificar por la policía en las zonas rurales y dio a la Suprema Corte la facultad de disponer la organización interna de las oficinas, lo que era muy lógico y la manera de hacer las notificaciones.

m) En aplicación de la mencionada ley 13.355, la acordada 4.332 de fines de 1965, de la Suprema Corte de Justicia, suprimió la vieja exigencia de hacer firmar con testigos las notificaciones personales cuando no es posible obtener la firma del notificado.

n) La ley de arrendamientos y desalojos núm.13.659, de 2 de junio de 1968, estableció -a los efectos de dictaminar sobre los precios de los arrendamientos de fincas para habitación y asesorar a los jueces en esta materia- la Asesoría Técnica de Arrendamientos, más conocida por la sigla DATA, la que si bien con autonomía técnica, fue dependencia funcional del Poder Judicial.

o) Con motivo de acontecimientos políticos que habrían de conducirnos al régimen de facto, el 10 de julio de 1972 se dictó la ley 14.038, llamada "de seguridad del Estado y de su orden interior", en gran parte inconstitucional y ya no aplicada, sino para recoger algunas disposiciones útiles para el Código Penal. Apartaba a la Justicia común del conocimiento de los denominados "delitos de lesa nación", que incorporaba al Código Penal Militar, y confiaba a la Justicia militar.

p) Ya en pleno período de facto -cuyos lamentables hechos damos por conocidos, por ser notorios y, además, ajenos en general al tema de este trabajo- se dictó el auto titulado "decreto institucional número 8". Ese decreto, dictado el 1° de julio de 1977, abandonó los principios tradicionales sobre administración de justicia, gene-

ralmente reconocidos por nuestra sociedad. Se desconoce la naturaleza de "Poder" del Judicial, porque "el auténtico poder público [es aquel] de que está investido el Poder Ejecutivo y que le permite hacer cumplir coactivamente las expresiones de voluntad del Estado. Hubo, pues, sobreestimación del concepto de Poder referido a la Justicia".[.....] "El Derecho Constitucional que abandonamos pagó tributo a ese error, al confundir el concepto de separación orgánica con el de separación funcional [.....] ...solamente puede admitirse como exacto con el alcance de separación funcional que por este Acto se rescata e institucionaliza".[.....] "...las democracias occidentales consagran la primacía del Poder Ejecutivo y desconocen ese dogma de la separación orgánica absoluta que traza una línea propia a la acción jurisdiccional, sustituyendo el concierto de la función estatal por el desconcierto". Por estas y otras razones confusamente expuestas en una larga y fatigosa expresión de motivos, se dispuso que los Ministros de la que, desde entonces, se llamará simplemente "Corte" de Justicia fueran designados por el Consejo de la Nación (órgano no previsto en la Constitución) a propuesta del Ejecutivo y durarán cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelectos hasta por diez años; confirió la facultad de control disciplinario del servicio judicial al Ejecutivo; los magistrados debían ser designados por el Consejo de la Nación a propuesta del Poder Ejecutivo, que podía trasladarlos o destituirlos durante los primeros cuatro años de su nombramiento, adquiriendo inamovilidad recién después de ese lapso. La superintendencia administrativa y correctiva, correspondería al Ministerio de Justicia. Empleando esos criterios, por resolución 951 del 4 de julio de 1977, el Ministerio de Educación y Cultura canceló la personería jurídica de las asociaciones de magistrados y de funcionarios judiciales.

Menos duro para la justicia fue el decreto constitucional número 12, del 10 de noviembre de 1981, porque "han desaparecido las causas que dieron mérito y fundamento a la sanción del acto institucional número 8". Aquí, la Corte recobra su calificativo de Suprema. Se crea el Consejo Superior de la Judicatura, presidido por el Ministro de Justicia e integrado, además, por los presidentes

de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Procuradores Generales de la Nación y del Estado, un legislador y el Ministro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones. Este Consejo reúne muchas de las facultades que antes correspondían exclusivamente al Ministro de Justicia: la superintendencia administrativa, correctiva y consultiva del servicio; la designación de los magistrados, su traslado; prepara el proyecto de presupuesto.

Ya en período de transición, el decreto institucional número 19 - redactado por acuerdo entre miembros del antiguo régimen y representantes de los partidos políticos, con la interesante novedad de que reconoce el recurso de amparo, que posteriormente será regulado por ley deroga tácitamente los actos 8 y 12, y convierte en leyes otros actos todavía útiles, como los que contemplan el instituto de la jubilación (9, 18). Naturalmente, luego de las elecciones de noviembre de 1984, reinstitucionalizado el país, se retornará al sistema constitucional.

q) Como novedades importantes del período de caducidad institucional, puede recordarse:

i) El decreto-ley 14.412, de 8 de agosto de 1975, que reguló el régimen de los cheques bancarios, introduciendo la primicia absoluta de los cheques de pago diferido.

ii) El decreto-ley 14.500, de 8 de marzo de 1976, que establece la actualización de las obligaciones, de acuerdo con el índice general de precios, cuando en los juicios deben liquidarse las obligaciones. Se prevé, también, la posibilidad de establecer cláusulas de garantía en los contratos, para mantener el valor de las obligaciones pactadas.

iii) El decreto 111, de 28 de febrero de 1978, del Ministerio de Justicia, que autorizó el uso de la tinta sólida o en pasta, contra la anterior prohibición legal, y siguiendo una innovación ya universalmente impuesta.

iv) El decreto 299, de 30 de mayo de 1978, que admitió el "mandato verbal" en las causas judiciales, que si bien se usaba desde la época colonial, carecía de toda fundamentación legal o reglamentaria.

v) La Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, todavía en vigencia (decreto-ley 15.365, de 30 de diciembre de 1982).

vi) El decreto-ley 14.978, de 14 de diciembre de 1979, que introdujo el régimen de conminaciones judiciales (lo que los franceses llaman *astreintes)* o sea sanciones pecuniarias, graduadas de acuerdo con la demora y el monto del asunto, para asegurar el cumplimiento de las sentencias de condena.

vii) El recurso de casación en materia civil (hoy regulado por el Código General del Proceso), suprimiendo al mismo tiempo el recurso extraordinario de nulidad notoria: decreto-ley 14.861, de 8 de enero de 1979, modificado por el decreto-ley 14.951, de 9 de noviembre de 1979.

viii) El decreto-ley 15.284, de 1° de junio de 1982, que otorga a los abogados representación procesal, sin otro requisito que la autorización del cliente en los escritos judiciales.

ix) El decreto-ley 15.648, de 22 de octubre de 1984, que estableció un nuevo régimen de reglamentación del derecho de prensa, derogando la ley 9.480 y sus modificativas.

CAPÍTULO II
DESDE LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA.

139. Una vez restablecidas las instituciones legítimas, se enriquece el acervo jurídico del país con una importante cantidad de normas legales y reglamentarias, de las que, por no extendernos en demasía, sólo citamos las que consideramos principales, y en forma sintética.

a) En 1985: la ley de amnistía 15.737, del 8 de marzo , para los delitos políticos; la ley 15.743, del 14 de mayo, concediendo con carácter excepcional la libertad anticipada y provisional para los presos comunes (que habían reclamado igualdad de trato del que se había dado a los presos políticos, alegando que ellos eran "presos sociales") y agregando como parte de la ley, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica (conocida como "Pacto de San José"); el 24 de junio, la ley Orgánica de la Administración de Justicia número 15.750, de la

que ya hemos tratado al comentar la ley de instalación de la Alta Corte de 1906 y que tiene la mayor importancia, por cuanto, tanto desde el punto de vista de la organización de los tribunales (con excepción de los penales), como de sus respectivas jurisdicciones y competencias, y control de los magistrados, sus auxiliares y los curiales, sustituye con ventaja y gran amplitud al Código de Organización de Tribunales Civiles y de Hacienda; la ley 15.783, de 28 de noviembre, que dispone la reincorporación en sus empleos y otros beneficios para los destituidos por el régimen de facto, incluyendo entre sus beneficiarios a los magistrados y otros funcionarios judiciales; la acordada 6.824, de 23 de septiembre, designa a los Ministros de los Tribunales de Apelaciones que habían sido nombrados por el anterior régimen inconstitucional, y para los cuales previamente la Suprema Corte había solicitado y obtenido la venia del Senado, a fin de legitimar esos cargos; y la acordada 6.838, de 2 de diciembre, que convalidó muchos decretos del ex-Ministerio de Justicia, dándoles valor de acordadas, por considerarlos convenientes para el servicio. (Lo mismo ocurrió con algunas decisiones similares de la época de excepción).

b) En 1986, interesa la ley de caducidad de las acciones penales contra los delitos cometidos por los funcionarios militares y policiales durante el período de facto, del 22 de diciembre, y que, impugnada mediante una solicitud de referendo popular, fue confirmada por esa vía; así como la ley de Rendición de Cuentas 15.809, del 8 de abril, que, entre otras cosas, autorizó a declarar juzgados de ciudad a los juzgados de paz de las localidades que se declarasen ciudades. El mismo año, la acordada 6.853, del 14 de abril, estableció el régimen de licencias del Poder Judicial.

c) Respecto de 1987, consideramos oportuno recordar la ley 15.903, del 10 de noviembre, que, a iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, estableció en ese organismo el Servicio de Información al Público; lo reglamentó la acordada 6.976 del 22 de abril de 1988. Y tiene muchísimo interés la ley 15.859, de 31 de marzo, que instituyó el régimen de procesamiento sin prisión para delincuentes primarios y delitos de menor gravedad; posteriormente, y a iniciativa de la Suprema Corte, se modificó por la ley 16.038, de 27 de

agosto del mismo año, agregándose como limitación, que el delito no hubiese provocado la "alarma pública".

d) Durante 1988, entre otras normas, consideramos conveniente mencionar la acordada 6.988, de 31 de octubre, que creó el Servicio de Asistencia al Penado, reglamentado luego por la acordada 7.073, de 10 de agosto. Así como la acordada 6.995, del 23 de diciembre, que estableció el Reglamento para hacer efectiva la responsabilidad de los magistrados, siguiendo la previsión del art. 114 de la ley Orgánica 15.750. Pero tal vez lo más importante fue la ley 15.982, del 18 de octubre, que promulgó el Código General del Proceso, introduciendo el régimen oral para los procesos en materia civil. Y tampoco podríamos ignorar la ley 16.002, de 25 de noviembre, llamada Ley de Inversiones Públicas, porque en ella se estableció para las ferias judiciales (vacaciones de los magistrados) los períodos comprendidos entre el 25 de diciembre y el 31 de enero del año siguiente ("feria mayor") y entre el 1° y el 15 de julio ("feria menor"); facultando a la S. Corte a disponer otra forma de recesos, por razones de mejor servicio. Y, todavía, la ley 16.011, del 19 de diciembre, que reglamentó el recurso de amparo que vimos asomar tímidamente en el decreto institucional numero 19.

e) Para 1989, cabe considerar como importantes: la ley 16.060, de 4 de septiembre, que reglamentó las Sociedades Comerciales. Y la ley 16.099, sobre libertad de opinión y de información, conocida como "ley de prensa".

f) De 1991, citaremos la ley de rendición de cuentas 16.226, del 22 de octubre, que estableció el escalafón judicial y, además, autorizó a designar único titular de dos o más juzgados de paz limítrofes, incluso de diferentes departamentos. Ese mismo año, la acordada 7.099, de 12 de abril, indicó las características formales de los escritos que se presente ante las oficinas judiciales: tamaño de las hojas, márgenes, renglones, etc. La acordada 7.104, de 18 de noviembre, y la núm.7.118 establecieron el sistema aleatorio y computarizado de distribución entre los asuntos que ingresan a los juzgados.

g) De 1992 podemos citar la ley 16.320, de 1° de diciembre (rendición

de cuentas), que creó el timbre "palacio de justicia" -mejor dicho, lo recreó: ya lo vimos recaudado sin éxito muchos años antes- a recaudar por el propio Poder Judicial, y facultó a la Suprema Corte a instalar juzgados letrados de competencia mixta en los lugares que viera ser útiles, informando de ello a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo. Este año, se introdujo importantes modificaciones al Reglamento Interno de la Suprema Corte de Justicia.

h) En 1994, es conveniente recordar la ley 16.462, del 11 de enero (de rendición de cuentas), que otorga al Ministro de Feria de la Suprema Corte de Justicia, las mismas facultades que corresponden al Presidente de la Corporación el resto del año. Además -y es importante- se restablece el deber de los jueces de concurrir diariamente a su despacho, que, durante el período de facto se había cambiado- contra disposiciones tradicionales lógicas- por el de concurrir cuando lo considerasen necesario. La ley 16.603, de 19 de octubre, introdujo algunas modificaciones al Código Civil, a fin de incorporar las innovaciones de la ley 10.783, de derechos civiles de la mujer casada.

i) Respecto de 1995, cabe citar la ley 16.713, de reforma jubilatoria, con régimen mixto de reparto y de ahorro, que incluye a magistrados y funcionarios judiciales. Por la acordada 7.276, del 15 de febrero, se crearon los Centros Piloto de Mediación en locales facilitados por el Ministerio de Salud Pública en diversos barrios de la ciudad, con la finalidad de obtener la conciliación en las pequeñas causas. Por lo acordada 7.277, del 22 de febrero, se transformó el Tribunal de Faltas en tres Juzgados de Faltas, con una oficina única, y que intervendrán en régimen de turnos.

j) La reforma constitucional- sancionada el 15 de octubre de 1996, sometida a plebiscito el 8 de diciembre de ese año, y declarada vigente por resolución de la Corte Electoral el 7 de enero de 1997- no introdujo reformas en las anteriores previsiones relativas al Poder Judicial.

140. En momentos de proceder a la redacción de este trabajo, la Suprema Corte de Justicia -en sus orígenes Alta Corte de Justicia- se apresta a celebrar sus noventa años, festividad que alcanza a todo el Poder Judicial, al que dignamente simboliza, y al que dedicamos nuestro humilde esfuerzo.

NOTAS DE LA CUARTA PARTE

(35) Quienes durante nuestra actuación fueron destacados funcionarios de la Secretaría Administrativa de la Corporación: Dres. Pereira, Rivero; Haroldo Cantos, Ruben Bordes, Martí, Arias, etc., nos habían informado cómo, sin contar con los ricos medios de las similares corporaciones de otros países, nuestra Suprema Corte ha sabido revestir a sus actos de una austera pero muy digna presentación, mereciendo por ello el respeto y consideración de su pueblo y de los visitantes extranjeros.

BIBLIOGRAFÍA DE LA CUARTA PARTE

FUNCIONARIOS: *impresiones e informaciones personales.*

DOCUMENTACIÓN VARIA (boletines, comunicados,impresiones,etc.), proporcionada por las Secretarías, Dirección General Administrativa, Biblioteca y Departamento de Publicaciones y Prensa de la Suprema Corte de Justicia.

NICOLIELLO, N. y **VÁZQUEZ PRADERI**, Luis A.: "*Tratado de Técnica Forense";* Montevideo, Edit. Amalio M. Fernández; tomo I, *passim.*

REGISTRO NACIONAL DE LEYES Y DECRETOS; Montevideo, años 1934 y siguientes, passim.

APÉNDICES



DOCTOR CLAUDIO WILLIMAN

Presidente de la República a la fecha de la instalación de la Alta Corte de Justicia, fue uno de los principales propulsores de ella. (Fotografía obtenida por gentileza del Dr. José Claudio Williman)

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DR. D. CLAUDIO WILLIMAN EN OPORTUNIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA ALTA CORTE DE JUSTICIA.

Excelentísimos señores ministros de la Altra Corte de Justicia:

El país debe estar de parabienes.

A la conquista de su normalidad institucional,acaba de agregar, por el voto de la Asamblea, la complementación de los tres Altos Poderes del Estado, creados por la Constitución.

El hecho tiene que ser considerado como un acontecimiento nacional, por cuanto importa la realización de un propósito solemnemente establecido por nuestros Constituyentes, y que ha sido desde ellos y hasta nosotros, el punto de mira de muchas actividades intelectuales y el objeto de grandes esperanzas.

Desde hace tres décadas, casi no ha pasado una Administración,sin que en una u otra forma, no se agitara el pensamiento de la organización de la Alta Corte, y sin que nuevos esfuerzos, por la realización de ese ideal, no vinieran a demostrar, de una manera bien elocuente, que ella era, en efecto, una aspiración general.

A la ley de 1880, que subordinaba el nombramiento de la Alta Corte a la aprobación de las leyes que debería aplicar, han seguido, en orden cronológico, el proyecto del gobierno de 1888; el decreto de 1890 nombrando la Comisión que presidió el ilustrado jurisconsulto doctor don Joaquín Requena, y que informó, con los merecidos elogios, el proyecto de Código de Administración de Justicia, del malogrado hombre público doctor Ángel Floro Costa; un nuevo proyecto del Gobierno de 1892; la petición del foro nacional, en 1894; un proyecto, en 1895, del doctor Alberto Palomeque; otro del gobierno, en 1899; una nueva petición, hecha al Senado, en 1901, por varios abogados de la matrícula; y después de los importantes trabajos de los doctores Domingo González y Francisco Capella y Pons, el proyecto enviado en la administración anterior, por el Sr. Batlle y Ordóñez, proyecto hoy convertido en ley y que, como ministro de Gobierno, tuve la patriótica satisfacción de suscribir, y de sostener en el seno de la Comisión de Legislación de la Honorable Cámara de Representantes.

Esas repetidas iniciativas y los diversos estudios de que cada una de ellas ha sido objeto, por hombres de todos los partidos y de todas las tendencias,

constituyen una garantía de que ha sido bien meditada y resuelta la organización de nuestra más alta Autoridad Judicial,en la forma en que acaba de quedar consagrada; y el acierto con que la Honorable Asamblea ha procedido en la designación de los miembros que debían constituirla, buscando para ello, hombres de intelectualidad superior,competencia jurídica, experiencia de la magistratura, laboriosidad y carácter, ha completado la obra magna que debe señalarse a la gratitud de la Nación.

Excelentísimos señores Ministros: la Constitución y la Ley os encomiendan una alta y delicada misión que cumplir. Debiendo juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna, os corresponderá, según la frase de nuestros Constituyentes, reprimir al poderoso, por la aplicación de la Ley, y desagraviar a los humildes. En los delitos contra el derecho de gentes, en las cuestiones de tratados con otras potencias, y en las causas de diplomáticos extranjeros, vuestra prudencia y vuestra sabiduría será la llamada a fallar.

Pero a ese cometido permanente, que tendréis que desempeñar, se agrega, en el momento actual, una misión excepcionalmente compleja, cual es la de reorganizar todo el Poder Judicial. No se llenarían los trascendentes fines que es forzoso tener en vista al crear la Alta Corte- ha dicho la comisión informante de la Cámara de Representantes- si no se le acordase de una manera completa esa facultad, poniéndola en posesión de derechos cuyo goce les es privativo, según la misma Constitución. Y la esperanza de una saludable reforma derivada de esa reorganización, la encontraba la misma comisión informante, en las condiciones elevadas que poseerían los llamados a desempeñar el alto puesto de Ministro de la Corte, y que serían suficientes para garantizar que en las designaciones de los Jueces, no primaría nunca otro interés que el de la buena administración de Justicia.

La Nación aguarda de vosotros que dentro de breve tiempo podrá ver convertidas en realidades esas esperanzas de sus representantes en la Asamblea, y confía en que la Justicia, que marca el estado de un pueblo, encontrará en vosotros -sus más celosos defensores- un empeño decidido y constante por hacerla siempre respetable y respetada.

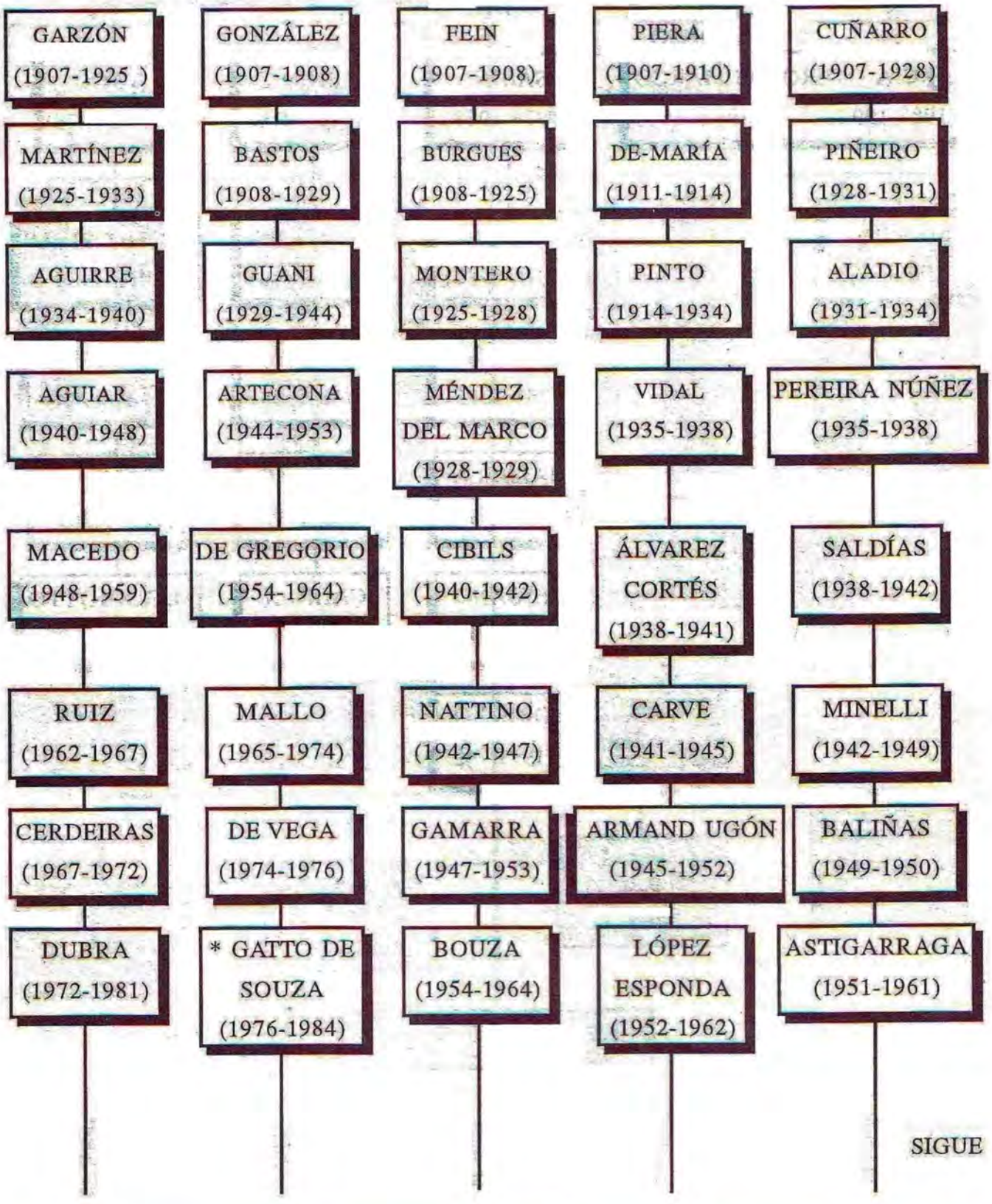
El derecho -ha dicho Ihering- no es una idea lógica, sino una idea de fuerza. He ahí por qué la Justicia, que sostiene en una mano la balanza, donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada, que sirve para hacerlo efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta. La balanza, sin la espada, es el derecho en su impotencia. Una y otra, complementándose recíprocamente, aseguran el triunfo de la Justicia. De ahí, pues, que aún cuando la separación orgánica del poder judiciario y del poder administrador -que importa el coronamiento glorioso del gran edificio del Estado Moderno- haya sido ampliamente consagrada por nuestra Ley de Alta Corte, esa separación y esa independencia no deban significar nunca, ni el aislamiento de los Poderes ni la imposibilidad de una armonía, en sus relaciones y propósitos.

Por esto, Excelentísimos señores Ministros, al declarar solemnemente instalada la Alta Corte de Justicia, deseo significar también, de una manera igualmente solemne, que a la conveniencia pública de esa armonía, dentro del recíproco respeto de los Poderes del Estado, ajustaré siempre mi conducta como Jefe del Poder Ejecutivo.

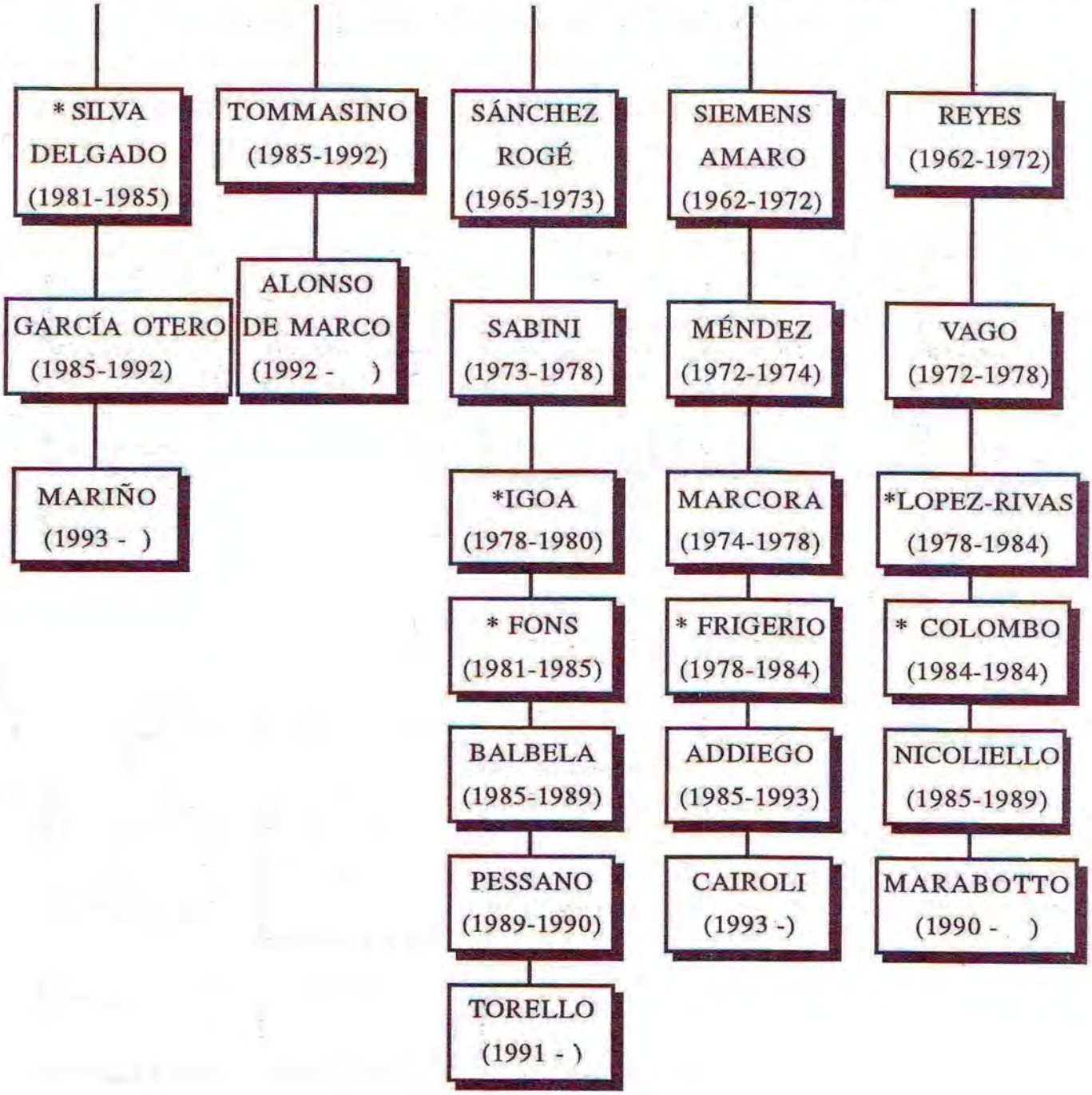
(Tomado de la publicación del Ministerio del Interior: «*Alta Corte de Justicia.-Ley de Creación y Funcionamiento.-Documentos relativos a su Instalación*», Montevideo, Barreiro y Ramos, 1908; cedido gentilmente por el Dr. José Claudio Williman).

LOS CINCO SILLONES DE LA CORTE

Damos aqui la lista de los Ministros que, durante estos noventa años, han ocupado los cinco sillones - esto es, los cargos- de la Corte. Se indica sólo sus apellidos, por razones de espacio.



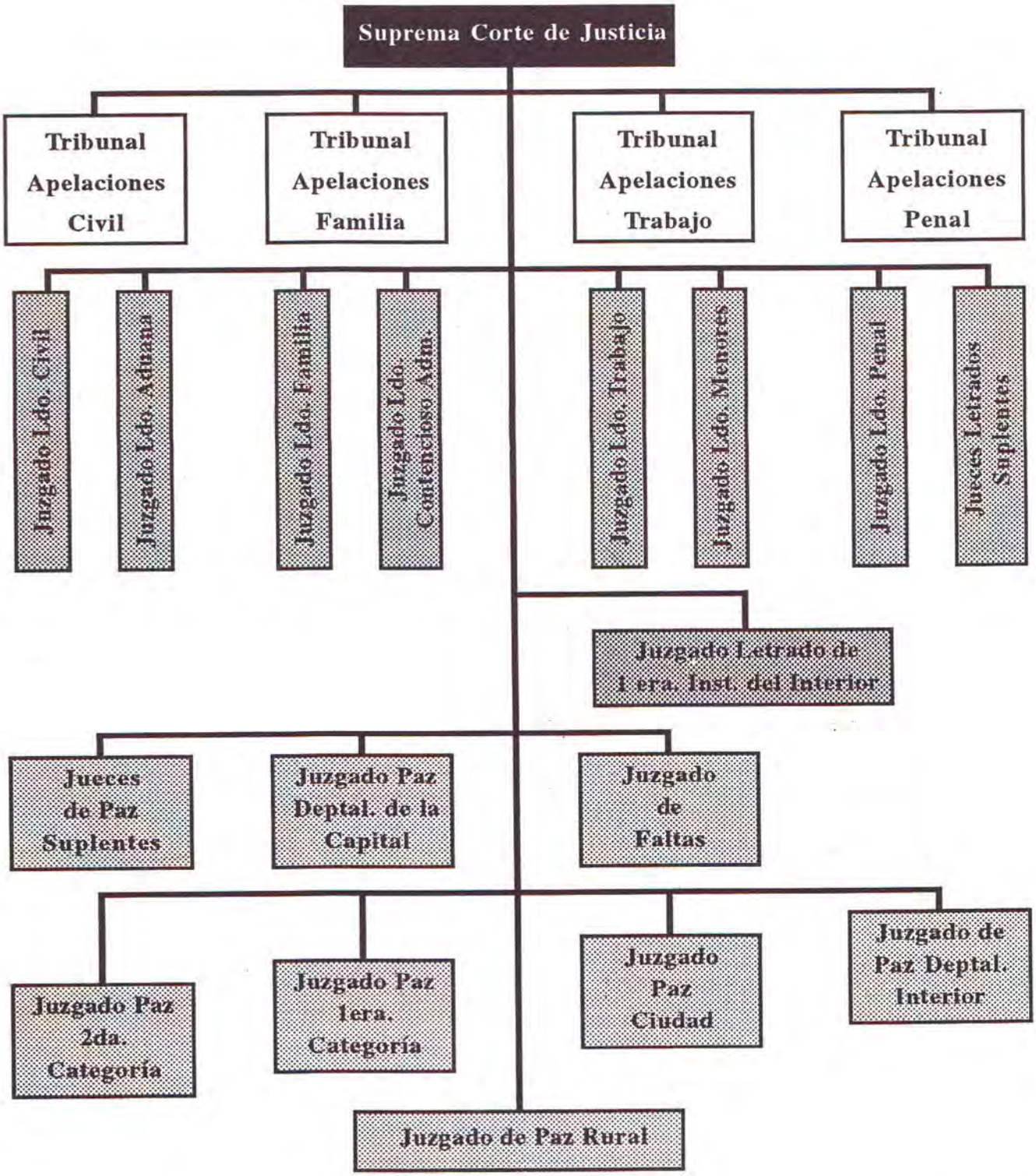
SIGUE



(*) Los nombres antecedidos de un asterisco, corresponden a los Ministros cuyo nombramiento fue realizado en el período de facto.

PODER JUDICIAL

DIVISIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ESTRUCTURA JERÁRQUICA

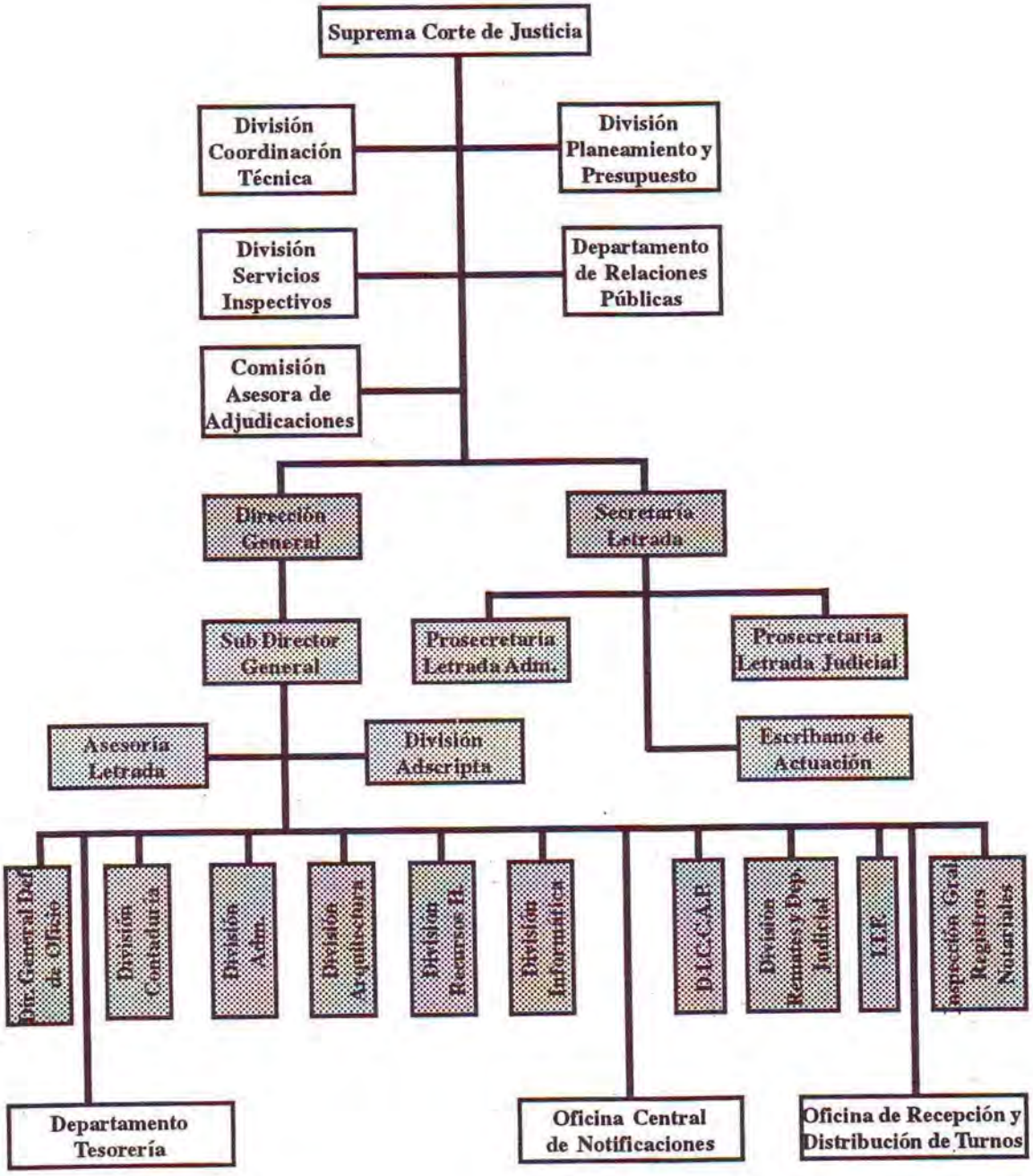


Nota: Los Magistrados de todas las categorías a la hora de tomar sus resoluciones lo hacen en forma independiente, de conformidad con la ley Orgánica de la Judicatura del Poder Judicial

PODER JUDICIAL

DIVISIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ORGANIGRAMA 1997



Simbología

Unidad Organizacional | Línea de autoridad formal | Linea de asesoría

Nota: El presente organigrama representa la estructura jerárquica de los Servicios Administrativos de Apoyo a las Oficinas Jurisdiccionales, de acuerdo al funcionamiento actual, a lo dispuesto en las Leyes de Presupuesto y Resolución de la Suprema Corte de Justicia N° 1.344 del 18 de agosto de 1986 que reglamenta las funciones de la Dirección General de los Servicios Administrativos.

ÍNDICE

Introducción 7

Primera Parte: Antecedentes

Sección Primera: La Justicia Colonial española 10
Capítulo I: Autoridades judiciales con jurisdicción sobre la Banda Oriental(a]el Rey-b]El Real y Supremo Consejo de Indias-c]Las Reales Audiencias-d] El Virrey-e]El Gobernador.El Consulado). 10
Capítulo II: El Cabildo (a]el Alcalde-b]Jurisdicción territorial-c]Una pobreza notoria) 13
Capítulo III: Los cabildantes (a]designación y condiciones exigidas-b]Retribuciones.-c]El vestido del cabildante 17
Capítulo IV: El local del Cabildo (a]El primer local -b]Gronardo-c] los locales sucesivos-d]La Sala Capitular-e]Fin del Cabildo. 21
CapítuloV: El Gobernador. 26
Capítulo VI: El Consulado. 28
Capítulo VII: Otros órganos judiciales menores 30

Sección Segunda: Durante la dominación británica 31
Capítulo I: Repercusiones de la invasión. 31
Capítulo .II:Expresiones de un elevado criterio jurídico entre nuestros cabildantes. 32

Sección Tercera: Las postrimerías del dominio español 34
Capítulo Único. 34

Sección Cuarta: La «Patria Vieja»(1818-20) 36
Capítulo I: La Revolución de Mayo. 36
Capítulo II: Innovaciones y continuidades. 37

Sección Quinta: dominación lusitana 38
Capítulo I: Desde el predominio porteño hasta la invasión portuguesa. 38
Capítulo II: La Cámara de Apelaciones. 39
Capítulo III: Los principales Acuerdos de la Cámara de Apelaciones. 39

Notas de la Primera Parte 42
Bibliografía de la Primera Parte 45

Segunda Parte: La Justicia Nacional.

Sección Primera: El período preconstitucional(1825-1830) 49
Capítulo I: La transición 49
Capítulo II: El Reglamento «Provisorio» de la Administración de Justicia 52

Sección Segunda: La Constitución de 1830 56
Capítulo I: Proceso de formación parlamentaria de de la Primera Carta 56
La Constitución 58
La Justicia en la Constitución de 1830 60

Sección Tercera: El período posconstitucional 65
Capítulo I: La legislación complementaria 65
Capítulo II: La codificación 69

Sección Cuarta: El Tribunal Superior de Justicia 72
Capítulo I: Aspectos generales 72
Consecuencias de la Guerra Grande 76
Capítulo II: Los Tribunales en actividad 76
Los locales del Tribunal 82

Notas de la Segunda Parte 83
Bibliografía de la Segunda Parte 86

Tercera Parte: De la Alta Corte de Justicia a la Suprema Corte de Justicia.

Introducción 92

A) LA ALTA CORTE DE JUSTICIA

Sección Primera: Razones de su demora 93
Capítulo Único 93

Sección Segunda: Hacia la consagración legislativa 95
Capítulo I: Los primeros proyectos 95
a) El proyecto más antiguo 95
b) Un segundo proyecto. 97
c) El tercer proyecto 98
d) El cuarto proyecto 98
e) El quinto proyecto 100
f) El sexto proyecto 100
g) El séptimo proyecto 101
h) El proyecto final, que habría de culminar en ley 103
Capítulo II: Peculiaridades y coincidencias de algunos proyectos 105

El texto de la ley 3346 de 26/X/1907 *y su comentario* 106

Sección Tercera: Integración de la *primera Alta Corte de Justicia* 134
Capítulo I: Intenso interés popular 134
Capítulo II: Los primeros Ministros 135
Capítulo III: Breves perfiles biográficos 136

Sección Cuarta: Solemnidades y festejos 139
Capítulo I: La instalación de la Alta Corte y los actos programados 139

Capítulo II: La Alta Corte de Justicia
entra en la Historia 141
Capítulo III: El acta constitutiva y otras reliquias históricas 143
Capítulo IV: La Alta Corte en actividad 145

Sección Quinta: La Corte en la Constitución de 1918 147
Capítulo I: La Carta de 1918 147

Sección Sexta: La legislación posterior 148
Capítulo Único 148

Sección Séptima: La ubicación de la Corte 154
Capítulo Único 154

B) LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Sección Primera: La Constitución de 1934 155
Capítulo I: Una nueva Carta 155
Capítulo II: La Justicia en la Constitución de 1934 157

Sección Segunda: Integración de la Suprema
Corte de Justicia en 1934 165
Capítulo Único 165

Notas de la Tercera Parte 166
Bibliografía y otras fuentes de la Tercera Parte 172

Cuarta Parte: Los últimos tiempos.

Introducción 176

Sección Primera: Las novedades más destacables 177
Capítulo único 177

Sección Segunda:Leyes,decretos,acordadas y *resoluciones* 180
Capítulo I: La nueva normativa 180
Capítulo II: Desde la restauración de la República 187

Notas de la Cuarta Parte 191
Bibliografía de la Cuarta Parte 192

Apéndices:

Discurso del Dr. Claudio Williman, en 1907 196

Los Cinco Sillones de la Corte 199

Organigrama del Poder Judicial 200

Diseño Gráfico
de esta edición
patrocinado por:



Se terminó de imprimir
en el mes de Noviembre de 19
en **TRADINCO S.A.**
Minas 1367 - Tel. 409 44 63
Montevideo - Uruguay

Dep. Legal Nº 308.858 / 97
Edición al amparo del Art. 79 de la ley 13.349
(Comisión del Papel).